

La Serena, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Que se instruyó esta causa Rol N°8-2011 (Antofagasta), para investigar el delito de Homicidio Calificado, en grado consumado, cometido en contra de JOAQUÍN SEGUNDO ESPINOZA OJEDA, fallecido el día 15 de septiembre de 1973 en dependencias de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta; y determinar la responsabilidad penal que en ese hecho correspondió a PATRICIO GERARDO FERRER DUCAUD, cédula nacional de identidad N°3.642.237-8, chileno, natural de Santiago, nacido el 27 de marzo de 1934, casado, coronel en retiro del Ejército, recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario “Punta Peuco”, y MIGUEL ÁNGEL LORCA ESCOBAR, cédula nacional de identidad N°6.140.752-9, chileno, natural de Los Andes, nacido el 10 de mayo de 1950, casado, suboficial en retiro del Ejército, domiciliado en calle Francisco Silva Gajardo N°1165, comuna de Quillota.

El proceso de inició por requerimiento de la Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fojas 1 y siguientes, por el delito de homicidio y asociación ilícita cometidos en la persona de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, 35 años de edad al momento de su muerte, interpuesto por doña Beatriz Pedrals García de Cortázar, a efectos de investigar el hecho y circunstancia que ocasionó la muerte de la víctima, la identidad de los responsables, acusarlos y en definitiva condenarles a las penas pertinentes por los delitos indicados.

A fojas 141, doña Alicia Lira Matus, en representación de la “Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos” (AFEP), dedujo querella criminal por los delitos de homicidio y asociación ilícita, en contra de todos aquellos que resulten responsables, cometido en la persona de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, solicitando se acoja a tramitación y se condene a los responsables al máximo de la pena legal, con costas.

A fojas 178, don Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en representación del Programa Continuación Ley N°19.123, dedujo querella criminal en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de homicidio calificado, cometido en contra de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, solicitando acogerla a tramitación, decretar las diligencias que se solicitan, someter a proceso a los que resulten responsables, acusarlos, y en definitiva, sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fojas 1331, se sometió a proceso a PATRICIO GERARDO FERRER DUCAUD, como autor del delito de homicidio calificado, en grado consumado, cometido en contra de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, hecho cometido en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, el día 15 de septiembre de 1973.

A fojas 1382, se revoca por la ltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, el auto de procesamiento de fojas 1331, estimando que los antecedentes aportados no eran suficientes para presumir de manera fundada la participación del inculpado en los hechos materia de la investigación en los términos exigidos en la letra b) del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal para justificar el procesamiento, por lo que se declara que Patricio Gerardo Ferrer Ducaud no es procesado.

A fojas 2119, se sometió nuevamente a proceso a PATRICIO GERARDO FERRER DUCAUD, y además a MIGUEL ÁNGEL LORCA ESCOBAR, en calidad de autores del delito de homicidio calificado, en grado consumado, de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, hecho cometido el día 15 de septiembre de 1973, en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta.

A fojas 2342, se confirma por la ltma. Corte de Apelaciones de esta ciudad, el auto de procesamiento de fojas 2119, estimando que, de los antecedentes agregados a la causa, devienen presunciones fundadas con relación a que a los procesados les ha cabido participación en los hechos materia de la investigación, en calidad de autores.

A fojas 2353, se declaró cerrado el sumario.

A fojas 2359, se dictó acusación fiscal en contra de Patricio Gerardo Ferrer Ducaud y Miguel Ángel Lorca Escobar, como autores del delito de homicidio calificado, en grado consumado, cometido en la persona de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 número 1 del Código Penal vigente a la época de los hechos y que fue perpetrado con alevosía,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

en la modalidad de actuar a sobre seguro, el día 15 de septiembre de 1973, en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta.

A fojas 2379, la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), dedujo acusación particular en contra de Patricio Gerardo Ferrer Ducaud y Miguel Ángel Lorca Escobar, por la participación que les cabe en calidad de autores del delito de homicidio calificado, en grado consumado, circunstancia primera del artículo 391 N°1 del Código Penal, cometido en perjuicio de don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, invocando en contra de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales y costas de la causa.

A fojas 2387, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, dedujo acusación particular en contra de Patricio Gerardo Ferrer Ducaud y Miguel Ángel Lorca Escobar, por la participación que les cabe en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado, en grado de consumado, circunstancia primera del artículo 391 N°1 del Código Penal, cometido en perjuicio de don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, invocando en contra de los acusados la circunstancia agravante prevista en el numeral 8 del artículo 12 del Código Penal, solicitando que sean condenados a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales.

A fojas 2516, el abogado Sebastián Ignacio Sasmay Martínez, en representación del acusado Miguel Ángel Lorca Escobar, interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción penal y en subsidio de esta, amnistía. A su vez, en el primer otrosí de su presentación contestó subsidiariamente la acusación fiscal y acusaciones particulares, solicitando se condene a su representado en calidad de cómplice por los hechos investigados, y en subsidio de lo anterior, se aplique la prescripción y amnistía, y se acoja la aminorante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, por haber transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción y se le consideren las



circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en los numerales 6° y 8° del artículo 11 del Código Penal y la atenuante del artículo 211 en relación al 214 del Código de Justicia Militar, aplicando la pena reducida en 2 o 3 grados. Finalmente pidió que se le conceda algunos de los beneficios de la Ley N°18.216 o en subsidio acoger la solicitud de cumplimiento de condena en su domicilio.

A fojas 2522, se confiere traslado a los querellantes de la excepción de previo y especial pronunciamiento opuesta por el abogado defensor Sebastián Sasmay Martínez.

A fojas 2528, la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, evacúa traslado de la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida a fojas 2516 por la defensa del acusado Miguel Lorca Escobar, solicitando su rechazo.

A fojas 2544, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, evacúa traslado de la excepción de previo y especial pronunciamiento deducida a fojas 2516 por la defensa del acusado Miguel Lorca Escobar, solicitando su rechazo.

A fojas 2560 el abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación del acusado Patricio Gerardo Ferrer Ducaud, contestó la acusación fiscal y las particulares, solicitando se absuelva a su representado por encontrarse extinguida la acción penal por aplicación de la Ley de amnistía, y en subsidio, pide se absuelva por encontrarse prescrita la acción penal y, para el caso que se dicte sentencia condenatoria, invoca la aplicación de la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N°1 del Código Penal, para en evento de estimarse incompleta eximente del artículo 10 N°10 del mismo cuerpo legal, así como las establecidas en los numerales 6 y 8 del código señalado, la media prescripción, de conformidad al artículo 103 del Código Penal y la atenuante contemplada en los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, además de otorgarse alguna medida alternativa de cumplimiento de condena, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.216, en especial la remisión condicional de la pena.

A fojas 2568, se recibió la causa a prueba.

A fojas 2595, se certificó el vencimiento del término probatorio.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

A fojas 2603, se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fojas 2654, se trajeron los autos para dictar sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**En cuanto a las excepciones de previo y especial pronunciamiento de prescripción y amnistía:**

**Primero:** Que a fojas 2516, el abogado Sebastián Ignacio Sasmay Martínez, en representación del acusado Miguel Ángel Lorca Escobar, invocó a favor de su defendido como excepción de previo y especial pronunciamiento, la prescripción de la acción penal prevista en el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, en relación con lo dispuesto en los artículos 94 y 95 del Código Penal. Funda su petición en que los hechos investigados se habrían producido el 15 de septiembre de 1973, por lo que han transcurrido casi cincuenta años de los hechos investigados, de modo que la acción penal se encuentra prescrita. A su vez, indica que se ha extinguido la responsabilidad penal que hubiera existido respecto de los hechos de la causa según lo dispone el artículo 93 N°6 del Código Penal, que establece que la responsabilidad se extingue por la prescripción de la acción penal. Expone que las normas antes referidas deben relacionarse con lo dispuesto en el artículo 102 del Código Penal. Aclara que el plazo de prescripción para el delito investigado en este proceso sería de diez años, toda vez que la penalidad prevista por la ley es presidio o reclusión mayor en su grado máximo, por lo que, en razón de los casi cincuenta años que han transcurrido, la prescripción de la acción penal se habría producido en el año 1983. Señala que, de considerar el tribunal que los plazos de prescripción estuvieron suspendidos durante el régimen militar, dicha prescripción nuevamente comenzó a correr desde el año 1990, por lo que estaría igualmente cumplida. Prosigue afirmando que los hechos no constituyen delito de lesa humanidad, ya que no se dan los presupuestos que refiere el artículo 1 de la Ley N°20.357 y que, por lo demás, esa ley comenzó a regir recién el 18 de julio del año 2009, por lo que sus disposiciones sólo serían aplicables a hechos cuya ejecución sea posterior a su entrada en vigencia. En subsidio de lo indicado, opuso la excepción



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

de amnistía, sosteniendo que los hechos se encuentran dentro del ámbito del Decreto Ley N°2.191 del año 1979 al haber acaecido dentro del período que reguló esa normativa. Por ello, solicita se absuelva a su representado por encontrarse extinguida su responsabilidad por amnistía.

**Segundo:** Que, a fojas 2528, la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), evacuó el traslado respecto de la excepción de previo y especial pronunciamiento presentada por la defensa de Miguel Lorca Escobar, solicitando el rechazo de las excepciones de prescripción de la acción penal y amnistía, con expresa condenación en costas, por tratarse de crímenes de lesa humanidad y de guerra, conforme al ordenamiento jurídico interno y al Derecho Internacional, por cuanto existe una obligación internacional de “ius cogens”, de investigar y sancionar a los autores de estos crímenes. Añade que existen ciertos delitos o crímenes que, por su particular y excepcional gravedad, agreden y hieren no solamente a sus víctimas, sino también a la conciencia misma de la humanidad. Las consecuencias de tal calificación son que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y que no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Cita normativa y jurisprudencia nacional e internacional.

**Tercero:** Que, a fojas 2544, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evacuó el traslado solicitando el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento deducidas por la defensa del acusado Miguel Lorca Escobar, sobre la prescripción de la acción penal y amnistía, señalando que, aunque se ventilen como excepciones distintas, en sus basamentos son equivalentes, por lo que las replica en su conjunto. Indica que la Excma. Corte Suprema en reiterada jurisprudencia, validándose del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, ha rechazado tajantemente la aplicación de los institutos de la amnistía y la prescripción. Señala, que estamos en presencia de delitos internacionales, criminalizados por la comunidad de naciones de la cual forma parte Chile, por lo que es imposible aceptar amnistías o



prescripciones en esta materia, por cuanto esas normas están en contradicción con normas del *ius cogens*, imperativas, inderogables y vinculantes para el Estado de Chile, que inevitablemente se imponen por sobre la normativa nacional. Por lo que, tratándose de crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, el derecho internacional no reconoce amnistías ni prescripciones y ninguna otra causal que exima de responsabilidad penal. Cita abundante normativa internacional.

**Cuarto:** Que, tal y como han venido razonando de manera consistente los tribunales superiores de justicia, para determinar la eventual aplicabilidad de la normativa sobre prescripción, así como la operatividad de la autoamnistía dispuesta por el Gobierno Militar a través del D.L. 2.191 del año 1979, es menester establecer previamente si la conducta reprochada puede o no encuadrarse en la figura de crimen de lesa humanidad, toda vez que existe prácticamente unanimidad en la doctrina tanto nacional como internacional, respecto de la imprescriptibilidad e inamnestiabilidad de dicha categoría de ilícitos. Siguiendo el razonamiento que en su oportunidad desarrollara latamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, el asesinato podía y debía ser considerado un crimen de lesa humanidad desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incluso con anterioridad al golpe de Estado del año 1973, si se verificó bajo los supuestos previstos para la caracterización de los “Crímenes contra la Humanidad” en el artículo 6 del Estatuto de Nuremberg, esto es, si se trata de asesinatos u otros actos inhumanos cometidos contra la población civil, independientemente de que haya habido una situación de guerra o no, en el marco de una persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, incluso con prescindencia de la legislación interna del país en que se haya perpetrado. Valga recordar que en diciembre del año 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg”, y que, en consecuencia, es posible entender, tal como lo hace la Corte Interamericana, que *los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque*



*generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad.* Esta conceptualización de los delitos de lesa humanidad ha sido además incorporada a diversos instrumentos internacionales relacionados con la persecución penal, en particular los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia (25 de mayo de 1993) y Ruanda (9 de noviembre de 1994), cuyos artículos 5 y 3, respectivamente, reafirman que el asesinato constituye un grave crimen de derecho internacional. Este criterio fue corroborado por el artículo 7 del Estatuto de Roma (17 de julio de 1998) que creó la Corte Penal Internacional, que entiende por “crimen de lesa humanidad” *cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato*, norma que además, se encuentra incorporada a nuestro Ordenamiento Jurídico con rango a lo menos supralegal, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República.

**Quinto:** Que, por otro lado, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad responde a un principio de derecho internacional que se advierte ya en el tenor de la resolución 1067 (XXXIX) del año 1965 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, que en su letra D urge a los Estados a continuar con sus esfuerzos para asegurar, en concordancia con el Derecho Internacional, que los responsables por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad sean perseguidos, aprehendidos y sancionados por los tribunales competentes, así como la resolución 1158 (XLI) del año 1966 que requiere de los Estados la adopción de cualquier medida necesaria para prevenir la aplicación de estatutos limitativos a los crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, y que se prosigan los esfuerzos para asegurar la detención, extradición y sanción de las personas responsables de dichos crímenes. Ambas resoluciones, entre otras declaraciones solemnes y convenciones para el castigo de los crímenes de lesa humanidad son citados en el preámbulo de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa





humanidad, adoptada y abierta a firma en noviembre del año 1968, y que entró en vigor internacional en noviembre de 1970. Aún más, en diciembre del año 1973, apenas un par de meses después de la muerte del señor Espinoza Ojeda, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó los “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad”, que en su numeral primero disponen expresamente que *Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y **cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido**, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas*, dando cuenta de este modo de la existencia, a lo menos, de una norma consuetudinaria de Derecho Internacional a la época de la ocurrencia de los hechos materia de autos, que torna inaplicable la institución de la prescripción a esta clase de ilícitos, y que se encuentra actualmente recogida formalmente en un tratado internacional sobre Derechos Humanos, el que si bien no ha sido ratificado aún por nuestro país, ha sido entendido por nuestra Corte Suprema como la expresión formal de la costumbre internacional preexistente sobre la materia, gozando del estatus de *ius cogens*. Al efecto, es posible citar, entre otros el denominado “Caso Molco”, en el cual, por sentencia de trece de diciembre de 2006, nuestro máximo tribunal sostuvo que, *si bien la norma convencional citada no se encuentra vigente en Chile, nada obstaría al reconocimiento de una norma de derecho consuetudinario y de sello similar que sí pueda vincular al Estado, en la medida que concurren los elementos que permiten acreditar la existencia de una costumbre jurídica internacional, cuales son la práctica de los Estados “como elemento material de ésta” y la “opinio iuris” internacional*, enfatizando que *nuestro país no ha sido “objeto persistente” del principio de imprescriptibilidad, figura mediante la cual un Estado, por actos positivos e inequívocos, se opone no al nacimiento de la costumbre internacional, pero sí a su vinculación con esa norma*. Tras analizar las consideraciones contenidas en el preámbulo de la Convención, que estiman demostrativas del grado de conciencia adquirido ya en esa época por



la Asamblea General de Naciones Unidas acerca de la vital importancia asignada a la represión efectiva de esos crímenes, concluye que la “aplicación universal” del principio de imprescriptibilidad formaba parte, ya en aquel tiempo, del acervo cultural del mundo civilizado, de todo lo cual deriva que la regla en cuestión ya operaba como derecho consuetudinario internacional.

**Sexto:** Que, en lo que mira a la eventual aplicación del D.L. 2.191 de amnistía, por definición ella implicaría un incumplimiento del compromiso adquirido por los Estados en el marco de Naciones Unidas para la persecución y sanción de los crímenes contra la humanidad, contenido en múltiples declaraciones y resoluciones entre las cuales ciertamente se encuentran las resolución 1067 (XXXIX) del año 1965 y 1158 (XLI) del año 1966, ambas del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, referidas en el motivo precedente. Especial importancia en la materia adquieren los Principios proclamados en la Resolución 3074 de la Asamblea General, que en el numeral octavo indican que *Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad*. Esta última resolución, junto con otras como las 827 y 955 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los Estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia y para Ruanda son citados en el fallo de la Corte Interamericana en el caso “Almonacid” como fundamentos de la imposibilidad del otorgamiento de amnistías por crímenes de lesa humanidad, lo que refuerza además con la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que impone a los Estados Partes el deber *de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos*. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y de no hacerlo, permitiendo que tal violación quede impune y no se restablezca, en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, en particular en lo que mira a las garantías judiciales previstas en su artículo 8 y al derecho a protección judicial contemplado en el artículo 25, se configura un incumplimiento de la obligación de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.

Que, por lo que se ha venido considerando, este sentenciador estima que, es incompatible normativamente aplicar una amnistía a crímenes de lesa Humanidad, porque están en juego normas de *ius cogens* por las cuales la penalización de estos ilícitos es obligatoria, y así ha sido reiteradamente resuelto por los tribunales superiores de justicia, al punto que el propio perito propuesto por el Estado de Chile en el caso “Almonacid” afirmó en dictamen presentado ante la Corte Interamericana que, reconociendo la incompatibilidad de este Decreto Ley con el ordenamiento democrático y los tratados de derechos humanos vigentes en Chile, explícita e implícitamente la Corte Suprema ha denegado de hecho y de derecho su aplicación en los casos de más graves violaciones de derechos ocurridas en Chile durante la dictadura militar, lo que se ha verificado de manera creciente y sistemática ya desde el año 1998. Agregó que, a su juicio, el decreto en cuestión no pasa de ser *un papel escrito en el cual consta una resolución dictada por el gobierno de facto, con un número y unos considerandos que le llamamos Decreto Ley de Amnistía, pero como norma vigente en Chile [...] prácticamente no existe, puesto que los tribunales sistemáticamente no lo aplican.*

**Séptimo:** Que la descripción fáctica contenida en la acusación fiscal materia de autos, da cuenta de la detención del señor Espinoza Ojeda por personal militar, por la mera circunstancia de haberse visto involucrado en un accidente vial con un vehículo que transportaba personal de las fuerzas armadas, -que fue interpretado *a posteriori* como un intento ya sea de agresión o de liberación de detenidos-, y su posterior traslado a instalaciones públicas donde se procedió a su ejecución extrajudicial, hechos ocurridos el día 15 de septiembre de 1973, y que se encuadran sin lugar a dudas dentro de una política sistemática y generalizada destinada a provocar temor y sumisión en la población civil y desarticular cualquier oposición al régimen militar, que caracterizó los primeros



meses de la dictadura, y que se encuentra ampliamente recogida en documentos oficiales, como el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o “Informe Rettig”, que contempla entre las distintas formas de violación de derechos humanos durante el período analizado, la existencia de diversas modalidades de ejecuciones al margen de todo proceso, que técnicamente denomina ejecuciones extra-judiciales o extra-legales, y que incluyen casos de utilización de la llamada “Ley de la Fuga”, así como casos de ejecuciones que no se pretendieron justificar mediante ninguna explicación, algunas de las cuales se practicaron en contra de víctimas que estaban físicamente en poder de sus captores, tal y como sucedió en el caso de autos. En concreto, la época más violenta de todo el período represivo se corresponde con los primeros meses del gobierno de facto, pudiendo indicarse a vía ejemplar que, de las 3.197 víctimas de ejecuciones y desapariciones forzadas identificadas por el Informe Rettig, 1.823 se produjeron en el año 1973.

De todo lo expuesto se desprende que, dado que los sucesos de que trata esta investigación corresponden a crímenes contra la humanidad, al ocurrir en un contexto propio de tal categoría de ilícitos, y que en tal carácter resulta mandatorio para todos los órganos del Estado dar estricta aplicación a las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los cuales excluyen cualquier posibilidad de beneficiar a los responsables de tales ilícitos con instituciones como la prescripción de la acción penal o la amnistía, es que se desecharán las alegaciones formuladas por el defensor Sebastián Ignacio Sasmay Martínez.

#### **En cuanto al fondo:**

**Octavo:** Que los hechos en que se fundó la acusación son los siguientes:

A) Que el día 15 de septiembre de 1973, a raíz de un accidente vehicular producido en una arteria de la ciudad de Antofagasta en que se vio involucrado un móvil conducido por Joaquín Espinoza Ojeda que se encontraba detenido en la calzada producto de un desperfecto mecánico y un vehículo militar que resultó volcado; personal de las Fuerzas Armadas procedió a su detención, trasladándolo a la Intendencia de la Región de Antofagasta, específicamente al segundo piso de dicho edificio.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

B) Que, en una de las dependencias ubicadas en las proximidades de la oficina del Intendente, junto al Coronel Adrián Ortiz Gutmann (fallecido) se encontraba el Mayor Patricio Ferrer Ducaud, vestido de civil, quien a la sazón se desempeñaba como Jefe del Departamento II de Inteligencia Militar del Cuartel General de la Sexta División de Ejército, y en el exterior de dicha oficina, se encontraba la víctima custodiado entre otros por el Cabo Segundo Miguel Ángel Lorca Escobar, Instructor de la Escuela Blindados de Antofagasta y el Cabo Alumno Pedro Reinaldo Silva Álvarez, quien momentos previos a los hechos se había volcado en el vehículo militar en el que transitaba al tratar de evitar el choque con el vehículo de la víctima que se encontraba en panne en la ruta.

C) Que, después de una conversación del personal militar en esa dependencia de la Intendencia, el coronel Ortiz Gutmann salió sobresaltado, abalanzándose sobre la víctima, ordenando en ese instante al Cabo Lorca Escobar que le disparara con el arma larga que portaba, haciendo lo mismo el Mayor Ferrer Ducaud con su arma de puño, ejecutando ambos al detenido, propinando el referido Mayor, con su arma de fuego corta, disparos en el sector de su ulna y costilla izquierda, mientras que el Cabo Lorca Escobar le propinó dos disparos en la cabeza con su carabina garant.

D) Que, producto de la dinámica descrita, la víctima resultó con dos heridas transfixiantes en la cabeza, que produjeron estallido de cráneo y destrucción de masa encefálica y, al menos, un tercer impacto en la región intercostal izquierda, ocasionándole la muerte por *"traumatismo craneano y torácico por proyectiles balísticos únicos"*, según se desprende del informe pericial médico forense de fojas 1852.

**Noveno:** Que, en virtud de los hechos referidos en el motivo precedente, el Tribunal acusó a Patricio Gerardo Ferrer Ducaud y a Miguel Ángel Lorca Escobar, como autores, en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal del delito de Homicidio Calificado, en grado de consumado, cometido en la persona de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, estimando concurrente la circunstancia primera del artículo 391 N°1 del Código Penal, esto es, actuar con alevosía. Valga hacer presente que, a la época de los hechos, el delito de homicidio calificado se



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

encontraba sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.

**En relación con la existencia y fecha de muerte de la víctima Joaquín Segundo Espinoza Ojeda:**

**Décimo:** Que, de la partida de nacimiento agregada a fojas 55 emana que don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda nació en la ciudad de Antofagasta el 24 de septiembre de 1937; esa inscripción lleva el número 1204 en el Registro de Nacimientos del año 1937 y sus padres eran don Joaquín Espinoza Ríos y doña Elena Ojeda Ávila, información que además es corroborada con los antecedentes de la víctima remitidos por el Programa Continuación Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, a fojas 8 y siguientes.

Por su parte, el certificado de defunción agregado a fojas 56, da cuenta de que la víctima falleció a las 16:30 horas del día 15 de septiembre de 1973, en la ciudad de Antofagasta. De la conjunción de estos documentos surge que el ofendido tenía 35 años al momento de su muerte.

**En relación con la causa de muerte:**

**Undécimo:** Que, se señala en el certificado de defunción agregado a fojas 56, y en el certificado médico de defunción agregado a fojas 59, que la muerte de don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda se produjo por “destrucción masa encefálica/ fracturas múltiples de cráneo, lesiones debidas a proyectil de arma de fuego”.

El médico Sr. Mamerto Gorena, certificó la muerte de la víctima, según se desprende del documento agregado a fojas 59. En ese documento, datado el 17 de septiembre de 1973, se señala que don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda falleció a las 16:30 horas del día 15 de septiembre de 1973, en la comuna de Antofagasta, cuya identidad se comprobó a través de su cédula de identidad N°173060 del gabinete de Antofagasta. A su vez, se agregó a fojas 87, el protocolo de autopsia N°144/73 de 29 de septiembre de 1973, suscrito por el Dr. Mamerto Gorena, el que indica que el día 17 de septiembre de ese mismo año, en dependencias de la Morgue Municipal de Antofagasta, se practicó la autopsia al cadáver de don Joaquín Espinoza Ojeda, quien fue enviado por militares de la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Jefatura de Zona en Estado de Sitio de Antofagasta, fallecido a consecuencia de disparos de arma de fuego. En cuanto al examen físico, se estableció que correspondía a: “cadáver de sexo masculino, de 38 años de edad. Obeso. Fue enviado con las siguientes prendas de vestir; Chaleca de lana celeste, camiseta blanca, calzoncillos blancos, pantalón de género negro, calcetines plomos, zapatos negros. Cabeza: dos heridas de bala transfixiantes. Una penetra por el mentón y sale a nivel del cuello cerca del occipital. Otra con entrada en sien izquierda y salida en región occipital. Las dos heridas producen estallido y destrucción total de cerebro y cráneo. Un tercer impacto en región intercostal izquierda a nivel de la línea axilar anterior, sale por el centro del tórax a nivel del cuerpo del esternón.” En sus conclusiones indicó: “causa de muerte; estallido de cráneo, destrucción de masa encefálica; lesiones debidas a proyectiles de arma de fuego”.

**Duodécimo:** Que, a fojas 11 de este proceso, se agregaron las **páginas 262 y 263 del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación**, donde se indica que: “El 15 de septiembre de 1973 fue muerto por funcionarios del Ejército, Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, de 36 años de edad, marinero de cubierta, militante socialista. Según la versión oficial, aparecida en el diario “El Mercurio de Antofagasta” de 17 de septiembre, bajo el titular; “Activista Muerto en la Intendencia”, un activista político que provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector del Trocadero y posteriormente agredió a un Jefe del Ejército que lo interrogaba, fue muerto en la tarde del sábado por la escolta del oficial militar. El certificado de defunción del afectado indica como causa de la muerte, heridas a consecuencia de proyectil de arma de fuego. Prosigue la Comisión señalando que, según los testimonios recibidos, el día de los hechos, el automóvil de Espinoza sufrió un desperfecto en una calle de la ciudad de Antofagasta, deteniéndose para tratar de repararlo. En ese momento y cerca del lugar en que se hallaba estacionado, chocó un jeep militar con una camioneta, accidente del cual se responsabilizó al afectado, llevándolo detenido a la Intendencia. Al enterarse de los hechos, su familia concurre a la Intendencia y luego al Hospital, donde encuentra sus restos mortales los que son entregados el día 17. La



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Comisión se formó la convicción que Joaquín Espinoza fue ejecutado por agentes del estado, en ejercicio de violencias innecesarias, produciéndose violación de sus derechos humanos, concluye que no resulta coherente la versión oficial en orden a que el afectado, sin contar con ayuda alguna hubiese intentado atacar a un vehículo militar, en plena ciudad durante el día. Aun cuando así hubiese sido, indica no parecer verosímil que, encontrándose en poder de sus aprehensores, al interior de la Intendencia, desarmado y dentro de un recinto fuertemente custodiado como lo estaba dicha dependencia, haya agredido al oficial que lo interrogaba y aun cuando le hubiere atacado, no se justifica porque los militares que lo interrogaron habrían necesitado dar muerte a una persona desarmada para reducirla. Asimismo, a fojas 18 se incorporó al proceso **recorte de prensa del diario “El Mercurio”**, que circuló el día 17 de septiembre de 1973 en la ciudad de Antofagasta, remitido por el Programa Continuación Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, donde se encuentra una publicación titulada: “Activista Muerto en la Intendencia”. En esa publicación se indica: “Un activista político que provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector de El Trocadero y posteriormente agredió a un jefe del Ejército que lo interrogaba, fue muerto en la tarde del sábado por la escolta del oficial militar. El extremista fue identificado como Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, de 36 años, sin antecedentes policiales pero con identificación como activista. Las informaciones señalan que Espinoza, provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector de El Trocadero con intenciones asesinas. Al ser llevado para un interrogatorio a la Intendencia de Antofagasta agredió al jefe que inquiría algunos antecedentes. Ante el ataque del activista la escolta militar le disparó. Con Joaquín Espinoza aumentó a cinco el número de muertos entregados por la Jefatura de Zona en estado de sitio”

**Decimotercero:** Que, por su parte, a fojas 13 de estos autos, el 19 de julio de 1990, declaró ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, **doña Rosaura Barraza Araya, esposa de don Joaquín Espinoza Ojeda**, quien expresó: “Mi marido no tenía militancia política, solo había estado inscrito en el Partido Nacional. Ese día -15 de septiembre de 1973-, se quedó empana en la esquina de Los Pimientos con Pedro Aguirre Cerda. La causa de la detención según se



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



explicó, fue que mi marido pretendía realizar algún acto tendiente a liberar a un detenido que viajaba en un jeep del Ejército. Según la persona que nos informó sobre la detención, mi marido no tuvo nada que ver con aquello, pues dicho vehículo chocó con una camioneta de la “FACH”, sin que mi marido tuviera participación alguna. Luego fue trasladado a la Intendencia, lugar donde concurrí mi suegro, no le dieron información alguna”. Relata que se dirigió al Hospital donde no le permitieron ver el cuerpo, ante sus reiteradas insistencias, le indicaron que el cuerpo de su marido había sido dejado en la morgue, finalmente se le autorizó a ver el cuerpo. Relata que un vecino la acompañó a la Intendencia a eso de las 20:00 horas aproximadamente, donde se entrevistó con una persona de la “FACH”, esa persona le preguntó por la personalidad de su marido, ella respondió que era tranquilo, nada agresivo, ese señor le indicó que fue una equivocación lo que le pasó a la víctima y que lo lamentaba mucho. Expuso: “Se me informó que la muerte de mi marido se produjo porque él provocó el choque antes aludido, y además, al momento de estar siendo interrogado le levantó la mano al interrogador. Según me han dicho, mi marido recibió cuatro disparos en el cuerpo y uno en la sien. Se me dijo que la orden la dio el General “Adriano Ortiz” (Ortiz Gutman), según personas que habrían trabajado en la Intendencia. Él salió por televisión explicando la muerte de mi marido, la verdad es que mi marido no era un activista político. Fue uno de los primeros en poner bandera después del golpe militar”. En similar sentido declaró **doña Maria Cristina Espinoza Barraza, el día 4 de junio del año 2011, a fojas 90 y 160** -hija de la víctima y de doña Rosaura-, quien recuerda el día en que su padre salió en automóvil del domicilio para no retornar nunca más, y haber visto llegar esa noche a su madre llorando, portando pertenencias de su padre, entre ellas un anillo que estaba ensangrentado. Rememoró también haber escuchado que después del funeral escuchó que a su madre la perseguían y que en reiteradas ocasiones fue amenazada por militares, diciéndole que no siguiera investigando, y que incluso la tumba de su padre era custodiada por militares. Expuso que, con el tiempo, se enteró de que su padre había sido muerto en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, cuando estaba siendo interrogado por un alto oficial de nombre “Adrián Ortiz” (Ortiz Gutman),



relatando que al parecer su padre le habría mordido un dedo a ese oficial mientras lo torturaban con quemaduras de cigarros en la cara, con el fin de defenderse y que, por ese motivo, se dio la orden de matarlo. Recuerda además que, en los días posteriores al 15 de septiembre de 1973, apareció en la televisión Ortiz Gutman, explicando lo ocurrido a su padre en la Intendencia. Agrega que, ante la insistencia de su madre, los militares en esa época reconocieron el error que habían cometido y admitieron que la muerte de su padre se habría producido solo por haberse involucrado en un accidente de tránsito, sin que él participara de ningún partido político, sin que él tampoco tuviera alguna actividad política como se dijo en los diarios de la época. Finalmente agrega que el día de los hechos, el vehículo de su padre sufrió desperfectos mecánicos, quedando averiado en la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda y esquina Nicolás Tirado, impidiendo el paso de vehículos militares que transitaban por esa misma calle. **A su vez, y corroborando lo expuesto por la esposa e hija de la víctima, a fojas 93 y 161, declaró Enrique Rivera Bracamonte**, quien mantenía una relación de amistad con don Joaquín, exponiendo: “El día 15 de septiembre de 1973, llegaron a preguntarme por Joaquín, era su padre, don Joaquín Espinoza Ríos, diciéndome que su hijo estaba desaparecido y preguntándome si yo tenía alguna información de su paradero, respondiéndole que había estado con él como a las 10:00 horas de ese día, pero que después no lo había visto, ignorando su paradero. Con la noticia quedé muy preocupado y decidí salir a buscarlo, aunque la situación era complicada, había toque de queda. Ese mismo día 15 de septiembre, llegó a la casa de Joaquín, un primo de él, de nombre Jorge Baldomino Ríos, señalando que el auto de Joaquín estaba atravesado en la bajada de camino a Las Rocas y le faltaba una rueda completa. Al día siguiente, muy temprano seguimos buscándolo por todos lados, pero tampoco fue posible ubicarlo, hasta que un conocido -conductor de la ambulancia del Hospital- informó a la esposa que lo había sacado muerto de la Intendencia y lo había trasladado a la morgue del Cementerio General. Ese mismo día 16 de septiembre de 1973 en horas de la mañana, concurrimos a ese lugar en compañía de otro amigo -Carlos Varas Leiva- con quien ingresamos a la morgue, ubicada en el cementerio general, a un costado de



la entrada principal, donde conversamos con el Doctor Mamerto Gorena, quien nos hizo ingresar, observando los pies de mi amigo Joaquín, ambos habíamos comprado los mismos zapatos y reconocí inmediatamente los de mi amigo”. Agregó que observó otros cuerpos, todos se veían con daños, como quemaduras en sus rostros o impactos de bala. En relación con la víctima, expresó que observó que mantenía cuatro impactos de bala, uno en el mentón y punta de nariz, otros en el hombro y cadera y un tiro en la sien. En horas de la tarde de ese mismo día fue sepultado en el Cementerio General. Señala que se enteró que mientras la víctima viajaba en su vehículo particular por calle Nicolás Tirado, en dirección a la Población Las Rocas, sufrió desperfectos mecánicos en el vehículo, se le habría cortado el muñón de la rueda delantera izquierda, quedando parado en medio de la calle y que detrás de él venía un vehículo de la Fuerza Aérea que transportaba a dos detenidos, ese vehículo no advirtió la presencia del vehículo de la víctima y al intentar esquivarlo, se volcó, resultando varios oficiales lesionados, esa situación habría provocado la detención de don Joaquín Espinoza, dice que lo acusaron de interceptar la patrulla, fue trasladado a la Intendencia donde fue interrogado por un Oficial de Ejército, conocido como "el caballo loco Ortiz" (Ortiz Gutmann), quien al parecer había tenido un forcejeo con Joaquín, quien era una persona grande y robusta, finalmente expresó que ese oficial apareció en televisión con un dedo vendado. **En este sentido y corroborando los dichos de don Enrique Rivera, a fojas 236 y 247, declaró policialmente Carlos Varas Leiva,** quien luego de señalar haber sido amigo desde la infancia de Joaquín Espinoza Ojeda, indicó que el día de los hechos, alrededor de las 12:00 horas, se juntó con la víctima a conversar, oportunidad en que don Joaquín le comentó que iría al sector de Las Rocas con una mujer con la que estaba saliendo y con quien mantenía una relación desde hace un tiempo, a pesar que era casado. Para trasladarse lo haría en su vehículo particular, marca Chevrolet del año 38. Luego el señor Varas Leiva se retiró a su domicilio, donde se enteró esa misma tarde del fallecimiento de su amigo. Al día siguiente escuchó comentarios sobre lo ocurrido a la víctima, decían que ese día el occiso iba en su vehículo junto a una mujer, en ese momento en la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda esquina Nicolás



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Tirado, el vehículo se habría detenido por desperfectos propios de su antigüedad, pues se trataba de un auto muy viejo para la época según indicó. Detrás del auto de la víctima venía un jeep militar que transportaba presos políticos, quienes no pudieron esquivar al vehículo de Joaquín que se detuvo violentamente, volcando el vehículo militar hacia un costado del camino. En ese momento los militares se bajaron y comenzaron a disparar hacia el vehículo para luego llevar detenida a la víctima hasta las dependencias de la Intendencia en la ciudad de Antofagasta. Expuso que en ese lugar falleció y luego fue trasladado hasta la morgue de la ciudad. Señala que fue a buscar a la morgue a don Joaquín, junto a dos amigos, uno de ellos era Enrique Rivera. Al llegar vio alrededor de 50 a 60 cadáveres, envueltos en sacos, muchos de esos cuerpos tenían balas en el pecho. En ese momento encontraron el cuerpo de la víctima, estaba sin camisa y con pantalones, observó que tenía una herida en el mentón, era un roce de proyectil balístico, tenía otra herida en la sien y dos impactos en el pecho, se llevaron el cuerpo para ser velado. Agregó que la víctima y él no pertenecían a ningún partido político por ello cree que su muerte se debió a una mala interpretación de parte de los militares, porque pensaron que se trataba de una emboscada. **Asimismo, a fojas 721, 736 vuelta, declaró Rubén Rivera Bracamonte**, expuso que era también amigo y vecino de la víctima y que ambos eran trabajadores portuarios y que además conocía a su familia desde hace muchos años debido a la amistad que ambos mantenían. Expuso: “Recuerdo que para los sucesos ocurridos en el año 1973, todos quedamos muy conmovidos y el día 15 de septiembre de ese año nos enteramos que Joaquín no llegó a la casa a la hora del toque de queda, motivo por el cual comenzamos a realizar averiguaciones para dar con su paradero y pasado unas dos horas se supo que había sido ejecutado al interior de la Intendencia por personal del Ejército. Los antecedentes que llegaron a mi conocimiento fueron que ese día, siendo alrededor de las 17:00 horas, Joaquín viajaba en su vehículo particular desde el sector Las Rocas, se trataba de un auto antiguo, que tenía varios desperfectos ya que se trataba de un auto refaccionado. Se dijo que había quedado en panne en la calle central, provocando el volcamiento o choque de una patrulla militar que se dirigía a Cerro Moreno, motivo por el cual habría sido



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

detenido y llevado hasta la Intendencia de Antofagasta, donde fue interrogado y torturado, momento en que se abalanzó sobre su torturador, quien le disparó quedando con vida obligando a darle un tiro de gracia en su cabeza. Estos antecedentes llegaron mi conocimiento por intermedio de su familia”. Confirmó además que el día de los hechos la víctima se encontraba acompañada de una dama con quien mantenía una relación. **En este mismo sentido, a fojas 723 y 736 declaró Mario Saavedra Barahona**, trabajador del Puerto de la ciudad de Antofagasta. En relación con la víctima, expresó que don Joaquín era un marinero de bahía y se juntaba con ellos en su sede, donde lo conocían cariñosamente como “el Pelao Joaquín”. Recordó que llegó a trabajar en el año 1963 aproximadamente. Con respecto a los hechos que se investigan, para los sucesos del día 11 de septiembre de 1973, recordó que Joaquín exclamó; *“jodieron los cabeza de piedra”*, pues él y su familia eran del Partido Liberal y estaban muy contentos con lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron a trabajar se enteraron de lo que había sucedido con Joaquín, comentaron que mientras viajaba en su vehículo particular, color blanco, bastante antiguo, rumbo a su domicilio ubicado en la Población Las Rocas de la ciudad de Antofagasta, fue acusado de haber provocado el volcamiento de un vehículo militar, siendo detenido en el mismo lugar por los militares quienes lo trasladaron a la Intendencia de la ciudad de Antofagasta y estando en ese lugar procedieron a tomarle una declaración y él se habría abalanzado contra un Oficial, quien le disparó ocasionándole su muerte al interior de ese lugar. Supo posteriormente que algunos compañeros acompañaron a sus familiares a retirar el cuerpo y permanecieron con ellos ayudando en los trámites. Finalmente, hizo presente que Joaquín era una persona bastante conflictiva, que peleó con varios compañeros en el Puerto y que su carácter le debe haber jugado en contra.

**Decimocuarto:** Que obra en autos el **Informe Ord N°24517 de 18 de diciembre de 2018**, evacuado por el Servicio Médico Legal de Santiago, que remite acta de exhumación de los restos mortales de Joaquín Espinoza Ojeda, en el Cementerio General de Antofagasta, agregado a fojas 1.727, que debe entenderse complementado con el Informe pericial planimétrico N°02/2018 del



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, de fojas 1.647, en relación al levantamiento planimétrico en el Cementerio de Antofagasta, desde donde se exhumaron los restos de la víctima materia de la presente causa. A partir del examen de dichos restos se evacuó un **Informe Pericial Médico forense; antropológico, de evidencia asociada y odontológico, evacuado el 1 de agosto del 2019** por el Servicio Médico Legal de Santiago, a fojas 1.851 y siguientes. En él se indicó que se efectuaron las pericias correspondientes con el fin de determinar con precisión las heridas descritas en el informe de autopsia que se realizó a la víctima. Se explica que la autopsia médico legal realizada al cadáver en el año 1973 es incompleta, pues se limitó a efectuar un examen externo del cuerpo sin explorar los órganos internos, lo que constituye una característica básica de cualquier autopsia, tampoco existe una descripción de los orificios de proyectil balístico en la piel. En sus conclusiones señala que: “La causa de muerte de los restos óseos exhumados corresponden a un traumatismo craneano y torácico por proyectiles balísticos únicos. Los traumas balísticos están representados por las lesiones por proyectil a nivel del cráneo, columna vertebral, costillas y ulna izquierda, representando a lo menos tres trayectorias balísticas independientes y coetáneas entre sí. Las lesiones balísticas descritas corresponden a una forma médico legal homicida. La morfología ósea de la lesión balística en cráneo señalada como Evento N°1 es compatible con un proyectil de alta velocidad. La morfología ósea de la lesión balística que compromete la 10ª vertebra torácica, no es compatible con un proyectil de alta velocidad.” En atención a esto último, el informe señala que es posible sugerir que existirían a lo menos dos tipos de armas involucradas, un arma de fuego larga que dispara proyectiles de alta velocidad, como fusiles, y un arma de fuego corta, como una pistola o un revólver. En relación al resto de las lesiones balísticas en los huesos del cráneo, ulna y parrilla costal izquierda, no es posible pronunciarse en relación al tipo de proyectil balístico ni arma de fuego que las habría provocado. Esta pericia se ve complementada por la **Ampliación del Informe Pericial Médico Forense, evacuado el 9 de marzo de 2021, por el Servicio Médico Legal de Santiago**, a fojas 2.024 y siguientes. En este informe destaca en el ítem titulado “Análisis



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Médico Legal”, que es posible asociar con mayor probabilidad las lesiones balísticas del antebrazo (ulna) y tórax (7° y 8° costillas izquierdas y 10° vértebra torácica), a un mismo evento balístico, es decir, a un mismo disparo. A su vez, los daños que presentan, en su conjunto o cada una de ellas por separado, no son compatibles con un proyectil de alta velocidad disparado a escasos metros de distancia de la víctima -tal como se indicó en los distintos testimonios y en las diligencias que reconstitución de escena que se rindieron en el proceso- sino que dichas lesiones son compatibles con un proyectil balístico de baja velocidad, es decir, con uno disparado por un arma corta (pistola, revólver). Las carabinas son consideradas como armamento largo y que dispara proyectiles de alta velocidad, por lo que, en términos generales, las lesiones balísticas descritas en antebrazo y tórax no son compatibles con haber sido provocadas por dicho armamento. Por último, es necesario dejar constancia de la realización de **Informe Pericial Documental Médico Forense ORD N°14191** evacuado por el Servicio Médico Legal en el año 2017, el que, atendidas las carencias del informe de autopsia, y el hecho de no haber contado con acceso a los restos del occiso, no entrega información relevante para la resolución de la presente causa, limitándose a proponer hipótesis que resultan irrelevantes atendida la posterior exhumación en el año 2018 que permitió la pericia evacuada al año siguiente a la que ya se ha hecho referencia.

**Decimoquinto:** Que, los antecedentes referidos precedentemente son consistentes y plenamente concordantes entre sí, en cuanto permiten concluir que el fallecimiento de don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, que como ya se ha indicado ocurrió en la tarde del 15 de septiembre del año 1973, fue provocado por terceros que dispararon al occiso utilizando al menos dos armas de fuego diferentes, provocando lesiones necesariamente mortales a su víctima. En los términos medicolegales, *la causa de muerte de los restos óseos exhumados corresponde a un traumatismo craneano y torácico por proyectiles balísticos únicos.*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

**En cuanto a la dinámica de los hechos que culminaron con la muerte de Espinoza Ojeda:**

**Decimosexto:** Que, en lo que dice relación con el accidente vehicular que dio origen a la detención de Espinoza Ojeda, se cuenta con la declaración de **Pedro Reinaldo Silva Álvarez**, suboficial mayor en Retiro del Ejército, quien a fojas 1.057 y 1.059 relató que el día 11 de septiembre de 1973 se encontraba destinado a la Escuela de Blindados de la Región de Antofagasta, bajo el mando del coronel Adrián Ortiz Gutman. En ese sentido, explica que le correspondió cumplir distintas funciones y entre ellas realizar guardias en la Intendencia de la ciudad de Antofagasta. Expresó: “Debo indicar que un día, cuya fecha exacta no podría precisar en este minuto, pero fue muy cerca del 11 de septiembre, en circunstancias que me encontraba de guardia afuera de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, siendo pasados las 8:00 horas de la mañana fui designado junto a un “clase” del Regimiento N°7 Esmeralda de esta ciudad, me parece que era de apellido “Figueroa”, para custodiar un camión de valores, en un jeep militar. Se nos dijo que el vehículo, que se trataba de un camión, transportaba valores de un banco. Recuerdo que comenzamos a avanzar por la costanera en dirección al aeropuerto, a una velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora, a la altura de la Petrobras...el vehículo que nos antecedió frenó bruscamente y el conductor del vehículo militar en el cual viajábamos, de apellido “Figueroa”, esquivó el vehículo para no chocarlo pues estábamos casi encima, sacando el vehículo hacia la izquierda, se trataba de un jeep marca Toyota, ignoro mayores características, el que por la velocidad a la cual viajábamos se volcó inmediatamente hacia el poniente, dando varias vueltas quedando orientado hacia el sur, recibiendo todo el golpe del volcamiento en el costado derecho, es decir, donde yo iba sentado como copiloto. Posteriormente fui trasladado a la enfermería de la Escuela de Blindados, pero no tengo idea quién me trasladó y mucho menos sobre lo que realmente ocurrió en el accidente. No tuve idea cuales fueron las causas y menos que se haya detenido a alguna persona como responsable, pues a mí me sacaron del lugar, para ser trasladado a la enfermería de la Escuela de Blindados, donde permanecí durante una semana aproximadamente”. Posteriormente, en la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



diligencia de reconstitución de escena de fojas 1268, admitió que tras el accidente se dirigió a la Intendencia junto con Figueroa, a fin de dar cuenta del volcamiento, pero sin el detenido. Su testimonio se ve corroborado por los dichos de **Mario Patricio Villalobos Medina** (fallecido), mayor en retiro del Ejército, quien a fojas 515 y 713, declaró que en septiembre de 1973 se encontraba encuadrado en la Escuela de Blindados de la ciudad de Antofagasta, siendo el director el coronel Adrián Ortiz Gutman y el comandante de la división el general Joaquín Lagos Osorio. En relación a los hechos materia de autos indicó: “Recuerdo que en los días posteriores al 11 de septiembre, debe haber sido el 16 de ese mes, recibí la orden de enviar al aeropuerto una comitiva custodiando un furgón del Banco Estado con el fin de retirar dinero que enviaban del Banco Central, dicho vehículo tuvo un accidente con otro vehículo el cual era conducido por una dama que estaba aprendiendo a conducir en compañía de su pololo, accidente en el cual no hubo heridos y en el que tampoco se produjeron detenciones. En su declaración judicial aclaró que ese día del volcamiento llegó a la Intendencia la persona detenida que iba al volante, quien le señaló que iba con su polola, a quien le enseñaba a conducir, agregando que no tenía nada contra el Ejército, que era de Renovación Nacional (sic) y ante ello sin tener mayor injerencia en ello, llevó a esta persona ante la presencia del coronel Ortiz Gutman. Asimismo a fojas 792 y 881 depuso **Armando Arancibia Morgado**, suboficial mayor en retiro del Ejército, quien señaló: “No recuerdo la fecha exacta, pero nos enteramos de la muerte de una persona al interior de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, supe que esta persona había provocado el volcamiento de un vehículo militar, luego había sido detenido por personal del Ejército, siendo detenido y trasladado a la Intendencia de la ciudad de Antofagasta por los auxiliares de inteligencia, quienes lo pusieron a disposición del coronel Adrián Ortiz Gutman... Estos antecedentes los leí en la documentación que llegó a mis manos y también fue corroborada por el suboficial Samuel Figueroa Rocatagliata (fallecido), quien fue la persona que manejaba el vehículo militar accidentado, dijo que él había realizado una maniobra de adelantamiento y se le había atravesado al vehículo civil provocando su volcamiento, me confirmó que el detenido había sido trasladado a la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Intendencia...". También se cuenta con el testimonio de **Gerardo Carrasco Sánchez**, suboficial en retiro del Ejército, de fojas 1.060 y 1.063, quien señaló que para el año 1973 se encontraba cumpliendo funciones en la Escuela de Blindados de la ciudad de Antofagasta, siendo el director en ese entonces Adrián Ortiz Gutman. En ese contexto recibieron la instrucción de trasladarse hasta la Intendencia de Antofagasta. Indicó que por comentarios que escuchó en la guardia de la Intendencia, se supo que un vehículo militar, mientras viajaba en dirección al aeropuerto se le cruzó un vehículo particular provocando su volcamiento, el copiloto de ese vehículo era un cabo alumno de nombre Pedro Silva Álvarez. Asimismo, a fojas 1.081, 1.120 y 1.268 **Alejandro Rojas Mendoza**, sargento en retiro del Ejército, expuso que durante el mes de septiembre de 1973 cumplía funciones en la Escuela de Blindados de Antofagasta como cabo dragoneante, en ese sentido realizaba servicios de guardia en la Intendencia. Recuerda que el día de los hechos mientras estaba en la Intendencia vio llegar una ambulancia de la Fuerza Aérea y que después de unos minutos llegó un vehículo militar del que se bajó Pedro Silva y otra persona, pertenecían al Servicio de Inteligencia, de la ambulancia bajó el detenido que trasladaban. A su vez, a fojas 1.050 y 1.205, **Dante Paiva Soto**, suboficial mayor en retiro del Ejército, indicó que desempeñaba funciones en la mantención de la seguridad de la Intendencia, y que el día de los hechos vio que llegaron unas personas sin uniforme con un detenido, después de unos minutos llegó Pedro Silva Álvarez junto al conductor del vehículo militar recién volcado, mencionó que a ambas personas los vio con signos de haber sufrido recién el accidente. Debe tenerse presente, además, que en su declaración de fojas 93 don **Enrique Rivera Bracamonte** refiere que fue un primo de la víctima, Jorge Baldomino Ríos, quien avisó que el auto de Joaquín estaba atravesado en la bajada de camino a Las Rocas y que le faltaba una rueda completa, agregando que se trataba de un vehículo marca Ford Enry del año 1953. Finalmente, cabe recordar que de acuerdo con la publicación efectuada por el **diario "El Mercurio"** del día 17 de septiembre de 1973, a la que ya se ha hecho referencia, don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda fue calificado de "activista político" y "extremista" que había provocado el volcamiento de un



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

vehículo militar en el sector de El Trocadero y que fue llevado para interrogatorio a la Intendencia de Antofagasta.

**Decimoséptimo:** Que, el único relato presencial del accidente vehicular es el que prestara el suboficial en retiro Pedro Silva Álvarez, el que en todo caso se ve suficientemente corroborado por los restantes testimonios, tanto referenciales como de oídas, que fueron reunidos durante la investigación, y que se encuentran contestes en que, tal y como aparece en las declaraciones de familiares y amigos del occiso consignadas en el motivo decimotercero, un vehículo militar en que circulaban dos suboficiales del Ejército, a saber Silva Álvarez y Figueroa Rocatagliata, en la ruta que lleva al aeropuerto de Cerro Moreno, se encontraron con un automóvil antiguo en el cual se desplazaba don Joaquín Espinoza Ojeda, junto a una mujer que no ha podido ser identificada, y ya sea producto de un desperfecto del móvil de la víctima, o de una maniobra desafortunada, se produjo el volcamiento del vehículo militar, procediéndose a la detención de Espinoza Ojeda, ignorándose el destino de su acompañante, por parte de personal militar, para ser conducido a las dependencias de la Intendencia de Antofagasta. Si bien Silva Álvarez sostiene no haber tenido conocimiento de la detención, ello no solo resulta contrario a la lógica, sino que se ve desvirtuado por las declaraciones que lo sitúan a él y a Figueroa Rocatagliata en la Intendencia, según aparece en el relato de Armando Arancibia y muy especialmente de Dante Paiva Soto y Alejandro Rojas Mendoza, el último de los cuales lo vio llegar a la Intendencia junto con el detenido, sin perjuicio que la aprehensión del ofendido se ve además suficientemente corroborada por las declaraciones de Mario Villalobos, así como por los testigos presenciales de los hechos ocurridos subsecuentemente en dependencias de la Intendencia, a los que se hará referencia más adelante, y de los cuales cabe desde ya destacar el relato de José Bustamante Cárdenas, quien sitúa a Silva Álvarez no solo en la Intendencia, sino en la misma estancia en que se produjo la muerte de Espinoza Ojeda.

Se trata, en consecuencia, de una detención a todas luces irregular, sin orden ni motivo alguno que la pudiera justificar, careciendo los agentes que la perpetraron de cualquier indicio que permitiera atribuir a Joaquín Espinoza Ojeda



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

un comportamiento delictivo, y sin la concurrencia de antecedentes que dieran cuenta de alguna conducta políticamente relevante, y ni siquiera de una postura contraria al régimen de facto, como se pretendió hacer creer a través del comunicado difundido por la prensa de la época.

**Decimoctavo:** Que, en relación a las circunstancias precisas de la ejecución de Espinoza Ojeda en dependencias de la Intendencia Regional de Antofagasta, se cuenta con los siguientes testimonios presenciales: **A)** a fojas 102, el 3 de marzo de 1986, prestó una declaración jurada ante Notario, **Rigoberto Figueroa Torres**, quien el día de los hechos cumplía funciones de **guardia en la entrada del edificio de la Intendencia en Antofagasta**, expresando: “Presencié como ingresaban a la Intendencia, por la puerta principal, a un señor de unos 40 años de edad, de baja estatura, con anteojos oscuros, pelo corto y liso, de color negro, tez blanca...pregunté al Comandante de Guardia que ocurría con el señor, me dijo que; “ese gallo” había chocado un vehículo militar que patrullaba, con su automóvil y que por ese motivo lo habían hecho prisionero, señala que transcurridos unos 15 minutos se escuchó un disparo hecho con un arma de bajo calibre -a juzgar por el ruido producido- proveniente del interior del edificio de la Intendencia, a los segundos se escuchó otro tiro, de mayor calibre, el ruido fue mayor, ante lo cual y de inmediato, el comandante de Guardia, ingresó al mencionado edificio. Como a los cinco minutos volvió a su puesto el comandante de Guardia, quien ante mis preguntas respondió “mi coronel Adrián Ortiz, le pegó un balazo al que estaba interrogando, porque el detenido le había mordido un dedo, que el otro tiro fue hecho por el escolta del coronel para rematarlo. Como a la media hora, vi como sacaban en una camilla improvisada, de espaldas, sin cubrir, al señor que había llegado detenido que he descrito más arriba, sin los anteojos y con la cara ensangrentada. Lo introdujeron a un jeep militar, en el cual se lo llevaron con destino desconocido para mí”. **B)** A fojas 195, 1.083 y 1.528 declaró **Luis Alberto Guzmán Mayorga**, General de Brigada en Retiro del Ejército, cuyas declaraciones presentan algunas variaciones, estimando que la más detallada y coherente, y que presenta mayores visos de credibilidad, es aquella prestada durante la reconstitución de escena de 17 de octubre de 2017, de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

fojas 1.268 quien señaló que el día de los hechos se encontraba de guardia en la parte posterior de la Intendencia, donde actualmente se encuentra un estacionamiento de vehículos o garaje; allí había un cuarto ubicado en frente de la escalera principal de acceso, que era utilizado generalmente para el descanso de los guardias. En ese momento escuchó dos o tres disparos, subió al segundo piso y vio a la víctima, en el suelo, muerta, con sangre y boca abajo. Junto al cuerpo muerto de la víctima se encontraba Adrián Ortiz Gutman, *quien no poseía arma en ese momento, y Patricio Ferrer Ducaud, quien sí poseía un arma en la mano, específicamente una pistola Star calibre 6.35*. Consultado si vio herido a Ortiz Gutman refiere que en el momento de los hechos no le vio herida alguna. Expuso: “Mientras era guardia vi algo raro. Un día llevaron a una persona detenida y yo estaba de guardia, en eso se escucharon unos tiros y subimos, encontramos una persona en el piso que al parecer había atacado a mi coronel Ortiz y al Mayor Ferrer, llamamos a una ambulancia y se lo llevaron”. **C)** A fojas 713, declaró **Mario Villalobos Medina** (fallecido), quien en lo pertinente al punto en análisis declaró que después de llevar a una persona (Espinoza Ojeda) ante la presencia del coronel Ortiz Gutman, bajó a sus funciones habituales, cuando escuchó un disparo, a los tres minutos subí y encontré a la misma persona que había llevado ante la presencia del coronel, quien estaba en el suelo y fallecido. Agrega que alguien le dijo que solicitara un vehículo para llevar al occiso a la morgue, y recordó además que el coronel estaba sangrando de su mano derecha, enterándose a través de terceros que el coronel al dar una bofetada al sujeto, éste se defendió y le mordió un dedo, procediendo un soldado a dispararle al sujeto ante el grito que dio el coronel. **D)** A su vez, a fojas 1.050 y 1.205, **Dante Paiva Soto**, Suboficial Mayor en Retiro del Ejército, indicó que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba cumpliendo funciones en la Escuela de Blindados de la ciudad de Antofagasta, relatando que a él y a otros compañeros más le correspondió mantener la seguridad de la Intendencia y en ese sentido efectuaban guardias en ese lugar. En relación con los hechos ocurridos señaló que ese día vio que llegaron unas personas sin uniforme con un detenido, después de unos minutos llegó Pedro Silva Álvarez junto al conductor del vehículo militar recién



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

volcado, mencionó que a ambas personas los vio con signos de haber sufrido recién el accidente. Luego de unos minutos sintió dos disparos efectuados con una pistola pequeña y un disparo fuerte que debe haber sido de un fusil o arma de guerra. Luego de ello, Rojas Mendoza le dice que subiría a ver que le pasaba. Minutos después vio que llegó una ambulancia y luego una persona baja con una camilla tapada. Recuerda que ese día se encontraba en la Intendencia Adrián Ortiz Gutman junto a otros funcionarios del Cuartel General. En cuanto a Ferrer Ducaud no recuerda haberlo visto pero tampoco descarta que estuviera presente al momento de los hechos, señala además que Ferrer era el jefe del Departamento Segundo de Inteligencia y que al fondo del pasillo del segundo piso de la Intendencia, funcionaba la oficina que era del Departamento Segundo de Inteligencia. Además, señaló que puede que Ferrer hubiese andado en la comitiva que tuvo el accidente y que por eso haya llegado a la Intendencia en ese momento. Indicó recordar a Pedro Silva y Alejandro Rojas Mendoza como compañeros de curso y que se encontraban dentro del grupo que había sido designado a la Intendencia. En relación con los disparos que escuchó, señaló que el tiro fuerte debió ser de fusil y los dos tiros suaves deben haber sido de pistola chica, pero no de las que usualmente se utilizan en el Ejército sino de una particular y que generalmente Ortiz andaba con su ayudante, quien llevaba consigo una pistola o un fusil. Adicionalmente señaló que desde que ingresó la víctima al segundo piso de la Intendencia hasta cuando sacaron el cuerpo fallecido, debe haber pasado alrededor de una hora, cuando lo bajaron muerto en una camilla. **E)** A fojas 1.081, 1.120 y 1.268 declaró **Alejandro Rojas Mendoza**, sargento en retiro del Ejército, expuso que durante el mes de septiembre de 1973 cumplía funciones en la Escuela de Blindados de Antofagasta como cabo dragoneante, en ese sentido realizaba servicios de guardia en la Intendencia. Recuerda que el día de los hechos mientras estaba en la Intendencia vio llegar una ambulancia de la Fuerza Aérea y que después de unos minutos llegó un vehículo militar del que se bajó Pedro Silva y otra persona, pertenecían al Servicio de Inteligencia, de la ambulancia bajó el detenido que trasladaban. Después del ingreso de estas personas a la Intendencia escuchó dos balazos de baja



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

intensidad en sonido, propinados con un arma pequeña y luego de 5 segundos aproximadamente escuchó otro disparo más fuerte. Ante ello subió por la escalera y en ese momento vio a la persona que habían llevado detenida, baleada en el suelo. Su cuerpo estaba de cúbito occipital, tenía un orificio que entraba por la nuca y salía por el mentón, además vio la presencia de un soldado que portaba un arma. En relación con el acusado Miguel Lorca, expuso que no lo ubicaba pero que efectivamente vio a un soldado que portaba un arma en el lugar de los hechos. Señaló que Silva llegó todo revolcado, al parecer por el volcamiento que sufrió el vehículo en el camino. Agregó que el detenido era corpulento y alto, el último disparo que escuchó fue muy fuerte, señala que se dijo que el “Mayor” le había disparado 2 veces a ese detenido. Expresó: “Escuché tres disparos provenientes del segundo piso, por lo que, en mi calidad de guardia, subí a comprobar lo que ocurría. Fue allí cuando veo al coronel Adrián Ortiz Guzmán, con su dedo anular derecho desgarrado y la piel colgaba desde la punta de su primera falange, ensangrentado, al ver esto reaccioné de inmediato llevándolo al servicio higiénico del lugar, orinando su dedo para evitar infección de acuerdo al aprendizaje de guerra impartido en la Escuela, asimismo intenté regresar la piel a su posición original, cuando llegó personal médico e iniciaron las curaciones de rigor. En ese momento pongo atención a mi alrededor y me percaté del taxista que se encontraba de cúbito abdominal, con su cara ladeada, no recuerdo en que dirección, pero sí pude ver un charco de sangre alrededor de su cabeza, con una perforación en su nuca y un orificio de salida de bala en su mentón. El occiso fue retirado en una camilla por personal de Carabineros acompañados por un grupo de enfermeros, quienes en una ambulancia se retiraron del lugar en dirección desconocida. Debo agregar a mi relato, que a raíz de este evento se generaron múltiples comentarios, como que el detenido era un taxista que había provocado el volcamiento de un vehículo militar en el que viajaba Pedro Silva, quien se dio a la fuga pero que una ambulancia de la Fuerza Aérea inició su persecución, logrando su aprehensión. También se escuchó que el ayudante del coronel Ortiz, un oficial de grado “Mayor”, de quien no recuerda nombre, habría disparado dos veces con una pistola Star y que el tercer disparo lo efectuó uno de los guardaespaldas del



coronel. **F)** A fojas 1421 y 1717, declaró **Francisco Silva Molina**, testimonio que fue ampliado en la en diligencia de reconstitución de escena en dependencias de la Intendencia Regional de Antofagasta de fojas 1764, recordando que para el 11 de septiembre de 1973 se encontraba en el curso de instructor de arma de blindado, curso conformado 13 soldados alumnos, de los cuales 12 tuvieron que dirigirse a la Intendencia para tomar posesión del inmueble y donde permanecieron como guardias centinelas del recinto, ello por orden del director de la Escuela, coronel Adrián Ortiz Gutman. Entre sus compañeros se encontraban Homero Castellón Argote, Dante Paiva Soto, Gerardo Atenas, Pedro Silva Álvarez, Rafael Bustamante, Enrique Cárcamo, "Titi" Carrasco, otros de apellido Cortés, Navarrete, Carrasco y Rojas. Expuso que en la Intendencia se formó un comando conjunto integrado por todas las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, ignorando el número de personas que conformaban dicho comando. En relación con los hechos investigados señaló no recordar haber escuchado el sonido de una colisión de tránsito, pero sí escuchó dos disparos en el interior de la Intendencia, por su función de centinela no concurrió al lugar ya que debía controlar el ingreso y egreso de personas, estando abocado en ese momento a esa función. Transcurridos unos treinta minutos de los disparos, mientras se encontraba en el frontis de la Intendencia, haciendo guardia, junto a Homero Castellón, observó que personal militar, no recuerda quiénes, salieron del interior de la Intendencia cargando a una persona y la subieron a un camión militar. Expuso que durante los días posteriores al hecho hubo un rumor que una persona había mordido la mano de Ortiz Gutman y que a esa persona se le dio muerte. En relación con el armamento que ocupaban indicó que ellos usaban la subametralladora M3 y los demás funcionarios oficiales ocupaban la carabina Garant. En la diligencia de reconstitución de escena agregó que conocía a Ferrer Ducaud, ya que tenía una jefatura en la Intendencia y que por ese motivo asistía todos los días al lugar, donde también pudo ver constantemente a Ortiz Gutman. **G)** A fojas 1.424 y 1.718 declaró **José Bustamante Cárdenas**, complementado a fojas 1.764 en diligencia de reconstitución de escena, exponiendo que en el año 1972 ingresó a la Escuela de Suboficiales, siendo trasladado a la Escuela de Blindados en Antofagasta, para



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



continuar la especialidad donde permaneció hasta diciembre de 1973. Para el día 11 de septiembre de 1973 fueron trasladados los 13 integrantes de ese curso de especialización a realizar el desalojo de la Intendencia a fin de que se tomara el mando por parte del Ejército de Chile, donde quedó a cargo del General Joaquín Lagos Osorio, siendo su subrogante el coronel Adrián Ortiz Gutman. Manifestó además que ellos estaban abocados a realizar los servicios de guardia en el interior de la Intendencia. Expuso que su labor en el mes de septiembre de 1973 se limitaba a realizar guardia en la Intendencia. En relación a los hechos ocurridos expuso: “Recuerdo que el día de ocurrido el accidente yo me encontraba realizando servicio de guardia en la intendencia, en el segundo piso, específicamente en la puerta del Intendente, recuerdo que yo estaba fuera de la oficina cuando llegó el detenido escoltado por dos militares, -(ingresan al detenido a la oficina que él custodiaba según indicó a fojas 1765)-, uno de ellos era apodado “El Burro”, su apellido era Lorca, pero este no era de mi curso de especialización. En el interior de la oficina del Intendente Subrogante el coronel Ortiz, no sé cuántas personas estaban en el interior de la oficina, pero sé que estaba el detenido, en un momento comencé a escuchar golpes y ruidos que venían desde el interior de la oficina que yo resguardaba, hasta que en un momento sentí fuerte y claramente dos disparos, -(se encontraba a unos tres metros aproximadamente de la puerta de acceso a esa oficina)-, luego de eso una persona desde el interior le dice a mi compañero de guardia y a mí que ingresemos a la oficina, en el interior de esta recuerdo haber visto al Señor Ortiz, al militar apodado “el burro” (Lorca) y recuerdo que habían otras personas pero no recuerdo quienes eran, recibí una orden de sacar el cuerpo de la oficina, un cuerpo que correspondía al del detenido, este mantenía un disparo visible en su cabeza, yo recuerdo que lo tomé desde uno de sus brazos, mientras que otros tres militares más, lo tomaron de sus otras extremidades, siendo este sacado por la puerta principal hasta ser dejado en el interior de un camión militar para su traslado. Debo hacer presente que todas las personas que estaban en el interior de la oficina del Intendente, ninguno salió antes ni después del hecho, hasta que nosotros como guardias ingresamos a sacar el cuerpo, ningún militar ingresó al



interior de la oficina luego de sentir los disparos, de eso estoy seguro”. En relación con la mano dañada de Ortiz Gutman, indicó que lo vio herido, sangrando, no recuerda cuál mano fue. En la diligencia de reconstitución de escena de fojas 1.764, declaró en similar sentido, agregando que cuando ingresó a la oficina donde se encontraba muerta la víctima, pudo ver a cuatro personas de pie, alrededor de la víctima, recuerda que eran Pedro Silva, al lado derecho, a Miguel Ángel Lorca, con su armamento carabina Garand, al lado izquierdo de la víctima, cerca de su cabeza, a una persona vestida de civil con un revólver o pistola en la mano y a Ortiz Gutman lo ve desarmado, al lado izquierdo cerca de sus pies y su mano se veía ensangrentada. En la declaración de fojas 1.718 al testigo se le exhibieron fotografías de Patricio Ferrer Ducaud, indicó que lo ubicaba y reconoce como parte del personal de Inteligencia y que vestía siempre de civil. En relación con las declaraciones del testigo Luis Guzmán Mayorga, indicó estar de acuerdo con sus dichos, sobre todo en relación con las armas que usaban. En relación a quién disparó, expuso que por comentarios se enteró que había sido Miguel Lorca quien habría disparado, no obstante, señala que él no lo vio. **H)** A fojas 1.140, 1.144, 1.268 y 1.302, **Carlos Pérez Díaz** expuso que para el 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como actuario del Primer Juzgado Militar de Antofagasta, en dependencias de la Intendencia Regional de Antofagasta. En ese sentido, tuvo conocimiento de la detención de una persona, de la cual ignora todo tipo de antecedentes personales, quien fue trasladada por personal militar hasta la Intendencia, por haber chocado un vehículo militar conducido por el sargento Samuel Figueroa Rocatagliata (fallecido). A su vez, en la diligencia de reconstitución de escena de fojas 1.268, expuso cuál era el trayecto para ingresar a su oficina, y señaló que mientras se encontraba en dicho lugar realizando sus labores habituales, vio a un hombre en el umbral del acceso a la oficina, la cual no tenía puerta, el que estaba custodiado por dos guardias con uniformes militares y con armamento en mano. Un momento después dice que salió de su oficina Adrián Ortiz Gutman, cuya oficina colindaba con la suya, quien se dirigió al pasillo ubicado justo en frente de su oficina. Luego oyó una enérgica discusión entre Ortiz Gutman y el detenido, escuchó de uno a tres disparos, miró hacia afuera de su



oficina, desde donde provenía el sonido de los disparos y vio que la persona baleada estaba de cúbito dorsal con la cabeza mirando hacia el sur, horizontal hacia la entrada de su oficina, además había dos guardias, uno parado al lado izquierdo y otro al lado derecho de ese pasillo. Posteriormente de un llamado que realizó Adrián Ortiz Gutman, llegó el Auditor Militar, Marcos Herrera Aracena, tratando de verificar el estado de salud de la persona herida, sin embargo, en ese momento el coronel Ortiz Gutman le ordenó vigorosamente que retire el cadáver en forma urgente. Finalmente, en sus declaraciones señaló que este hecho ocurrió en los pasillos del segundo piso de la Intendencia. Pudo ver a la víctima de cúbito ventral y vio como la sangre se expandía rápidamente, sin recordar las vestimentas del fallecido, solo recordaba que el auditor dispuso el levantamiento del cuerpo y lo único que se dijo en ese momento es que esta persona había chocado a Samuel Figueroa Rocatagliata. El cuerpo fue retirado por personal militar que cumplía funciones de guardia en la Intendencia, desconociendo lo que ocurrió con el cuerpo posteriormente

**Decimonoveno:** Que, fuera de las personas que percibieron los hechos investigados directamente a través de alguno de sus sentidos, cuyas declaraciones figuran extractadas en el motivo precedente, se cuenta con los siguientes testimonios indirectos: En primer lugar, **a fojas 792, declaró Arnaldo Arancibia Morgado**, exponiendo que en el mes de septiembre de 1973 trabajaba en el Cuartel General de la Primera División del Ejército, en la Región de Antofagasta, y que en ese entonces el General Comandante en Jefe de la División era Joaquín Lagos Osorio, en tanto que el Departamento II estaba a cargo del acusado Patricio Ferrer Ducaud. Recordó que al producirse el golpe militar, el General Lagos tuvo que asumir las funciones de Intendente, designando como Jefe de los servicios al director de la Escuela de Blindados, el coronel Adrián Ortiz Gutman, quienes se constituyeron en la Intendencia con un grupo de asesores. Expuso: “No recuerdo la fecha exacta, pero nos enteramos de la muerte de una persona al interior de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, supe que esta persona había provocado el volcamiento de un vehículo militar, luego había sido detenido por personal del Ejército, siendo detenido y trasladado a la Intendencia



de la ciudad de Antofagasta por los auxiliares de inteligencia, quienes lo pusieron a disposición del coronel Adrian Ortiz Gutman y al momento de interrogarlo el coronel insultó al detenido quien se molestó por los insultos avanzando hacia adelante como para enfrentarlo, sacando el coronel su arma para luego dispararle, falleciendo en el lugar. Estos antecedentes los leí en la documentación que llegó a mis manos y también fue corroborada por el Suboficial Samuel Figueroa Rocatagliata (fallecido), quien fue la persona que manejaba el vehículo militar accidentado, dijo que él había realizado una maniobra de adelantamiento y se le había atravesado al vehículo civil provocando su volcamiento, me confirmó que el detenido había sido trasladado a la Intendencia donde el coronel Ortiz le había disparado y dado muerte. A modo de sustentar mis dichos, hago presente que en todo momento tuve grado de acceso 3 a la información confidencial del Ejército, prueba de ello es el documento que acompaño en este momento como medio probatorio y otros que dan cuenta de mi función como colaborador de los Generales que pasaron por esta División”. En similares términos depuso **a fojas 521 y 712 Juan Bravo Marín, brigadier en retiro del Ejército**, quien indicó que en el año 1973 se encontraba trabajando en la Escuela de Blindados de la ciudad de Antofagasta. En relación con los hechos expuso: “Cumplí funciones en la ciudad de Antofagasta, en la Escuela de Blindados, entre enero de 1972 a marzo de 1976. Para el 11 de septiembre de 1973 recibí la orden para reunir un grupo de Cabos dragoneantes y con ellos escoltar a autoridades militares hasta la Intendencia y una vez en ese lugar recibí la orden de parte del coronel Adrián Ortiz Gutman, para hacerme cargo de la seguridad del edificio, todo ello hasta nueva orden, para tal efecto se dispuso un turno de los Cabos y se hacían relevos de doce horas”. “Yo sé que hubo una persona que habría resultado fallecida al interior de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, recuerdo que cuando asumí el turno del día siguiente, entregado por el capitán Mario Villalobos Medina, se me informó que un señor había sido llevado a la Intendencia y cuando el coronel Adrián Ortiz se acercó a hablarle al sujeto, se habría abalanzado contra la autoridad mordiéndole su mano, motivo por el cual Adrián Ortiz ordenó que le dispararan. Sin perjuicio de lo anterior, no recuerdo en estos momentos el nombre



del Cabo que disparó, dando cumplimiento a lo ordenado por el coronel Ortiz. Hago presente que ese Cabo, era de dotación de la Escuela de Blindados”. Por su parte, **a fojas 199 y 248, declaró policialmente Marcos Camacho Ríos**, quien en la época fue jefe del Servicio de Registro Civil e Identificación, el cual funcionaba en una de las oficinas de la Intendencia. Relató un episodio en que uno de los funcionarios que cumplían funciones en el Servicio -Juan Figueroa Negrete- le habría comentado que en una oportunidad, personal militar habría detenido a un amigo suyo, que trabajaba en el Puerto de Antofagasta, que sufría de ataques de epilepsia y que en los momentos en que era interrogado por el Comandante Adrián Ortiz, sufrió un ataque y como el oficial pensó que el sujeto lo iba a atacar, le disparó y lo mató, esto habría ocurrido en las dependencias de la Intendencia. **En ese sentido, a fojas 239 y 362 declaró precisamente Juan Figueroa Negrete**, confirmando que trabajaba en el Servicio del Registro Civil desde el año 1963, y que para el año 1973 las oficinas se ubicaban en el tercer piso del edificio de la Intendencia Regional. En ese tiempo, hubo rumores de personas detenidas en la Intendencia. En fecha posterior, se enteró por amigos de que en la misma Intendencia había fallecido su amigo de infancia Joaquín Espinoza Ojeda, de quien sabe que tenía una sordera y sufría ataques de epilepsia, sin que conozca las circunstancias precisas en que ocurrió su deceso. Finalmente, **a fojas 369 depuso Jorge Valenzuela Thompson**, de profesión odontólogo, quien señaló que supo de un sujeto que fue muerto al interior de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, porque un día, no recuerda fecha exacta, alrededor del mediodía, se percató que frente a la Intendencia tenían en exposición el cadáver de una persona, que pudo distinguir estaba muerto, vestido y en el suelo de la calle, escuchó por comentarios que esa persona se había insolentado contra un oficial, a quien le decían “el caballo loco Ortiz”, quien le habría disparado y luego habrían ubicado el cuerpo de esa persona en la calle, con el fin que la gente del lugar supiera lo que le ocurría a los “insolentes”.

**Vigésimo:** Que, de los distintos testimonios referidos precedentemente se desprende claramente que la muerte de don Joaquín Espinoza Ojeda se produjo en dependencias de la Intendencia de Antofagasta, lugar al que lo vieron ingresar



al menos cuatro de los testigos cuyos relatos se consignan en el motivo decimoctavo, donde era interrogado por el coronel Adrián Ortiz Gutman, aparentemente en relación a las circunstancias que rodearon el accidente vehicular referido en el motivo decimoséptimo que antecede, y durante el cual se efectuaron dos a tres disparos en contra de la víctima. Se descartará la única versión que habla de un disparo singular, que corresponde a la de Mario Villalobos Medina, teniendo presente que, de acuerdo con sus dichos, él se encontraba en un piso distinto del inmueble, y por encontrarse sus asertos contradichos tanto por los restantes siete testimonios, como por la prueba pericial médico legal señalada en el motivo decimocuarto, que afirma la existencia de tres trayectorias balísticas coetáneas entre sí, y la pericia balística a que se hará referencia más adelante en el presente fallo. De igual modo, cabe consignar que al menos tres de los deponentes manifestaron que los disparos, de acuerdo al ruido producido, provendrían de dos armas distintas, lo que es igualmente concordante con el informe médico legal, que sugiere la existencia de a lo menos dos tipos de armas involucradas, un arma de fuego larga, como pudiera ser un fusil, que dispara proyectiles de alta velocidad, y un arma de fuego corta, como una pistola o un revólver.

**Vigesimoprimer:** Que, a fin de esclarecer el número y trayectoria de los disparos efectuados al occiso, así como la identificación del armamento involucrado, se agregaron al proceso los siguientes informes periciales de interés:

**A) Informe Pericial Médico Forense de trayectoria balística ORD N°14191** evacuado por el Servicio Médico Legal de Santiago, el 14 de julio de 2017, de fojas 1.180 y siguientes, en relación a la trayectoria balística y el tipo de armamento utilizado en el homicidio de la víctima Joaquín Espinoza Ojeda. Da cuenta en el punto número VII titulado “Análisis Médico Legal del caso”, lo siguiente: “Se puede consignar, a grandes rasgos, que estas trayectorias siguieron aproximadamente las discrecionalidades que se grafican en el esquema N°1”, agregado a fojas 1.186, en el cual se aprecian tres lesiones, dos de esas lesiones impactan en la región cefálica y siguen una trayectoria que va de adelante hacia atrás. En cuanto a la lesión torácica, sigue una discrecionalidad que va de atrás



hacia adelante, tal como se muestra en la imagen agregada a fojas 1.186. **En el ítem “VII. Conclusiones”, se establece que la causa de la muerte de la víctima corresponde a un traumatismo facio craneo encefálico y torácico por proyectiles balísticos únicos con salida. A su vez, se indica que la forma de muerte de la víctima se corresponde con una etiología médico legal de tipo homicida, mientras se encontraba bajo la custodia de efectivos del Ejército;**

**B) Informe Pericial Balístico N°06-BA**, evacuado el día 30 de noviembre de 2017 y remitido por el Laboratorio de Criminalística Regional de Iquique, a fojas 1.617 y siguientes. En el punto N°3.- “Análisis Balístico”, se expuso: “Según lo detallado en el informe de autopsia, se genera un estallido y destrucción total de cerebro y cráneo. Indica que la causa de muerte es estallido de cráneo. En cuanto a las versiones entregadas en la diligencia de reconstitución de escena y las declaraciones remitidas para análisis, no entregan detalles precisos del momento de los disparos, ni de las posiciones de los involucrados, salvo las declaraciones de Miguel Lorca y Patricio Ferrer. En cuanto a Ferrer Ducaud, él señala que solo se efectuó un disparo con un arma de fuego larga, lo que no es balísticamente compatible con el informe de autopsia. En relación a Lorca Escobar, indica que es el único que en su declaración entrega más antecedentes y detalles del momento exacto de los disparos, especificando que se realizaron más de un disparo y con armas de fuego de distinto tipo y calibre, señalando que participaron armas de fuego de tipo pistola y armas de fuego de tipo fusil. Se explica que los proyectiles balísticos de baja velocidad, como los usados por las armas de fuego del tipo pistola, no provocan al transfixiar una cavidad como la cabeza, estallido craneal. Sin embargo, las armas de fuego que utilizan proyectiles balísticos de gran velocidad, como es el caso de los fusiles, sí generan al atravesar una cavidad como la cabeza, estallido craneal. Por lo anterior, ambas heridas de la cabeza que describe el protocolo de autopsia habrían sido realizadas por armas de fuego del tipo fusil. La herida descrita en el tórax no presenta antecedentes que permitan hacer un análisis y establecer el tipo de arma que pudo haberla realizado. En sus conclusiones indica que **“es posible inferir que las heridas que presentaba Joaquín Espinoza Ojeda en la cabeza, fueron realizadas por un arma de**



**fuego del tipo fusil y no por armas de fuego del tipo pistola, esto debido al estallido craneal que se observó y describió en el protocolo de autopsia.** El

protocolo de autopsia no entrega antecedentes suficientes sobre la herida de proyectil balístico observada en el tórax de Espinoza Ojeda, que permitan inferir por qué tipo de armamento fue realizada”. Finalmente, en cuanto a las versiones entregadas por los acusados, el informe indicó en relación con la versión de Ferrer Ducaud, no ser balísticamente compatible con la cantidad de disparos descritos en el informe de autopsia. Y en cuanto a la versión de Lorca Escobar, no es balísticamente compatible con la trayectoria de las heridas que presentaba la víctima en su cabeza; **C) Informes periciales sobre microanálisis N°11/2019**, evacuado el 25 de enero 2019, por el Laboratorio de Criminalística Central de Santiago, a fojas 1.772. Contiene peritaje realizado a un fragmento de proyectil encontrado en los restos óseos de la víctima. En esos informes se concluyó que el fragmento presenta una forma cilíndrica, cuyas dimensiones son de largo 12 mm y diámetro 6 mm, según se indicó a fojas 1.794: “Las características antes descritas permiten inferir que el fragmento corresponde a un proyectil balístico con núcleo de plomo (Pb) y encamisado de cobre-níquel (Cu-Ni). **D) Informe Pericial Balístico N°376/2019 de 29 de marzo de 2019**, evacuado por el Laboratorio de Criminalística Central de Santiago, a fojas 1.832. Indica que se efectuó análisis al fragmento hallado en el cuerpo de la víctima de autos. En el ítem 3 “Análisis balísticos”, se determinó en el punto 3.5 que: “La morfología, masa y dimensiones de dicho proyectil balístico dubitado, se encuentran cercanas a los parámetros de los calibres 25 auto (6,35 mm) y 32 Auto (7,65 mm), los cuales no son compatibles entre sí”. Adjunto al informe -según consta a fojas 1.829- se acompañó imagen comparativa de ambos calibres antes mencionados y la evidencia hallada. No obstante ello, se indicó que no era posible dar una respuesta categórica respecto a cuál de esos dos calibres correspondería la evidencia, debido a su estado de conservación. En relación con el tipo de arma de fuego que lo pudo haber percutado, en caso de corresponder al calibre 25 Auto, es posible que haya sido disparado por un arma de fuego del tipo pistola, de igual calibre. En caso de corresponder al calibre 32 Auto, este se podría haber disparado por un arma de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



fuego del tipo pistola o subametralladora, de igual calibre, o bien por un revólver calibre 32 largo. **E) Informes periciales balísticos N°05/2020** evacuado el 24 de enero de 2020 por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, de fojas 1.948 y siguientes **y N°1031/2020 de 11 de agosto de 2020**, evacuado por el Laboratorio de Criminalística Central de Santiago, a fojas 1.969. En este último informe se concluye que, atendidas las divergencias existentes en cuanto a las conclusiones balísticas contenidas en los informes balísticos evacuados anteriormente, en relación al tipo de armamento utilizado y la dinámica de los hechos se puede concluir lo siguiente; De acuerdo a los informes periciales antropológico y médico forense, la víctima Joaquín Espinoza Ojeda, recibió en su cabeza dos impactos balísticos, ambos con salida de proyectil, dichos impactos en función a la disposición de las fracturas que generaron, permiten establecer la cronología sobre los mismos y que estos fueron provocados por un arma de fuego de alta energía, del tipo fusil o carabina siendo su ubicación de trayectoria la siguiente: Un primer impacto balístico en la zona esfeno-temporal izquierda, con salida por la zona occipital, cuya trayectoria fue de izquierda a derecha, adelante hacia atrás y en el plano horizontal. En cuanto al segundo impacto en la zona occipital inferior izquierda con salida a nivel parietal superior derecho, cuya trayectoria fue de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. De acuerdo con las declaraciones y reconstituciones de escenas que rolan en la presente causa, **el arma de fuego utilizada para dichos disparos corresponde a la carabina M1 Garant, calibre 7,62 y 33 mm (calibre 30 carabine)**. En relación con las lesiones de origen balístico sufridas por la víctima en la ulna izquierda, 7° y 8° costillas izquierdas y 10° vértebra, no es posible afirmar que hayan sido realizadas por el traspaso de uno o más proyectiles balísticos. Tampoco es posible descartar mediante el examen de sus osamentas que hayan existido otros impactos balísticos. En relación al proyectil balístico dubitado, del tipo encamisado, asociado al impacto de la 10° vertebra de la víctima, conforme al análisis balístico realizado en el presente informe pericial, se ratifica que este podría corresponder al calibre 32 Auto (7,65 mm), o bien al calibre 25 Auto (6,35 mm), los cuales no son compatibles entre sí, sin ser posible



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWEXQVJMSN

establecer a cual exactamente corresponde, debido al estado de oxidación de dicha evidencia, descartándose desde el punto de vista de su examen morfométrico, que haya correspondido al calibre 7,62x33 mm (30 Carabine). En relación a la secuencia de los disparos, el o los disparos recibidos por la víctima sobre su ulna izquierda, costillas izquierda y 10° vértebra, ocurren mientras esta se encontraba de pie, posiblemente en un contexto de lucha. El primer disparo recibido en la cabeza de la víctima, el cual es necesariamente mortal, lo hace caer bruscamente al suelo, haciendo que éste golpee en su mentón y punta de la nariz, lo que justificaría que se haya tenido la impresión en la época, de que la víctima tenía un impacto balístico en dicha zona. El segundo disparo recibido sobre la cabeza de la víctima ocurre cuando se encuentra ya en el suelo, boca abajo. **Por lo tanto, dicho informe concluye: “Se establece como hipótesis investigativa, que el Mayor Patricio Ferrer Ducaud, podría haber realizado el disparo en la vértebra de la víctima, mientras que los disparos en su cabeza habrían sido realizados por Miguel Lorca Escobar”.** Dicho informe fue suscrito por el Perito balístico y Comisario, Sr. Miguel Chaparro Vega, según consta a fojas 2.011; **F) Informe pericial balístico N°565/021** de 21 de abril de 2021, evacuado el 21 de abril de 2021 por el Laboratorio de Criminalística Central de Santiago, a fojas 2.040 y siguientes, el que en sus conclusiones señala que: “Considerando los informes periciales desarrollados a la fecha, y las distintas versiones realizadas por los testigos, no resulta viable que el disparo recibido por la víctima en su ulna izquierda, 7° y 8° costilla y 10°vértebra, hayan sido realizados por un arma de fuego calibre 30 Carabine, como así mismo, que los disparos sobre el cráneo de la misma, hayan sido realizados por un arma de fuego, de igual calibre, del tipo pistola o revólver”; **G) Informe pericial balístico reservado N°05/2019** evacuado el 18 de octubre de 2019 por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, a fojas 1.918 y siguientes. En cuanto a sus conclusiones balísticas se establece que: “Es posible establecer que la víctima Joaquín Espinoza Ojeda, recibió un primer disparo encontrándose de pie, desde el vértice anterior izquierdo, el cual traspasó su brazo izquierdo, ingresó en el tórax por la 7°costilla izquierda, continuo su recorrido intracorpóreo en sentido levemente horizontal hacia posterior



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

y derecha, arribando a la 10<sup>o</sup> vértebra torácica y posiblemente saliendo el proyectil del cuerpo. Cayendo al suelo de frente, golpeando su rostro contra el suelo, girando por dicho motivo u otro, su cabeza hacia la izquierda, momento en el cual recibe un segundo conjunto de disparos en la cabeza (dos), el primero realizado desde el vértice superior izquierdo, mientras que el segundo es realizado desde el vértice inferior izquierdo de su cuerpo, describiendo en ambos casos trayectorias descendentes respecto a los tiradores. Las ubicaciones de los tiradores señaladas precedentemente son concordantes en posición con las planteadas por el Señor Lorca Escobar, en relación a que en dichas posiciones se encontraban las únicas personas que mantenían armamento largo (Carabina Garand).

**Vigésimosegundo:** Que, el análisis conjunto de los antecedentes referidos en las motivaciones precedentes y en particular; el informe de autopsia N°144/73 de 29 de septiembre de 1973, suscrito por el Dr. Mamerto Gorena; así como los informes medicolegales consignados en el motivo decimocuarto, que concluyen que la causa de muerte de los restos óseos exhumados corresponde a un traumatismo craneano y torácico por proyectiles balísticos únicos, sosteniendo que los traumas balísticos están representados por las lesiones por proyectil a nivel del cráneo, columna vertebral, costillas y ulna izquierda, las cuales representan a lo menos tres trayectorias balísticas independientes y coetáneas entre sí y que las lesiones balísticas descritas corresponden a una forma médico legal homicida, unido a las conclusiones de los informes periciales balísticos, en cuanto confirman la dinámica de la agresión sufrida por la víctima Joaquín Espinoza Ojeda, a través de disparos de dos armas distintas, señalando las trayectorias balísticas y el orden probable en que se sucedieron, unido a las declaraciones de los testigos presenciales que ese día se encontraban en la Intendencia de Antofagasta, así como los testimonios vertidos por los familiares y amigos de la víctima, confirman la causa de muerte que se expuso en el certificado de defunción, en que la víctima recibió un disparo en su ulna y costilla izquierda, y a lo menos dos tiros de proyectil de arma de fuego en su cabeza, lo que ocasionó la destrucción de la masa encefálica y fracturas múltiples de cráneo, lesiones que en conjunto



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

provocaron la muerte de don Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, lo que coincide con los demás antecedentes y testimonios que se incorporaron al proceso.

**Vigesimotercero:** Que, en lo que mira a los hechos ocurridos inmediatamente después del fallecimiento de Joaquín Espinoza Ojeda, y lo que ocurrió con su cuerpo hasta que fuera encontrado en la morgue de Antofagasta por los testigos Enrique Rivera y Carlos Varas, según se relata en el motivo decimotercero precedente, se cuenta con la declaración de **Luis Augusto Meza Espinoza**, suboficial mayor en retiro del Ejército, quien a fojas 377 y 554 declaró que en aquella época cumplía funciones como escolta del General Joaquín Lagos Osorio, expresando en relación al día de los hechos que: “Recuerdo que andaba con mi General Lagos almorzando, llegando a la Intendencia a eso de las 14:30 horas. A la llegada del General Lagos, se acercó a la oficina el coronel Adrián Ortiz Gutman, quien le dio cuenta a mi General sobre la detención de un taxista, cuyos datos personales ignoro, quién señaló al General que le habían traído esa persona a la Intendencia y que el sujeto habría intentado agredirlo, exhibió una de sus muñecas vendadas donde dijo que el sujeto lo había mordido. El General Lagos dispuso que el cuerpo fuera retirado del lugar por personal de la morgue de la ciudad de Antofagasta, quienes llegaron a los pocos minutos y retiraron el cadáver, observando cuando lo estaban sacando del lugar. Los hechos anteriormente relatados sucedieron en el segundo piso de la Intendencia, específicamente frente a la puerta de acceso a la oficina del General Lagos, pues en ese lugar estaba la camilla con el cuerpo cuando nosotros llegamos a la Intendencia.” A esta declaración debe agregarse el testimonio del suboficial mayor en retiro de Carabineros, **Segundo Contreras Riffo**, quien a fojas 1.246, 1.249, 1.260 y 1.268, declaró que: “Recuerdo que el día 12 de septiembre de 1973, en circunstancias que me encontraba de turno ambulancia en el Grupo de Instrucción, recibí un llamado de la Central de Comunicaciones de Carabineros, quien me ordenó concurrir a la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, no recordando el nombre del conductor que me acompañó en la ambulancia. El hecho es que llegué a ese lugar y me entrevisté con los militares, me parece que los hechos ocurrieron antes del mediodía, el personal que estaba de guardia en la



Intendencia me indicó que subiera a uno de los pisos del recinto y al llegar al lugar (segundo piso de la Intendencia) me encontré con una persona fallecida que estaba tendida de cúbito dorsal dentro de una oficina. Al llegar al lado del cadáver, me percaté que había gran mancha de sangre y el cuerpo aún se encontraba tibio. El oficial que estaba a cargo, cuyos datos personales ignoro completamente, me ordenó que me llevara el cuerpo respondiéndole que bajaría a buscar la “cubre cadáveres”, pero el militar se molestó mucho diciéndome que me lo llevara pronto a la morgue, bajé rápidamente a la ambulancia, saqué la camilla volviendo rápidamente al lugar donde se encontraba el cuerpo de la persona, a quien tomé, subí a la camilla y saqué del lugar en la ambulancia como me lo habían ordenado, luego concurrí al Hospital a buscar la llave de la morgue, que en ese entonces estaba ubicado a un costado del Cementerio General, lugar donde dejé el cuerpo de la persona cuyos datos personales ignoro completamente, para luego regresar a dejar las llaves al Hospital y regresar al grupo de instrucción para seguir con mis labores habituales. Ambas declaraciones se ven corroboradas, además, por los dichos de Rigoberto Figueroa, Dante Paiva y Francisco Silva, resumidas en el considerando decimoctavo, todos los cuales se refieren en términos similares a la apresurada manera en que personal militar retiró el cadáver de Espinoza Ojeda desde las dependencias de la Intendencia. No debe olvidarse, además, que a fojas 18 se incorporó al proceso **recorte de prensa del diario “El Mercurio”**, que circuló el día 17 de septiembre de 1973 en la ciudad de Antofagasta, remitido por el Programa Continuación Ley N°19.123 del Ministerio del Interior, donde se encuentra una publicación titulada: “Activista Muerto en la Intendencia”. En esa publicación se indica: “Un activista político que provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector de El Trocadero y posteriormente agredió a un jefe del Ejército que lo interrogaba, fue muerto en la tarde del sábado por la escolta del oficial militar. El extremista fue identificado como Joaquín Segundo Espinoza Ojeda, de 36 años, sin antecedentes policiales pero con identificación como activista. Las informaciones señalan que Espinoza, provocó el volcamiento de un vehículo militar en el sector de El Trocadero con intenciones asesinas. Al ser llevado para un interrogatorio a la Intendencia de Antofagasta agredió al jefe que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

inquiría algunos antecedentes. Ante el ataque del activista la escolta militar le disparó. Con Joaquín Espinoza aumentó a cinco el número de muertos entregados por la Jefatura de Zona en estado de sitio". Todos estos testimonios y antecedentes dan cuenta de la manera en que se procedió por parte de la jefatura militar de la época a encubrir las circunstancias que rodearon el homicidio de Joaquín Espinoza Ojeda, elaborando un burdo relato justificativo del ajusticiamiento, que evidentemente buscaba impedir alguna acción del entorno de la víctima, la que en el contexto político imperante quedaba completamente invalidada por la calificación de "extremista", y omitiendo cualquier tipo de denuncia o investigación de los hechos, garantizando de este modo la impunidad de los involucrados.

**Vigesimocuarto:** Que, de esta manera el análisis de la prueba rendida en el proceso y analizada en las motivaciones precedentes permite dar por acreditados los hechos materia de la acusación, en los siguientes términos:

A) Que el día 15 de septiembre de 1973, a raíz de un accidente vehicular producido en una arteria de la ciudad de Antofagasta en que se vio involucrado un móvil conducido por Joaquín Espinoza Ojeda que se encontraba detenido en la calzada producto de un desperfecto mecánico y un vehículo militar que resultó volcado; personal de las Fuerzas Armadas procedió a su detención, trasladándolo a la Intendencia de la Región de Antofagasta, específicamente al segundo piso de dicho edificio.

B) Que, en una de las dependencias ubicadas en las proximidades de la oficina del Intendente, junto al coronel Adrián Ortiz Gutman (fallecido) se encontraba el Mayor Patricio Ferrer Ducaud, vestido de civil, quien a la sazón se desempeñaba como Jefe del Departamento II de Inteligencia Militar del Cuartel General de la Sexta División de Ejército, y en el exterior de dicha oficina, se encontraba la víctima custodiado entre otros por el Cabo Segundo Miguel Ángel Lorca Escobar, Instructor de la Escuela Blindados de Antofagasta y el Cabo Alumno Pedro Reinaldo Silva Álvarez, quien momentos previos a los hechos se había volcado en el vehículo militar en el que transitaba al tratar de evitar el choque con el vehículo de la víctima que se encontraba en panne en la ruta.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

C) Que, en el contexto del interrogatorio practicado a Espinoza Ojeda en esa dependencia de la Intendencia, el coronel Ortiz Gutman salió sobresaltado, abalanzándose sobre la víctima, ordenando en ese instante al Cabo Lorca Escobar que le disparara con el arma larga que portaba, haciendo lo mismo el Mayor Ferrer Ducaud con su arma de puño, ejecutando ambos al detenido, propinando el referido Mayor, con su arma de fuego corta, disparos en el sector de su ulna y costilla izquierda, mientras que el Cabo Lorca Escobar le propinó dos disparos en la cabeza con su carabina Garant.

D) Que, producto de la dinámica descrita, la víctima resultó con a lo menos un impacto en la región intercostal izquierda y dos heridas transfixiantes en la cabeza, que produjeron estallido de cráneo y destrucción de masa encefálica, ocasionándole la muerte por "traumatismo craneano y torácico por proyectiles balísticos únicos".

#### **Calificación jurídica de los hechos:**

**Vigesimoquinto:** Que, los hechos referidos en el motivo precedente son constitutivos de un delito de homicidio calificado, en grado de consumado, cometido en la persona de Joaquín Espinoza Ojeda, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391 número 1° circunstancia primera del Código Penal, esto es, con alevosía en su modalidad de actuar a sobre seguro, desde que se asesinó a una víctima desarmada mientras se encontraba detenida bajo custodia de personal militar, en las dependencias del segundo piso de la Intendencia de la Región de Antofagasta, sin posibilidad alguna de resistirse o defenderse, siendo detenida por efectivos del Ejército y trasladada a ese lugar a consecuencia del accidente vehicular en que se vio involucrado el vehículo conducido por la víctima, mientras se encontraba detenido en la calzada producto de un desperfecto mecánico, lo que ocasionó el volcamiento del vehículo militar que transitaba por esa ruta. El motivo que llevó al personal militar de las Fuerzas Armadas a su detención y posterior traslado y asesinato en las dependencias de la Intendencia de Antofagasta, no es otro que el accidente vehicular en el que se vio involucrada la víctima y que según su errado parecer, se debió a un intento de “emboscada” que la víctima pretendía realizar a esa patrulla militar, no existiendo ninguna otra razón



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

que justificara su detención, hecho que fue perpetrado el 15 de septiembre de 1973, en la comuna de Antofagasta, puesto que el asesinato de don Joaquín Espinoza Ojeda se ejecutó actuando los hechores con alevosía, esto es, sobre seguro, tratándose la víctima de un trabajador marinerero de bahía, de puerto, siendo incluso simpatizante del Partido Nacional en aquella época, según los propios dichos de los testigos que declararon en el proceso. En ese sentido su colega y amigo Mario Saavedra Barahona a fojas 723 y 736, expuso “Don Joaquín era un marinerero de bahía y se juntaba con nosotros en nuestra sede. Sobre el particular debo indicar que Espinoza, a quien conocíamos cariñosamente como “el pelado Joaquín”, llegó a trabajar con nosotros en el año 1963 aproximadamente. Con respecto a los hechos que se investigan, para los sucesos del día 11 de septiembre de 1973, recuerdo que Joaquín exclamó; “*jodieron los cabeza de piedra*”, pues él y su familia eran del Partido Liberal”. Constan además los dichos de su esposa, a fojas 13 de estos autos, doña Rosaura Barraza Araya, quien expresó: “Mi marido no tenía militancia política, solo había estado inscrito en el Partido Nacional. En similar sentido a fojas 93 y 161, declaró su amigo don Enrique Rivera Bracamonte y a fojas a fojas 236 y 247, otro de sus amigos, don Carlos Varas Leiva y a fojas 713, el funcionario militar, Mario Villalobos Medina, relató que en un momento cuando vio a la víctima en la Intendencia, ella le dijo que era de Renovación Nacional (sic) y que no tenía nada en contra del Ejército.

Lo anterior unido al contexto en el cual se encontraba vigente el Gobierno Militar, por lo que las fuerzas militares tenían el control total y absoluto del país, según se ha dejado de manifiesto con las probanzas que se han citado, sumado a la circunstancia de dispararle al cuerpo más de un tiro, sin que cupiera duda alguna de que cualquier impacto podía causar la muerte de la víctima, como efectivamente sucedió con don Joaquín Espinoza Ojeda, poniendo los hechores todo de su parte, esto es, agotando la ejecución de la conducta típica, logrando así conseguir su cometido y dar muerte a la víctima. Existió sin duda, un elemento subjetivo, que fue el aprovechamiento del estado de indefensión en que, en esas circunstancias, se encontraba el ofendido, circunstancia que fue utilizada por los perpetradores de estos ilícitos, quienes se valieron de este escenario para llevar a





cabo su obrar “a traición y sobre seguro”, quitándole la vida a la víctima, toda vez que está debidamente acreditado con los elementos allegados al proceso, que don Joaquín Espinoza Ojeda, fue asesinado con armas de fuego de guerra, disparándole al menos en una ocasión en el sector de su ulna y costilla izquierda, además de dos tiros certeros en su cabeza, con el tiempo y distancia más que necesarios para hacer puntería al blanco que se les presentaba sin ninguna interferencia de ninguna clase y en el caso del acusado Lorca Escobar, previamente instruido por su superior jerárquico -el coronel Ortiz Gutman- de dispararle directamente a la víctima, lo que le provocó la muerte de forma instantánea, alrededor de las 16:30 horas del 15 de septiembre de 1973, siendo las lesiones causadas mediante el uso de proyectiles balísticos.

Lo antes expuesto, ocurrió en el momento en que la víctima se encontraba detenida en el segundo piso de la Intendencia de la ciudad de Antofagasta, la que a partir del 11 de septiembre de 1973, estaba siendo custodiada por personal militar, en su mayoría alumnos pertenecientes a la Escuela de Blindados de Antofagasta, de la que formaba parte el acusado Lorca Escobar como Instructor y donde además funcionaba -en una de las oficinas del segundo piso- el Departamento Segundo de Inteligencia del Ejército, al mando del acusado Patricio Ferrer Ducaud.

En este sentido, la alevosía es una calificante que actúa en la comisión de los ilícitos, que demuestra mayor peligro al bien jurídico protegido, la vida del ser humano, denotando un alto grado de peligrosidad por parte de los autores de estos ilícitos, quienes no tuvieron motivos para temer el fracaso de su accionar y no corrían riesgos de ningún tipo, siendo mayor aun el reproche social de su actuar, por cuanto se desarrolló en relación a una víctima desvalida, mientras se encontraba detenida por los hechores, sin tener posibilidad alguna de defenderse ni de ocultarse para evadir los disparos que le dirigieron directamente a su cuerpo.

### **Delito de lesa humanidad**

**Vigesimosexto:** Que, de los antecedentes allegados al proceso fluyen numerosos elementos para determinar que la muerte de Joaquín Espinoza Ojeda, se debió únicamente a la actitud de abuso que adoptaron los acusados, alentados



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

por el manto de impunidad que los protegió y para lo cual, además, se buscó vincular al ofendido a un aspecto delincencial, específicamente a un intento de emboscada de su parte en contra del vehículo militar, sosteniendo que el plan de la víctima no habría sido otro que volcar la patrulla militar donde viajaban funcionarios del Ejército. Tal y como se razonase latamente en el considerando decimosexto, la pretendida agresión o emboscada de parte de Espinoza Ojeda nunca existió, y así fue reconocido por uno de los ocupantes del jeep militar, Pedro Silva Álvarez, quien explicó el carácter fortuito del accidente. Aún más, se cuenta con la declaración de Mario Villalobos Medina, funcionario que había enviado una comitiva en dirección al aeropuerto, quien expresamente señaló que el accidente fue con un vehículo conducido por una dama que estaba aprendiendo a conducir en compañía de su pololo, a lo que se une el relato de Carlos Varas Leiva, quien compartió con la víctima el día de los hechos, enterándose de los planes que tenía para esa tarde de verse con una amiga, descartando con ello cualquier hipótesis ligada a actividades políticas ni mucho menos “subversivas” de parte del occiso. En el mismo sentido obran los testimonios de doña Rosaura Barraza Araya, esposa de don Joaquín Espinoza Ojeda, quien expresó: *“Ese día -15 de septiembre de 1973-, se quedó empana en la esquina de Los Pimientos con Pedro Aguirre Cerda. La causa de la detención según se explicó, fue que mi marido pretendía realizar algún acto tendiente a liberar a un detenido que viajaba en un jeep del Ejército...pero según la persona que nos informó sobre la detención, mi marido no tuvo nada que ver con aquello, pues dicho vehículo chocó con una camioneta de la “FACH”, sin que mi marido tuviera participación alguna”*. *“La verdad es que mi marido no era un activista político. Fue uno de los primeros en poner bandera después del golpe militar”*. A su vez, a fojas 90 y 160, depuso doña María Cristina Espinoza Barraza -hija de la víctima- señalando que los militares en esa época reconocieron el error que habían cometido y admitieron que la muerte de su padre se habría producido solo por haberse involucrado en un accidente de tránsito, sin que él participara de ningún partido político, agregando que tampoco era activista, como se dijo en los diarios de la época.



De lo expuesto se deriva que las razones para la detención y posterior asesinato de Joaquín Espinoza Ojeda no se vinculan a alguna actuación de significación política de su parte, ni siquiera a su pertenencia o simpatía con algún partido político o movimiento afín al gobierno derrocado, pues, de acuerdo con los dichos de su familia, amigos, compañeros de trabajo y demás testigos, la víctima simpatizaba con el régimen imperante en ese momento, habiendo sido inclusive partidario del Partido Nacional, según el relato entregado por su cónyuge, quien a fojas 13 de estos autos, expresó: “Mi marido no tenía militancia política, solo había estado inscrito en el Partido Nacional”. Se trata, en consecuencia, de una ejecución carente de toda justificación, debida al actuar doloso de parte de agentes del Estado, en violación de los derechos humanos más fundamentales de la víctima, en que hay una evidente utilización del aparato estatal tanto para la detención, como la posterior muerte y defenestración del ofendido, etiquetándolo de “extremista” y utilizando los medios de comunicación, prensa y televisión, para blanquear la situación y garantizar la impunidad de los responsables, con participación de toda la cadena de mano, incluidos el coronel Ortiz Gutman y el general Lagos Osorio (ambos fallecidos), según se advierte de los testimonios consignados en el motivo vigesimotercero, la aparición en televisión de Ortiz Gutman a que hacen referencia varios de los testigos, así como la publicación efectuada en el Diario “El Mercurio” de Antofagasta.

La calificación de delito de lesa humanidad, entonces, no exige que la víctima haya tenido una militancia política u opción política definida, o que el delito se haya cometido a causa de tal militancia u opción política de la víctima, bastando para su configuración la utilización ilegítima e indiscriminada en contra de un particular de toda la fuerza del aparato estatal, en concordancia con una política represiva que autorizó a los agentes del Estado para detener, afectar la integridad e incluso privar de la vida a los ciudadanos, tal y como lo ha razonado nuestra Excma. Corte Suprema en sentencia de 25 de mayo de 2017, dictada en autos Rol 78.951-2016.

**Vigesimoséptimo:** Que, el artículo séptimo del Estatuto de Roma considera al asesinato como un “crimen de lesa humanidad”, cuando se comete



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, situación que innegablemente ocurría en los primeros días posteriores al golpe de estado de septiembre de 1973, según lo describe el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación o “Informe Rettig”, en los términos ya señalados en el considerando séptimo de este fallo, y que encuentra sustento adicional en los antecedentes probatorios reunidos en la presente causa, en particular en los relatos de Enrique Rivera Bracamonte y Carlos Varas Leiva, en cuanto describen la multiplicidad y el estado de los cuerpos acumulados en la morgue de Antofagasta cuando concurren a buscar a su amigo Joaquín Espinoza Ojeda, así como la publicación de prensa que refiere que la víctima de autos sería el quinto de los “muertos entregados por la Jefatura de Zona en estado de sitio”. Valga en este punto recordar el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya citado en el motivo cuarto precedente, en orden a que *los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad.*

Por su parte, la Excm. Corte Suprema, en el fallo ya citado, explicó en el considerando octavo que la muerte de un individuo sin filiación política a causa de las maniobras dolosas desplegadas por los funcionarios estatales puede constituir un delito de lesa humanidad, *pues es incuestionable, no sólo en atención a los hechos del proceso sino, además, por lo que ha sido demostrado por diferentes informes, que en la época se implementó una política estatal que consultaba la represión de posiciones ideológicas contrarias al régimen, pretendiéndose la seguridad interna al margen de toda consideración por la persona humana a través de maniobras de amedrentamiento a los civiles y, sobretodo, la garantía de impunidad que el mismo régimen generó ante las responsabilidades penales y de todo orden*, lo cual resulta plenamente aplicable al caso de autos, encontrándose además incluido el occiso Espinoza Ojeda en la nómina de víctimas de violación de sus derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la



fuerza, conforme lo concluido por la Comisión Rettig, de lo cual ya se dejó constancia en el motivo duodécimo de esta sentencia.

Similar criterio ha sido sostenido por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia de once de febrero de 2015, en autos rol 2.309-2014, que ratificó el criterio que consideró delito de lesa humanidad el homicidio de Mario Iván Lavanderos Lataste, a la sazón mayor y alumno de la Academia de Guerra del Ejército, ocurrido el 16 de octubre de 1973, así como el fallo dictado por la Corte Suprema el 21 de marzo de 2019 en el proceso Rol N°34.392-2016, por el delito de homicidio de Miguel Estol Mery. En ambos casos, los hechos no tuvieron por objeto la represión política, sin perjuicio de lo cual fueron considerados como delitos de lesa humanidad, porque se cometieron como parte de la agresión generalizada o sistemática contra la población civil y en conocimiento sus autores de dicho ataque, abusando éstos del poder que les confería la entidad militar.

**En cuanto a la participación:**

**Vigesimoctavo:** Que, la acusación fiscal se dirigió en contra de Patricio Gerardo Ferrer Ducaud y Miguel Ángel Lorca Escobar. En orden a lograr determinar la intervención precisa que a cada uno de ellos le pudo haber cabido en la muerte de Joaquín Espinoza Ojeda, fuera de los antecedentes que han sido desarrollados en los considerandos que anteceden, se tuvieron en consideración las diversas declaraciones que prestaron en el proceso, así como las diligencias de inspección personal del tribunal, verificada con fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, en dependencias de la Intendencia de la Región de Antofagasta, y las reconstituciones de escena de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, en la que participaron el inculpado Patricio Ferrer Ducaud, y los testigos Luis Guzmán Mayorga, Alberto Rojas Mendoza, Dante Paiva Soto, Pedro Silva Álvarez, Carlos Pérez Díaz y Segundo Contreras Rizzo, de la que se dejó testimonio a fojas 1.268 y siguientes; así como la realizada con fecha quince de enero de dos mil diecinueve, que contó con la asistencia del inculpado Miguel Ángel Lorca Escobar, y de los testigos Francisco Molina Silva y José Bustamante Cárdenas. En ambas reconstituciones participaron profesionales de la PDI que generaron los siguientes informes periciales de interés: Informes planimétrico, fotográfico y de sección



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

sonido y audiovisual N°09/2017 y N°11, ambos del 26 de octubre de 2017; y N°08/2018 de 28 de febrero de 2018, evacuados por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, agregados al proceso a fojas 1.288, 1.307 y 1.466, que corresponden a la diligencia de reconstitución de escena efectuada en las dependencias de la Intendencia Regional de Antofagasta y los Informes pericial fotográfico reservado N°01 evacuado el 5 de febrero de 2019 por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, según consta a fojas 1.819 y en custodia a fojas 1.820 en que se mantiene el registro fotográfico de la diligencia de reconstitución de escena efectuada en la Intendencia de Antofagasta el año 2017; Informe Pericial (sección sonido y audiovisual) N°02/2019 evacuado el 7 de febrero de 2019 por el Laboratorio de Criminalística Central de Santiago, y un “CD” que contiene ese informe pericial custodiado a fojas 1.825; Informe pericial planimétrico N°01/2019 de 23 de enero de 2019, evacuado por el Laboratorio de Criminalística Regional de Antofagasta, de fojas 1.807 y siguientes. Contiene informe en relación a la reconstitución de escena del año 2019.

**Vigesimonoveno:** Que, al prestar declaración indagatoria a fojas 304, 459, 1.475, 1.477, 1.151, 1.533 y en diligencia de reconstitución de escena de fojas 1.268, el acusado **Patricio Gerardo Ferrer Ducaud** manifestó que, para el mes de septiembre de 1973, ostentaba el grado de Mayor en el Cuartel General de la I División del Ejército de Chile en la Región de Antofagasta y cumplía funciones como Jefe del Departamento II de Inteligencia, lo que es corroborado con el mérito de sus hojas de vida y calificaciones agregadas al proceso a fojas 1.169 y siguientes, en donde figura una anotación del 11 de septiembre de 1973, que indica: “Pasa a desempeñarse a la Intendencia de la Provincia y en su calidad de Jefe del Departamento Segundo, asume la Jefatura de la Inteligencia total del CAISI, bajo las órdenes directas del Jefe de Zona en Estado de Sitio, coordinando bajo su mando las fuerzas de servicio del Ejército, FACH, Carabineros e Investigaciones”.

En sus declaraciones refirió que a partir del mes de marzo de 1973 pasó a integrar el Cuartel General, en la ciudad de Antofagasta, que estaba al mando de don Joaquín Lagos Osorio, donde cumplió funciones de Jefe del Departamento II



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

de Inteligencia. Para el 11 de septiembre de 1973 asumió como Intendente en la ciudad el General de Ejército Joaquín Lagos Osorio, y se designó para las labores de orden interno al coronel Adrián Ortiz Gutman, con el cargo de Jefe del Estado Mayor Administrativo de la Intendencia, quien ocupaba hasta ese momento el cargo de director de la Escuela de Blindados, por lo que se instaló en las dependencias de la Intendencia con un grupo de funcionarios de la Escuela de Blindados, eran alrededor de 5 o 6 personas. En relación con los hechos investigados, expresó: “Presenció cerca del mediodía, que en el pasillo existente entre la casa del Intendente en esa época y la oficina del General trajeron a una persona detenida, acusada de haber ocasionado un accidente de tránsito de un jeep militar de dotación del Regimiento de Artillería de Antofagasta. En el accidente se produjo el volcamiento del vehículo militar, resultando lesionado un conscripto y detenido el sujeto que lo había ocasionado, se trataba de una persona de contextura gruesa y alto de estatura, quien estaba en manifiesto estado de ebriedad, quien fue llevado a la presencia del coronel Ortiz, observando que interrogaron al detenido en el pasillo, y en un momento escuché que el coronel Ortiz, insultó al sujeto, quien inmediatamente se abalanzó en su contra con la intención de agredirlo, ordenándole a un funcionario subalterno de la Escuela de Blindado que disparara contra el sujeto, con su fusil de cargo, procediendo como le habían ordenado, cayendo el sujeto al piso, fallecido. Supe que se trataba de un funcionario del Puerto de Antofagasta, con marcada tendencia de izquierda y era de apellido Espinoza. El cuerpo fue sacado de la Intendencia y llevado a la morgue de la ciudad”. Señaló que el autor del disparo estaba identificado pero que él desconoce antecedentes sobre la identidad de esa persona. Agregó que después de este incidente, al coronel Ortiz Gutman le realizaron curaciones en una de sus manos. En esta declaración señaló además que él solo presenció los hechos por encontrarse en ese lugar, pero sin tomar participación directa en ellos. En similar sentido declaró a fojas 459: “Sí, recuerdo que hubo un muerto de apellido Espinoza, los hechos ocurrieron en los pasillos de la Intendencia, los presencié, no participé en ellos, solo fui un espectador. Espinoza era un funcionario del puerto, lo llevaron detenido porque estaba



borracho y había chocado un jeep militar, se abalanzó sobre el coronel Ortiz, y este último ordenó a uno de los subalternos dispararle y murió, el coronel Ortiz era una persona de carácter violento y no de mi agrado”. A su vez, en su declaración agregada a fojas 1.151, expuso que en el momento en que ocurrieron los hechos, utilizaba una pistola española pequeña, con balas pequeñas, no recuerda la marca, la que era proporcionada por el Ejército, de propiedad privada, negó utilizar armamento “Colt.45”, ya que indicó que su labor era de orden administrativo y asesoraba al General Joaquín Lagos Osorio, quien siempre le conversaba y pedía su opinión en asuntos relacionados a Consejos de Guerra. Señaló: “Ese día yo vestía de civil, siempre andaba con un par de auxiliares y sin armamento, salvo yo que portaba una pistola que me había vendido el Ejército y que usábamos todos los oficiales”. Indicó además que la oficina que él habitualmente ocupaba se encontraba ubicada en el Cuartel General, en el camino de la playa, al lado de la Escuela de Blindados y que el día en que ocurrieron estos hechos por “casualidad se encontraba en ese lugar” (se refiere a la Intendencia) ya que solo estaba realizando una diligencia. Sin embargo, más adelante en esa misma declaración señaló que: “En esos momentos era normal llevar personas detenidas a la Intendencia”.

Por otra parte, al ser interrogado en relación al autor de los disparos, expuso: “Obedeció a una orden directa emanada del coronel Gudman (se refiere a Ortiz Gutman), quien era el director de la Escuela de Blindados, el cabo o conscripto que disparó usaba uniforme militar. Ortiz resultó con una herida en su mano, no podía precisar si se trató de una mordida, vi que tenía una venda en su mano y en el hall el doctor Viti lo estaba curando. Prácticamente llegué en el momento que Gutman ordenó al Suboficial que disparara con un fusil que portaba, no era un problema de mi responsabilidad. Yo estaba allí y presencié cuando el coronel le dio la orden de disparar. Recuerdo al coronel Ortiz Gutman como una persona muy violenta, siempre andaba armado”. “Solamente presencié un disparo, el del fusil porque venía llegando y vi al Suboficial disparando con un arma larga. Reitero con seguridad, no haber disparado en contra de esa persona”. A su vez, en la diligencia de reconstitución de escena que se efectuó en este proceso,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



expresó que cuando venía subiendo por la escalera que conectaba con el exterior del edificio, vio una violenta discusión entre el coronel Ortiz Gutman y un detenido, indicó ver cuando el detenido acecha a Ortiz Gutman, sin embargo, éste no alcanza a abalanzarse sobre él, pues en ese momento Ortiz Gutman le ordenó a uno de los conscriptos presentes que le dispare, por lo que este conscripto o Cabo, le dispara en una sola oportunidad falleciendo el detenido en forma instantánea. Afirmó que se encontraba justo detrás de Ortiz Gutman, justo en la línea de tiro del conscripto que dispara, de tal manera que el disparo pasó sin lesionar ni a él ni a Ortiz Gutman. A su vez, reconoce llevaba consigo un arma, se trataba de una pistola Walther PPK. En relación con la víctima indicó que se enteró que era un empleado del puerto y de tendencia de izquierda, además agregó que ese día el detenido se encontraba ebrio. Indicó que no se dejó constancia que quedó bebido, que venía de un almuerzo ocurrido en el Puerto y que por ese motivo andaba con tragos. Expuso: "Cuando yo llegué a la oficina el Señor Espinoza venía con los brazos abiertos tirándose encima del Sr. Ortiz y fue en ese momento que el comandante Ortiz ordenó a uno de sus mismos guardias, que traía del Regimiento que comandaba, que dispararan. Eso lo hizo uno de sus soldados, a unos 10 metros de distancia de donde se encontraba Ortiz junto a Espinoza. Esa orden de Ortiz al Cabo fue en forma fuerte. El Cabo solo disparó un tiro. Respecto a los otros dos tiros, tengo la impresión que fue Ortiz, pero yo no lo vi. Por investigaciones que realicé posteriormente el jeep que chocaron tuvo tres conscriptos heridos que fueron a dar al Hospital, además el jeep estaba afuera de la Intendencia y fue chocado por el Señor Espinoza, al parecer por su borrachera. No recuerdo bien si ese día estaban junto a mí los otros funcionarios de la sección segunda, pero me parece que no porque yo solo había ido a la Intendencia a presentar a mi General Lagos un informe de Inteligencia exterior, sin perjuicio que alguno pudo haber estado trabajando en la Intendencia ese día. Yo trabajaba prácticamente todo el día en el Cuartel General, llegaba solo a ciertas horas a Investigaciones".

A su vez, en su declaración de fojas 1.533 expuso que Ortiz Gutman tenía fama de ser una persona muy violenta, existiendo varias declaraciones al respecto



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

ya que hablaba de forma muy fuerte y violenta en su manera de actuar, tanto así que participó disparando en los fusilamientos ocurridos en la Quebrada El Way. Respecto al civil Espinoza no quedó constancia que llegó bebido. Él venía de un almuerzo ocurrido en el Puerto y “andaba con tragos”.

A fojas 2.598 consta la audiencia confesional del acusado Ferrer Ducaud, de 30 de septiembre de 2022, donde interrogado por sus declaraciones anteriores, en relación a si las ratifica o no, señala: “Sí, ratifico todo lo que he dicho, hay un solo problema, creo que digamos que yo me he confundido o no supe bien explicarlo, es el asunto de que pistola usaba yo, si era una Star de un calibre muy bajo 6,35 o bien usaba un revólver alemán, no me acuerdo ya de la marca, en que el calibre es 9. En ese asunto tengo confusiones, que no me acuerdo bien cuál de ellas, pero de que usaba armamento, yo usaba armamento”.

**Trigésimo:** Que, en cuanto al acusado **Miguel Ángel Lorca Escobar**, constan sus dichos a fojas 1.315, 1.592 y a fojas 1.764 en diligencia de reconstitución de escena que se realizó en el proceso. Indicó que en el año 1973 era instructor de contingente de los conscriptos que llegaban a hacer el servicio militar, en la Escuela de Blindados de Antofagasta, su grado en ese entonces era cabo segundo, lo que se condice con el mérito de sus hojas de vida y calificaciones que se custodian en autos a fojas 1.827, donde figura que en el periodo que comprende desde el 1 de julio de 1972 y hasta el 30 de junio de 1974, tenía el grado de Cabo Segundo de la Escuela de Blindados.

Expuso que el día de los hechos, se encontraba cumpliendo funciones de guardia de la Intendencia de la región de Antofagasta y que su superior directo era Adrián Ortiz Gutman, expresando: “Sí, tenía conocimiento que una persona fue llevada a la Intendencia y posteriormente falleció, el que fue trasladado por un oficial de la Fuerza Aérea, que venía a cargo de la patrulla que traía esa persona detenida. Se trataba de un señor de alrededor de 40 años, era alto, macizo, como yo, ese día yo estaba haciendo guardia afuera de la Intendencia, me lo entregaron y me dijeron que lo llevara al segundo piso y me fui conversando con él hasta la oficina del General Lagos, quien en ese momento no se encontraba y lo reemplazaba el coronel Ortiz Gutman, me dejaron a cargo del detenido mientras la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

patrulla completa ingresó a hablar con el coronel. Me contó que se había cruzado una patrulla, habían tenido un problema y lo habían detenido. El caballero me preguntó qué le iba a pasar y le respondí que no podía hablar con él. Cerca de quince minutos después salió el coronel muy alterado y comenzó a golpear al detenido, con golpes de puño, él era conocido por ser alterado, el detenido no alcancé a ver si había atacado al coronel, pero lo que hacía era defenderse o esquivar los golpes, pero el coronel Ortiz se accidentó la mano y el personal que estaba ahí con él empezaron a insinuar si es que lo mataban. Yo estaba a un par de metros de donde esto estaba ocurriendo, parcialmente tenía vista de lo que estaba pasando, estaba de frente a los hechos junto con el soldado, ambos estábamos armados con carabina Garand. Lo que alcancé a ver es que el detenido no estaba agresivo, trató de esquivar los golpes y no sé cómo se hirió la mano el coronel. Al detenido le dispararon con el armamento de servicio, el personal de oficiales tenía pistolas y con esas pistolas les dispararon y el coronel nos dijo a mí y al soldado “qué estábamos esperando”, “nos ordenó que disparáramos”, cuando yo disparé el detenido estaba en el suelo, ya había sido herido, pero no le disparé al cuerpo. El conscripto también disparó, no recuerdo su nombre. Después de todo eso, el detenido quedó en el piso, un oficial que estaba ahí me ordenó que lo registrara y tuve que sacarle la identificación, no quise verle la cara, le registré los bolsillos y le saqué el carnet de identidad de un bolsillo de su pantalón y se lo entregué al oficial de seguridad que salió de la misma oficina de donde salió el coronel. Cuando llegaron con el detenido, el oficial de la Fuerza Aérea me ordenó que me quedara con él, mientras la patrulla ingresó a la oficina del coronel Ortiz; después cuando el coronel salió de su oficina, salió rápido y salió el personal que estaba en la reunión con él, ese personal fue quien disparó, no fue un solo disparo por el que falleció este señor, yo vi a ese personal con armas en las manos, pistolas, y cuando el detenido ya estaba en el suelo, estaba como encogido, y en ese momento yo disparé pero el disparo mío no fue al cuerpo de este señor, dentro del nerviosismo no le disparé directo a la persona, el conscripto también disparó. Era muy complicado cumplir con esa orden porque yo estaba conversando con esta persona, él me había preguntado qué le iba a pasar, este



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

señor no estaba ebrio ni cosa por el estilo. No vi al coronel con arma, no me pidió mi arma, tampoco al conscripto. Yo no ubicaba al personal que trabajaba en la Intendencia porque no era guardia permanente en ese lugar. Los que dispararon salieron de la oficina del coronel, yo sabía que eran oficiales. Yo vi que las personas que venían en la patrulla ingresaron a hablar con el coronel, ahí venía un oficial de la Fuerza Aérea con uniforme militar y otros integrantes más de los cuales algunos de ellos venían de civil. Los que venían en la patrulla podrían corresponder a las personas involucradas en el accidente y que según indicó el detenido iban a exceso de velocidad y se habrían volcado y por eso lo habrían detenido a él. Cuando entregué el carnet de la víctima, me retiré del sector, me ordenaron que me retirara a mi puesto en el frontis de la Intendencia, donde estaba cuando llegó la patrulla. El conscripto y yo éramos los únicos que estábamos en ese lugar con armas de guerra, los oficiales tenían pistola”. A su vez a fojas 1.151, se dio lectura al acusado Miguel Lorca Escobar, sobre lo declarado por Ferrer Ducaud. Al respecto discrepó de los dichos de Ferrer, por cuanto señaló que la orden de disparar a la víctima la recibieron del coronel o de alguno de los oficiales que estaban con el coronel, recuerda que escuchó; “ustedes qué están esperando que no disparan”, y ahí él tuvo que reaccionar cuando la víctima ya estaba tendida en el suelo. En declaración de fojas 1.592 el acusado Lorca Escobar declaró en similares términos a lo indicado en su anterior declaración de fojas 1.151. Indicó que los hechos ocurrieron en la antesala de la oficina del General Lagos. En relación con Ortiz Gutman vuelve a señalar que él era quien estaba agrediendo a la víctima y que era la única persona que hablaba fuerte mientras increpaba al afectado y que la víctima se defendió de la agresión. Expuso: “No disparé por sobre las cabezas del coronel y del Mayor Ferrer como él dice, cuando me ordenaron disparar ya le habían disparado al afectado. Yo estaba estupefacto, no entendía lo que estaba pasando y ahí recibí la orden de disparar, me dijeron y usted qué está esperando para disparar. Solo Ortiz Gutman interactuó con el detenido, es decir, solo él lo agredió, los demás estaban atentos y no participaron en la agresión y todo lo que vino, salvo que cuando estaba el coronel agrediendo al afectado, ellos decían: “le disparamos mi coronel”, y cuando



se accidentó de la mano el coronel, dieron la orden de disparar con el armamento que andaban trayendo ellos, **pistolas que no eran de gran calibre**. Solo sé que hubo más disparos que el que yo hice, pero no estoy en condiciones en estos momentos de identificar a alguien que los haya hecho”. A su vez, en la diligencia de reconstitución de escena Lorca Escobar señaló que el personal que le consultó a Ortiz Gutman si le disparaban al detenido, **vestía de civil** y que se trataba de personal militar que vestía así. Además, señaló que después de escuchar unos tiros recibió de Ortiz Gutman la orden de disparar con la carabina Garand que portaba, pero destaca que no lo efectuó hacia el cuerpo del detenido que ya se había caído de bruces al suelo. Refiere que la bala hizo un rebote hacia una cornisa, saliendo hacia el exterior, a unos tres metros de donde se encontraba parado. A su vez, a fojas 2.632, consta audiencia confesional de Miguel Lorca Escobar, en la que señaló: “el armamento que yo portaba era una carabina Garand M1 0.30, que era el armamento que usábamos para hacer guardia donde habíamos sido asignados”.

**Trigésimo primero:** Que, en relación con la participación atribuida al acusado **Patricio Ferrer Ducaud** en los hechos investigados, debe considerarse en primer término el tenor de sus declaraciones transcritas en el motivo vigesimonoveno, en cuanto el acusado se sitúa en el lugar y momento de ocurrencia del homicidio de Espinoza Ojeda, que presencié, reconociendo que vestía de civil y que se encontraba armado, con una pistola de bajo calibre, si bien niega haber disparado en contra del ofendido de autos. Su presencia en la intendencia y las funciones que desempeñaba en los primeros días del gobierno de facto se encuentran suficientemente acreditadas, además, por múltiples antecedentes reunidos en el proceso, entre ellos, la declaración de **Eliandro Barraza Bolbarán**, quien a fojas 1.567 expuso: “En ese tiempo yo era un poco más que un conscripto, siendo mi grado soldado segundo porque no fui a la Escuela. Nosotros trasladábamos a los detenidos a la Intendencia. La Intendencia fue tomada como punto de operaciones. Había boinas negras que andaban con sus boinas puestas, el único que usaba algo distinto era el Mayor Ferrer, quien usaba uniforme de combate. Ellos eran protegidos por un cuerpo de inteligencia,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

que eran militares que andaban de civil. Estas personas siempre andaban en la Intendencia". "Se comentaba que había fallecido una persona al interior de la Intendencia. La mataron porque la persona habría intentado atacar a un General y por eso le habrían disparado. No supe quién habría disparado, pero escuché que sacaron el cuerpo arrastrando. El Ejército en seguridad era mucho más experimentado que nosotros los de la Fuerza Aérea, por eso a nosotros no nos tomaban mucho en cuenta". En esta declaración se exhibió al testigo fotografía de Adrián Ortiz Gutman, indicando el testigo que se trataba de un general bien "jodido" y que lo veía en la Intendencia. A su vez, A fojas 377 y 554 declaró **Luis Augusto Meza Espinoza**, suboficial mayor en retiro del Ejército, quien manifestó que se encontraba cumpliendo funciones como guardaespaldas del general Joaquín Lagos Osorio y que este último tenía su oficina en el segundo piso de la Intendencia y que además en ese mismo piso estaba la oficina del coronel Ortiz Guttman y del comandante Patricio Ferrer Ducaud. De igual manera, a fojas 1.524, **Enrique Marin Irigoyen** (fallecido), mayor en retiro del Ejército, indicó que fue destinado en agosto de 1973 a la Escuela de Blindados, que en esa fecha estaba en la guarnición de Antofagasta, siendo recibido por el director de ese entonces, el coronel Adrián Ortiz Gutman. Recuerda que el jefe del Departamento Segundo era Patricio Ferrer Ducaud. En similar sentido, a fojas 1.484, 1.486, declaró **Atelio Ibarbe Villanueva**, suboficial mayor en retiro del Ejército, indicando que para el mes de septiembre de 1973 se encontraba trabajando como jefe de la sección de criptografía en el Departamento Segundo de Inteligencia. Recuerda que Ortiz Gutman fue designado Intendente por lo que se ubicó en las dependencias de la Intendencia en Antofagasta y que el Departamento Segundo estaba a cargo de Patricio Ferrer Ducaud. Por su parte, a fojas 267, 432, 1.155, depuso **Juan Emilio Zanzani Tapia**, quien indicó que para el año 1973 se encontraba destinado al Cuartel General como ayudante del general Joaquín Lagos Osorio. En ese sentido recuerda al fallecido Adrián Ortiz Gutman, señala que Ortiz Gutman ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Intendencia; agrega que en ese lugar no había encargado de inteligencia pero que sí estaba el encargado del Cuartel General y ese cargo lo ocupaba el acusado Ferrer Ducaud y que éste último



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

estaba a cargo del Departamento Segundo de Inteligencia. Expresó: “Un día, no recuerdo fecha exacta, me percaté que en el acceso principal a las oficinas del segundo piso, había sangre, comencé a consultar y me dijeron que un civil que había sido detenido por orden del coronel Ortiz, a raíz de un impasse de tránsito, fue citado a la Intendencia y el coronel Ortiz, al parecer, lo increpó por el hecho ocurrido en la vía pública, ante lo cual el civil trató de agredir al coronel Ortiz y el hombre de seguridad le disparó, de quien no recuerdo sus antecedentes personales, todos funcionarios del Servicio de Inteligencia o de la Escuela de Blindados”. En la declaración de fojas 1.155 consta que al testigo Zanzani Tapia, se le exhibieron los planos de la Intendencia que corresponden a la época en que ocurrieron los hechos, reiterando este testigo todo lo antes expuesto en relación con la sangre que ese día vio en las dependencias de la Intendencia. A fojas 1.050 y 1.205, **Dante Paiva Soto**, suboficial mayor en retiro del Ejército, quien en lo pertinente señaló que Ferrer era el jefe del Departamento Segundo de Inteligencia y que al fondo del pasillo del segundo piso de la Intendencia funcionaba la oficina que era del Departamento Segundo de Inteligencia. Además, manifestó que era posible que Ferrer hubiese andado en la comitiva que tuvo el accidente y que por eso haya llegado a la Intendencia en ese momento. En relación a los disparos que escuchó ese día, señaló que el tiro fuerte debió ser de fusil y los dos tiros suaves deben haber sido de pistola chica, pero no de las que usualmente se utilizan en el Ejército sino de una particular y que generalmente Ortiz andaba con su ayudante, quien llevaba consigo una pistola o un fusil y que algunos oficiales usaban una pistola chica calibre 7,62. Unido a esto último, a fojas 800 declaró **Waldo Rodríguez Zenteno**, señalando que para el 11 de septiembre de 1973, se encontraba trabajando en el Departamento Segundo de Inteligencia en las dependencias del Cuartel General de la Primera División del Ejército, siendo su Jefe directo el Mayor Patricio Ferrer Ducaud. En relación con los hechos investigados indicó no mantener información sobre lo ocurrido, sin embargo, expuso que toda la información llegaba a “manos del Comandante Ferrer”. En similar término declaró **Marcelino Traslaviña Rojas** a fojas 814 y 1711. En particular, Traslaviña Rojas indicó que para el 11 de septiembre de 1973 era



escolta del general Joaquín Lagos Osorio, señaló que su jefe era Ferrer Ducaud, que Ferrer a veces vestía de civil y otras de uniforme. En relación al armamento que ocupaba Ferrer, señaló que portaba una pistola, “remington americana” y que muchos funcionarios de la sección segunda usaban revólver como arma de cargo. En este punto conviene citar las declaraciones de fojas 1.694 y 1.705 de **Arturo Osoreo Cornejo**, cabo 1° en retiro del Ejército, quien expresó: “En el mes de septiembre de 1973 fui destinado para desempeñarme como guardaespaldas de mi general Lagos. Con posterioridad me llamó mi Comandante de Compañía, y me ordena que debo constituirme en el cuartel de Investigaciones, para ir a asesorar a dos interrogadores que habían allá, cuyos nombres eran el subteniente Enrique Marín Irigoyen y el otro era Jorge Barttlet Hazzart que pertenecían a la Escuela o Regimiento de Blindados, quienes cuando yo llegué estaban ejerciendo las funciones señaladas y cooperar en la búsqueda de personas que debían ser detenidas y trasladadas al Cuartel de Investigaciones. Respecto a mi actividad en el cuartel de Investigaciones yo tenía dependencia del comandante de Aviación Gonzalo Pérez Canto y del mayor Patricio Ferrer Ducaud, quien en los hechos era el que llevaba los hilos de las investigaciones, quien nos daba las órdenes verbales para ir a detener a tal o cual persona, una vez detenida era trasladada al cuartel de investigaciones, donde se los entregaba a estos dos oficiales a cargo. Para cumplir esta función yo estaba a cargo de una patrulla, de un clase y dos conscriptos, nos movilizábamos en una camioneta roja de doble cabina. Cuando llegaba una información a la unidad, el Mayor Ferrer nos llamaba a mí o a mi compañero y nos daba la orden de detener a una persona, normalmente nos indicaban que era para interrogarlo o conversar con él. Yo recuerdo haber ido a buscar a una persona que resultó ser un pastor evangélico, lo fui a buscar a su casa, hablé con su señora, le dije que yo mismo lo iba a traer de vuelta, pensando que era cierto lo que me habían dicho que iban a conversar con él y cuando volví después de dos días, el pastor -que era un hombre de edad- lo habían golpeado de una forma salvaje, no sé si fue Marín o Ferrer, me dijo riéndose: *recuerdas al pastor, le sacamos la cresta y lo único que decía era: Señor perdónalos, porque no saben lo que hace, y me dijo que era un alcance de nombre y completamente*





*inocente a esta persona la mandaron en calidad de bolsa para su casa. Yo solo por comentarios de pasillo me informaba de lo que estaba pasando y sobre qué se le interrogaba a la persona que estaba detenida”. Rememora también la aprehensión del Ex Intendente Gómez, en donde el acusado Ferrer Ducaud le ordenó ir a detenerlo a su domicilio, recordando que al efectuar el procedimiento el Ex Intendente le señaló que estaba muy enfermo, tenía una úlcera perforada, circunstancia que se la hizo saber a Ferrer pero a pesar de ello fue torturado; añade que le hizo entrega al mayor Ferrer sobre los exámenes médicos pero Ferrer le indicó que se retirara y no se metiera en problemas y textualmente exclamó: “todos estos comunistas desgraciados tienen que morir”. Señala el testigo que nunca pudo olvidar esas palabras dichas por Ferrer. Agregó que después se enteró que el intendente Gómez había quedado detenido en un comienzo en la Intendencia como una deferencia por su cargo, pero que se había fugado, lo que dio lugar a que él posteriormente lo detuviera por orden de Ferrer Ducaud.*

**Trigésimo segundo:** Que, si bien Ferrer reconoce que su cargo específico era de Oficial de Inteligencia en el área de operaciones, expuso que él era solo analista y que trabajaba medio día y no tenía relación con los presos políticos. No obstante a ello, a fojas 1.170 figura una anotación en su hoja de vida fechada el 30 de junio de 1974, en donde es felicitado por su calificador directo, en donde se indica: “Durante el tiempo que le ha correspondido actuar como Jefe del Depto. II de la VI D.E, ha demostrado una especial preparación profesional habiendo logrado con reducido personal idóneo una labor sobresaliente en las labores de Inteligencia de orden público, detectando a casi todos los focos extremistas y marxistas de esta zona, lo que ha traído una tranquilidad manifiesta y reconocida por todas las autoridades”. A su vez, los dichos de Ferrer Ducaud, no se condicen con las declaraciones de los testigos que declararon en el proceso y que señalaron que Ferrer era el Jefe del Departamento Segundo de Inteligencia del Ejército y que ese Departamento Segundo, a partir del 11 de septiembre de 1973, funcionaba permanentemente en dependencias de la Intendencia, específicamente en el segundo piso de ese edificio -mismo lugar en donde



ocurrieron los hechos- por lo que no resulta verosímil que el día de los hechos haya estado “por casualidad” en ese lugar, como aseveró. Más aún cuando en esa misma declaración de fojas 1.151, señaló que: “En esos momentos era normal llevar personas detenidas a la Intendencia”, lo que claramente indica un conocimiento de parte del acusado respecto a lo que habitualmente ocurría en la Intendencia, información que no podría conocer una persona que “por casualidad”, se encontraba en el lugar aquel día. Lo anterior, unido a los dichos de Ortiz Gutman, quien a fojas 1.480 y 1.484, expuso que Ferrer Ducaud, permanentemente asistía a la Intendencia, ya que era el encargado de inteligencia de la división y en ese sentido entregaba información y se imponía de temas políticos, esto es, personas que estaban ocasionando problemas.

Por otro lado, pese a que en sus declaraciones el acusado Patricio Ferrer Ducaud reiteradamente sostiene que no efectuó ningún disparo en contra de Espinoza Ojeda, obran en su contra los siguientes indicios: En primer término, las declaraciones de **Luis Alberto Guzmán Mayorga**, general de brigada en retiro del Ejército, quien, como ya se ha relatado precedentemente en este fallo, expuso que el día de los hechos se encontraba de guardia en la parte posterior del edificio de la Intendencia, y que al escuchar dos o tres disparos, subió al segundo piso con un Cabo con el que hablaba previamente y vio a la víctima, en el suelo, muerta, con sangre y boca abajo. Junto al cuerpo muerto de la víctima se encontraba Adrián Ortiz Gutman, quien no poseía arma en ese momento, **y Patricio Ferrer Ducaud, quien sí poseía un arma en la mano**, específicamente una pistola Star calibre 6.35. Asimismo, en cuanto al armamento que portaba Ferrer Ducaud, el testigo Guzmán Mayorga, ratifica sus dichos a fojas 1.638, en diligencia de careo que se realizó entre Patricio Ferrer Ducaud y Guzmán Mayorga, por cuanto indicó que cuando vio a la víctima en el suelo, vio a Ferrer Ducaud con su arma en la mano. En esta diligencia de careo con el acusado, el testigo en cuestión mantuvo su versión de los hechos. En segundo término, debe tenerse en consideración el testimonio de **José Bustamante Cárdenas**, quien en sus diversas declaraciones expuso que su labor en el mes de septiembre de 1973 se abocaba netamente a realizar guardia en la Intendencia y en lo que dice relación a los hechos ocurridos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

indicó: “Recuerdo que el día de ocurrido el accidente yo me encontraba realizando servicio de guardia en la intendencia, en el segundo piso, específicamente en la puerta del Intendente. Recuerdo que yo estaba fuera de la oficina cuando llegó el detenido escoltado por dos militares, -(ingresan al detenido a la oficina que él custodiaba según indicó a fojas 1765)-, uno de ellos era apodado “El Burro”, su apellido era Lorca, pero este no era de mi curso de especialización. En el interior de la oficina del Intendente subrogante el coronel Ortiz, no sé cuántas personas estaban en el interior de la oficina, pero sé que estaba el detenido. En un momento comencé a escuchar golpes y ruidos que venían desde el interior de la oficina que yo resguardaba, hasta que en un momento sentí fuerte y claramente dos disparos, -(este testigo se encontraba a unos tres metros aproximadamente de la puerta de acceso a esa oficina)-, luego de eso una persona desde el interior le dice a mi compañero de guardia y a mí que ingresemos a la oficina, en el interior de esta recuerdo haber visto al Señor Ortiz, al militar apodado “el burro” (Lorca) y recuerdo que habían otras personas pero no recuerdo quiénes eran. Recibí una orden de sacar el cuerpo de la oficina, un cuerpo que correspondía al del detenido, este mantenía un disparo visible en su cabeza, yo recuerdo que lo tomé desde uno de sus brazos, mientras que otros tres militares más, lo tomaron de sus otras extremidades, siendo este sacado por la puerta principal hasta ser dejado en el interior de un camión militar para su traslado. Debo hacer presente que todas las personas que estaban en el interior de la oficina del Intendente, ninguno salió antes ni después del hecho, hasta que nosotros como guardias ingresamos a sacar el cuerpo, ningún militar ingresó al interior de la oficina luego de sentir los disparos, de eso estoy seguro”. En la diligencia de reconstitución de escena de fojas 1.764, declaró en similar sentido agregando que cuando ingresó a la oficina donde se encontraba muerta la víctima, pudo ver a cuatro personas de pie, alrededor de la víctima, recuerda que eran Pedro Silva, al lado derecho, a Miguel Ángel Lorca, con su armamento carabina Garand, al lado izquierdo de la víctima, cerca de su cabeza, a **una persona vestida de civil con un revólver o pistola en la mano** y a Ortiz Gutman lo ve desarmado, al lado izquierdo cerca de sus pies y su mano se veía ensangrentada. Valga recordar en este punto, que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Patricio Ferrer Ducaud ha reconocido que el día de los hechos **vestía de civil**, lo que además se ve igualmente corroborado por el testimonio de Marcelino Traslaviña Rojas, quien en ese tiempo era su subalterno y ratificó que en ocasiones su jefe usaba vestimenta civil, misma información que manejaba el testigo Bustamante Cárdenas. Por otro lado, el relato de José Bustamante Cárdenas le quita toda plausibilidad a la forma en que Patricio Ferrer Ducaud afirma haber presenciado los hechos. A estos testimonios debe agregarse el relato de **Alejandro Rojas Mendoza**, sargento en retiro del Ejército, cuya versión de los hechos ya ha sido extractada precedentemente en el motivo decimoctavo de este fallo, y quien en lo pertinente señaló que se dijo que el “Mayor” le había disparado 2 veces a ese detenido. Expresó: “Escuché tres disparos provenientes del segundo piso, por lo que, en mi calidad de guardia, subí a comprobar lo que ocurría. Fue allí cuando veo al coronel Adrián Ortiz Guzmán, con su dedo anular derecho desgarrado y la piel colgaba desde la punta de su primera falange, ensangrentado, al ver esto reaccioné de inmediato llevándolo al servicio higiénico del lugar, orinando su dedo para evitar infección de acuerdo al aprendizaje de guerra impartido en la Escuela, asimismo intenté regresar la piel a su posición original, cuando llegó personal médico e iniciaron las curaciones de rigor. En ese momento pongo atención a mi alrededor y me percaté del taxista que se encontraba de cúbito abdominal, con su cara ladeada, no recuerdo en que dirección, pero sí pude ver un charco de sangre alrededor de su cabeza, con una perforación en su nuca y un orificio de salida de bala en su mentón. El occiso fue retirado en una camilla por personal de Carabineros acompañados por un grupo de enfermeros, quienes en una ambulancia se retiraron del lugar en dirección desconocida. Debo agregar a mi relato, que a raíz de este evento se generaron múltiples comentarios, como que el detenido era un taxista que había provocado el volcamiento de un vehículo militar en el que viajaba Pedro Silva, quien se dio a la fuga pero que una ambulancia de la Fuerza Aérea inició su persecución, logrando su aprehensión. También se escuchó que **el ayudante del coronel Ortiz, un oficial de grado “Mayor”, de quien no recuerda nombre**, habría disparado dos



veces con una pistola Star y que el tercer disparo lo efectuó uno de los guardaespaldas del coronel.

**Trigésimo tercero:** Que contribuyen igualmente a establecer la responsabilidad del acusado Patricio Ferrer Ducaud en los hechos materia de la acusación de autos, los informes medicolegales y las diligencias probatorias derivadas de las diligencias de reconstitución de escena practicadas durante la instrucción del presente proceso, en particular el careo entre los acusados Patricio Ferrer Ducaud y Miguel Lorca Escobar, de fojas 1.639 y los resultados de las pericias balísticas referidas en el motivo vigesimoctavo.

En efecto, la intervención de dos tipos distintos de armamento en la provocación de las lesiones que ocasionaron la muerte de Joaquín Espinoza Ojeda ha quedado debidamente establecida a través de las pericias medicolegales efectuadas a sus restos, las que permiten descartar la versión dada por el encausado que sostiene la existencia de un único disparo de fusil. Así se desprende del “Análisis Médico Legal”, que explica que, en relación con las lesiones balísticas del antebrazo (ulna) y tórax (7° y 8° costillas izquierdas y 10° vértebra torácica), si bien es posible asociarlas con mayor probabilidad a un mismo evento balístico, es decir, a un mismo disparo, los daños que presentan, en su conjunto o cada una de ellas por separado, no son compatibles con un proyectil de alta velocidad disparado a escasos metros de distancia de la víctima, sino que dichas lesiones son compatibles con un proyectil balístico de baja velocidad, es decir, con uno disparado por un arma corta, esto es, como aquella que comprobadamente portaba el acusado Ferrer Ducaud en sus manos.

En lo que mira a la **diligencia de careo**, a fojas 1.639 Lorca Escobar señaló: “Yo disparé, pero luego de que le habían disparado al señor Espinoza, ya estaba en el suelo la persona, pasó un lapso desde que dispararon y hasta que reacciona el coronel Adrián Ortiz Gutman y dice “ustedes por qué no disparan” y disparé. Estas otras personas que dispararon usaban armas cortas, pistolas”. Por su parte, Ferrer Ducaud expuso: “Yo difiero de varias cosas, ya que si otras personas dispararon no tengo idea. Yo vi cuando este se fue encima del coronel y este ordenó disparar, uno de los tiradores que estaban ahí disparó, con muy



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

buena puntería, y le dio al detenido impactando al cerebro. Mantengo mis dichos en lo que se refiere a que dispararon sobre mi cabeza. La bala pasó por el lado mío.” A esos dichos de Ferrer, Lorca los contradice y asevera: “No es posible porque la antesala, donde ocurrieron los hechos, no era de más de 3x3. Yo estaba con el otro guardia en la puerta, uno a cada lado, y el señor Espinoza estaba como a dos metros de nosotros y no había nadie más al principio. Se fue el coronel encima del detenido a golpearlo. Lo que hizo el señor Espinoza fue protegerse, nada más y en eso el coronel, no sé cómo, se lastimó la mano y el personal que estaba atrás, de civil, y otros de uniforme, le preguntaban al coronel: “coronel, le disparamos” y el coronel dijo: “Disparen”. Ahí esas personas dispararon. El detenido cayó al suelo y el coronel dijo: “ustedes, disparen”. Lo que recuerdo es que parte del personal que estaba con él (se refiere a Ortiz Gutman), realizó los disparos. No vi en ningún momento que la víctima haya atacado al coronel, solo vi que se protegía y que estaba como forcejeando.” A su vez, Ferrer Ducaud señaló: “Vi que venía el detenido, de pie, y decía: “no me disparen”. El coronel Ortiz se movió, en ese momento lo estaban curando de la mano me parece, y él en ese momento ordenó disparar. En realidad, me rectifico de lo dicho anteriormente, porque venían saliendo ambos, es decir, el detenido y el coronel cuando el coronel ordenó disparar. Yo venía subiendo por la escalera, y me paré a ver lo que pasaba en una esquina. Dispararon de un extremo al otro, por al lado de mi cabeza, no sobre ella. Pasaron las balas muy cerca. El hombre venía de pie y después de recibir el impacto de bala cayó ahí mismo”. Lorca mantiene sus dichos y agrega: “Al hombre lo hirieron con arma corta y cuando cae el coronel Ortiz dice que disparemos y ahí recién yo reacciono y disparo. El señor Espinoza me preguntaba qué le iba a pasar, pero yo le dije que no le podía decir nada porque estaba prohibido hablar con los detenidos. Luego pasó lo que ya relaté”. Ambos se mantuvieron en sus dichos, sin embargo, resulta evidente a la luz de los restantes medios de prueba, que la declaración de Lorca presenta una mayor consistencia interna, y concuerda además con los restantes testimonios recibidos en la causa, en lo que mira a las personas presentes, así como al número y origen de los disparos. Debe igualmente advertirse que Lorca hace alusión a la presencia de



personal de civil que acompañaba a Ortiz Gutman, característica que solo se ha predicado respecto del coimputado Ferrer Ducaud, y que, siempre de acuerdo a los dichos de Lorca Escobar, no vio que el coronel Ortiz Gutman portara arma de ningún tipo, en tanto que afirmó que las personas de civil que lo acompañaban eran oficiales. En diligencia de reconstitución de escena declaró también **Pedro Silva Álvarez**, afirmando que: “se comentó que quien tenía que saber todo eso era Lorca, pues dicen que Lorca estaba allí cuando pasó, incluso dicen que él le disparó al detenido, pero a mí no me consta. Lorca era un Cabo de planta, yo en ese momento era alumno, Lorca debe haber usado carabina, los oficiales deben haber usado una pistola, nosotros usábamos una subametralladora”, lo que permite dotar aún de mayor credibilidad a la declaración de Lorca Escobar.

En cuanto a las **pericias balísticas incorporadas** al proceso, y en consonancia con los informes medicolegales a que ya se ha hecho referencia latamente en el motivo decimocuarto de este fallo, ellas son categóricas en señalar que hubo intervención de dos armas en el asesinato de la víctima, una larga y una corta. Es así como el informe Pericial Balístico N°06-BA, de fojas 1.617 y siguientes, en el punto N°3.- “*Análisis Balístico*”, expuso: En cuanto a Ferrer Ducaud, él señala que solo se efectúa un disparo con un arma de fuego larga (atribuyéndole responsabilidad presumiblemente a Lorca Escobar), lo que no es balísticamente compatible con el informe de autopsia. Esto debe unirse al Informe pericial planimétrico N°01/2019 de 23 de enero de 2019, de fojas 1.807 y siguientes, el que contiene las conclusiones arribadas en relación a la reconstitución de escena que se realizó en la Intendencia de Antofagasta y que de acuerdo a los testimonios de los testigos Francisco Silva Molina y José Bustamante, unido a los dichos del acusado Miguel Lorca Escobar, logró graficar el lugar donde se ubicaban Ortiz Gutman, Silva, el acusado Lorca Escobar y un civil con un arma, el que solo puede corresponder a la persona del acusado Ferrer Ducaud. Esas ubicaciones fueron aportadas por el testigo José Bustamante Cárdenas, quien en ese momento se ubicaba de guardia en la puerta, en las afueras de la oficina de la Intendencia y desde ese lugar observó a cuatro personas que se ubicaban alrededor del cuerpo de la víctima, entre ellas, Ortiz



Gutman, Francisco Silva, el acusado Miguel Lorca Escobar y un civil con arma (Ferrer Ducaud). En igual sentido declaró el acusado Miguel Lorca Escobar en relación con el lugar donde se encontraban los funcionarios antes mencionados. Finalmente constan a fojas 1.948 y 1969 y siguientes los **informes periciales balísticos** N°05/2020 y N°1031/2020, en los que se concluye que, atendidas las divergencias existentes en cuanto a las conclusiones balísticas contenidas en los informes balísticos evacuados anteriormente, en relación al tipo de armamento utilizado y la dinámica de los hechos se puede concluir que de acuerdo a los informes periciales antropológico y médico forense, la víctima Joaquín Espinoza Ojeda, recibió en su cabeza dos impactos balísticos, ambos con salida de proyectil, dichos impactos en función a la disposición de las fracturas que generaron, permiten establecer la cronología sobre los mismos y que estos fueron provocados por un arma de fuego de alta energía, del tipo fusil o carabina. En relación con las lesiones de origen balístico sufridas por la víctima en la ulna izquierda, 7° y 8° costillas izquierdas y 10° vértebra, no es posible afirmar que hayan sido realizadas por el traspaso de uno o más proyectiles balísticos. Tampoco es posible descartar mediante el examen de sus osamentas que hayan existido otros impactos balísticos. En lo que mira al proyectil balístico dubitado, del tipo encamisado, asociado al impacto de la 10° vertebra de la víctima, conforme al análisis balístico realizado en el presente informe pericial, se ratifica que este correspondería a un arma corta, ya sea al calibre 32 Auto (7,65 mm), o bien al calibre 25 Auto (6,35 mm), descartándose desde el punto de vista de su examen morfométrico, que haya correspondido al calibre 7,62x33 mm (30 Carabine). En cuanto a la secuencia de los disparos, se afirma que el o los disparos recibidos por la víctima sobre su ulna izquierda, costillas izquierda y 10° vértebra ocurren mientras esta se encontraba de pie, posiblemente en un contexto de lucha. El primer disparo recibido en la cabeza de la víctima, el cual es necesariamente mortal, lo hacen caer bruscamente al suelo, haciendo que éste golpee en su mentón y punta de la nariz, lo que justificaría que se haya tenido la impresión en la época, de que la víctima tenía un impacto balístico en dicha zona. El segundo disparo recibido sobre la cabeza de la víctima ocurre cuando se encuentra ya en el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



suelo, boca abajo. Por lo tanto, dicho informe concluye: “Se establece como hipótesis investigativa, que el Mayor Patricio Ferrer Ducaud, podría haber realizado el disparo en la vértebra de la víctima, mientras que los disparos en su cabeza habrían sido realizados por Miguel Lorca Escobar”.

**Trigésimo cuarto:** Que, respecto de la participación atribuida a **Miguel Lorca Escobar**, el principal indicio deriva de sus propios dichos, los que no solo lo sitúan en el lugar de los hechos, al que reconoce haber conducido a la víctima desde que aquella llegó al edificio de la Intendencia, sino que, además, en su declaración admitió que, ante las órdenes del coronel Ortiz Gutman, efectuó a lo menos un disparo en contra del detenido con su arma de servicio, una carabina Garand.

En el mismo sentido obra en autos la declaración del coacusado, **Ferrer Ducaud**, quien corrobora además que fue el coronel Ortiz Gutman quien ordenó disparar a la víctima de autos, lo que fue cumplido por un funcionario subalterno quien portaba un arma larga tipo fusil. A su vez, el testimonio de **Pedro Silva Álvarez**, ya extractado en el motivo precedente, también atribuye al acusado Lorca haber sido quien disparó al detenido, si bien señala que se trata de una información que habría conocido por “comentarios”, lo que no se condice con su presencia en el lugar de los hechos. En todo caso, la confirmación más clara de la intervención del acusado Lorca Escobar en los hechos, se contiene en el relato de **José Bustamante Cárdenas**, al que ya también se ha hecho referencia precedentemente en este fallo, quien al recordar los sucesos que originan la presente causa, expuso que “...yo estaba fuera de la oficina cuando llegó el detenido escoltado por dos militares, -(ingresan al detenido a la oficina que él custodiaba según indicó a fojas 1765)-, uno de ellos era apodado “El Burro”, su apellido era Lorca, pero este no era de mi curso de especialización. En el interior de la oficina del Intendente Subrogante el Coronel Ortiz, no sé cuántas personas estaban en el interior de la oficina, pero sé que estaba el detenido, en un momento comencé a escuchar golpes y ruidos que venían desde el interior de la oficina que yo resguardaba, hasta que en un momento sentí fuerte y claramente dos disparos, -(este testigo se encontraba a unos tres metros aproximadamente de la puerta de



acceso a esa oficina)-, luego de eso una persona desde el interior le dice a mi compañero de guardia y a mí que ingresemos a la oficina, en el interior de esta recuerdo haber visto al Señor Ortiz, al militar apodado “el burro” (Lorca) y recuerdo que habían otras personas pero no recuerdo quienes eran, recibí una orden de sacar el cuerpo de la oficina, un cuerpo que correspondía al del detenido, este mantenía un disparo visible en su cabeza.” El mismo testigo agregó, en la diligencia de reconstitución de escena, que cuando ingresó a la oficina en que se encontraba muerta la víctima, pudo ver a cuatro personas de pie a su alrededor, entre los cuales se encontraba Miguel Ángel Lorca, con su armamento carabina Garand.

Finalmente, los informes periciales, tanto medico legales como balísticos, a los que se ha hecho referencia reiteradamente en este fallo, son contestes en indicar que el o los disparos que Joaquín Espinoza Ojeda recibió en su cabeza provenían de un arma larga, tipo fusil o carabina, pudiendo destacarse en este punto el Informe Pericial Balístico N°06-BA, de fojas 1.617 y siguientes, el que en el punto N°3.- “Análisis Balístico”, expuso en relación a los proyectiles balísticos, que los de baja velocidad, como los usados por las armas de fuego del tipo pistola, no provocan al transfixiar una cavidad como la cabeza, estallido craneal. Sin embargo, las armas de fuego que utilizan proyectiles balísticos de gran velocidad, como es el caso de los fusiles, sí generan al atravesar una cavidad como la cabeza, estallido craneal. Por lo anterior, ambas heridas de la cabeza que describe el protocolo de autopsia habrían sido realizadas por armas de fuego del tipo fusil. Lo expuesto se condice, como ya ha quedado claramente establecido, con el armamento que el acusado Lorca Escobar portaba el día de los hechos, según lo ha reconocido él mismo, y según lo manifestado por los testigos José Bustamante Cárdenas y por Jorge Barttlet Hazard, quien a fojas 1.714 señaló que en la época cumplió labores de guardia con los dragoneantes en el perímetro de la Intendencia, y que en esas funciones usaban una carabina M1.

**Trigésimo quinto:** Que, con el mérito de todos los antecedentes probatorios que se han venido analizando, se puede concluir que ambos acusados se ubican en el lugar de los hechos en el momento en que ocurrieron,



encontrándose su presencia corroborada por varios de los funcionarios presentes en la Intendencia a la época. Por su parte Lorca Escobar admite haber custodiado a la víctima y haberle disparado por orden del coronel Ortiz Gutman y que ese disparo fue efectuado con su arma larga “Carabina Garant”, lo que se condice con el mérito de la mayoría de las declaraciones analizadas en esta sentencia, principalmente de testigos presenciales que se encontraban en la Intendencia el día de ocurrido los hechos, además del mérito de los informes periciales, tanto médico legales como balísticos que se agregaron al proceso, lo que además permite concluir que fue ese disparo el que provocó el estallido craneal de la víctima. Ferrer Ducaud, por su parte, solo admite haber tenido su arma corta en la mano, lo que no controvierte los dichos de los testigos Luis Guzmán Mayorga y José Bustamante Cárdenas que permiten situarlo con el arma en la mano y parado justo frente al cuerpo sin vida de la víctima. No obstante ello, Ferrer no admite en ninguna de sus declaraciones y actuaciones del proceso haberle disparado al occiso, muy por el contrario intenta atribuir responsabilidad a otras personas, señalando que Lorca Escobar o incluso Ortiz Gutman habrían efectuado los disparos. Sin embargo, como se ha analizado detalladamente en los motivos precedentes, su versión de los hechos no se sostiene, por verse contradicha por múltiples antecedentes, testimonios y por las pericias que demuestran, sin lugar a dudas, la intervención de un segundo autor, que disparó a Espinoza Ojeda en forma previa a Lorca Escobar, mientras aquel se encontraba de pie, con un arma corta, configurándose múltiples presunciones que fueron suficientemente expuestas en los considerandos trigésimo primero a trigésimo tercero, las que conducen inexorablemente a concluir que el autor de ese o esos disparos previos fue precisamente Patricio Ferrer Ducaud. En consecuencia, se han reunidos en autos antecedentes suficientes, tanto en lo que mira a testimonios como a presunciones judiciales, para alcanzar convicción respecto a la participación que le ha cabido a ambos acusados en calidad de autores en relación con el homicidio calificado de Joaquín Segundo Espinoza Ojeda.

#### **En cuanto a las acusaciones particulares**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

**Trigésimo sexto:** Que, a fojas 2.379, la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, dedujo acusación particular en contra de los acusados Miguel Lorca Escobar y Patricio Ferrer Ducaud, por el delito de homicidio calificado en contra de Joaquín Espinoza Ojeda, por los mismos hechos que fueran descritos en la acusación fiscal. Solicitó tener presente que, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos como constitutivos de un delito consumado de homicidio calificado, se adhiere a la determinación judicial realizada en ese sentido. Lo mismo en relación con los fundamentos expuestos en lo que mira a la participación de los acusados. Adicionalmente, invocó en contra de los acusados las circunstancias agravantes previstas en los numerales 8, 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal y solicitó que en definitiva, teniendo en consideración la extensión del mal causado y las obligaciones convencionales del Estado en la prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los Derechos Humanos, se imponga a cada uno de los acusados la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales y costas de la causa.

**Trigésimo séptimo:** Que, por su parte, a fojas 2387, el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, dedujo acusación particular en contra de Miguel Lorca Escobar y Patricio Ferrer Ducaud, por el delito de homicidio calificado cometido en la persona de Joaquín Espinoza Ojeda, previsto y sancionado en el artículo 391 número 1, circunstancia primera, esto es, al haberlo cometido con alevosía, en la modalidad de actuar sobre seguro. En lo que mira a la calificación jurídica de los hechos bajo la figura de homicidio calificado y la participación atribuida a los acusados en calidad de autores de acuerdo con el artículo N°15 N°1 del Código Penal, en grado consumado, se conforma con ella. Sin perjuicio de ello, acusa particularmente para el solo efecto de invocar en contra de los acusados la circunstancia agravante prevista en el numeral N°8 del artículo 12 del Código Penal, la que consiste en prevalecerse del carácter público que tenga el culpable y con su mérito, teniendo además presente el contexto de graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos ocurridas en nuestro país, y lo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

previsto en el artículo 68 del Código Penal, solicita en definitiva condenarlos a cada uno de ellos, a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales correspondientes.

**Trigésimo octavo:** Que, teniendo presente que las pretensiones de los querellantes en lo sustantivo son concordantes con la acusación fiscal, en cuanto al establecimiento de los hechos y su calificación como homicidio calificado, así como la participación en calidad de autores atribuida a los acusados de autos, deberá estarse a lo ya razonado precedentemente, y en especial, a lo concluido en los considerandos vigésimo al vigesimoquinto, así como en los motivos trigésimo primero al trigésimo quinto que anteceden.

En cuanto a las agravantes que se alegan en contra de los inculpados de autos, se efectuará su análisis conjuntamente con las restantes circunstancias modificatorias de responsabilidad más adelante en este fallo, lo mismo que respecto de las consideraciones que deban orientar la determinación de la pena en concreto, en su caso.

#### **Contestaciones a la acusación fiscal**

**Trigésimo noveno:** Que, en el primer otrosí del escrito de fojas 2516 el abogado Sebastián Sasmay Martínez, en representación del acusado Miguel Lorca Escobar y en subsidio a las excepciones de prescripción de la acción penal y amnistía, contestó la acusación fiscal y las acusaciones particulares dictadas en contra de su representado como autor del delito de homicidio calificado consumado. Expuso que su línea argumentativa guarda relación con tres aspectos; en cuanto a la dinámica de los hechos, a las inconsistencias de los informes periciales y a la ausencia de medios probatorios y diligencias que hagan presumir la participación de su representado en esta instancia. En cuanto a la dinámica de los hechos expresa que no ha quedado establecido que haya sido su representado quien haya dado el o los tiros mortales que provocaron la muerte de la víctima, y que pareciera que al señor Lorca le cabe una participación como cómplice y no como autor. Además, descarta la posibilidad de que su representado haya actuado con alevosía. Agrega que es un hecho indubitado que su representado portaba una carabina Garant y que uno de los proyectiles de esa



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWEXQVJMSN

arma ingresó por la zona torácica de la víctima. Como apoyo de su fundamento cita el informe de autopsia de fojas 87, remitido por el Director Nacional del Servicio Médico Legal. Indica que esa pericia da cuenta que los tiros propinados por Ferrer Ducaud destruyeron el cerebro de la víctima y que la víctima perdió la vida por ese motivo y no por los disparos de su representado Lorca Escobar. Agrega que su representado no ha desconocido su participación en los hechos, sino que ha cooperado sustancialmente con su esclarecimiento. Expone que el informe citado y su ampliación de fojas 2026, da cuenta de manifiestas y repetidas contradicciones, puesto que no se encuentra determinado qué arma y a qué munición corresponden las heridas del cuerpo de la víctima. Indica que tanto los hechos expuestos en el auto de procesamiento dictado el 31 de agosto de 2021 y los señalados en la acusación fiscal, demuestran una inconsistencia y contradicción entre los mismos, ya que por una parte indica que la víctima fue herida por un arma de fuego corta en la ulna y la costilla y luego por una carabina con dos disparos en la cabeza y que luego señala que fue herida primero en la cabeza y luego en la ulna y en la costilla por un tercer impacto, por ello sostiene que se comete un yerro jurídico en presumir que su representado posee la calidad de autor del homicidio calificado que se le imputa, cuando no fue él quien ha propinado los impactos mortales a la víctima. Prosigue argumentando que las diversas declaraciones y las pericias forenses dan cuenta que el señor Lorca Escobar disparó a la víctima luego de muerta, y que el tiro mortal fue provocado por un arma corta, que portaban los oficiales, según se corroboró con el oficio reservado de fojas 1955 remitido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, por lo que esas contradicciones no logran dar por establecidos los presupuestos indicados en el artículo 486 del Código de Procedimiento Penal. Señala que con un mejor y mayor análisis de los antecedentes se podría determinar su complicidad y no su autoría, ya que hay una prestación de ayuda, conocida o no por el involucrado, pero bajo ninguna circunstancia en orden a realizar la acción homicida, como erróneamente se ha entendido en autos, ya que indica que ha sido Ferrer Ducaud quien ha desplegado la misma, siendo él la única persona a quien debe considerarse como el autor del homicidio calificado en contra de la



víctima. Por otra parte, expuso que no se analizó en este caso el grado jerárquico y de subordinación que su representado detentaba al momento de acaecidos los hechos. Indica que una agresividad como la de sus superiores no solo lo obligaron a cumplir la orden y no observarla, afirmando que su mandante se enfrentó a la orden de dos oficiales, altamente agresivos y que en ese momento una desobediencia podía costarle la vida. Por ello su representado no se encontraría en la hipótesis del numeral 2º del artículo 15 del Código Penal. A su vez, señala que ha existido una vulneración legal al principio de responsabilidad subjetiva que debe imperar en nuestro sistema penal, por cuanto indica no haber sustento en que los disparos efectuados por su representado hayan sido los tiros mortales. En este punto cita doctrina en apoyo de sus argumentos. Agrega que transgredir dicho principio penal atenta contra lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso 5º de la Constitución Política de la República, que prohíbe expresamente presumir de derecho la responsabilidad penal, como se aplicaría en este caso al presumir que el hecho de haber disparado en contra de la víctima cuando ya había fallecido, lo haga ser considerado autor del delito que se le acusa. En adición a las argumentaciones expuestas, la defensa del acusado reitera como excepciones de fondo para solicitar la absolución de su representado, la prescripción y la amnistía.

En subsidio, para el evento de dictación de sentencia condenatoria, se invocaron las atenuantes de responsabilidad penal contenidas en los artículos 11 N°6, 11 N°8 y 103 del Código Penal, y en las disposiciones de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, que serán objeto de análisis más adelante en este fallo.

Finalmente, en subsidio de las peticiones antes formuladas, y conjuntamente con la invocación de atenuantes, solicita se apliquen las reglas internacionales de derecho humanitario vigentes en Chile por aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2º de la Constitución Política y por las normas lus Cogens en relación con el límite de edad para el cumplimiento efectivo de las penas, y en atención a la edad de su representado, mayor de 70 años y al grave estado de salud en que se encuentra se le ordene cumplir la pena en su domicilio.



**Cuadragésimo:** Que, en cuanto a la dinámica de los hechos, deberá estarse a la abundante prueba rendida en el proceso, en particular al análisis conjunto de los testimonios presenciales, diligencias de reconstitución de escena e informes periciales que han permitido concluir, más allá de cualquier duda razonable, la secuencia precisa en que ocurrieron los eventos que desembocaron en la muerte de la víctima de autos, don Joaquín Espinoza Ojeda. No cabe duda alguna que el acusado Lorca Escobar disparó con su carabina al ofendido, y que fueron esos disparos los que impactaron en su cabeza provocando un estallido craneal. En ese contexto, la participación que se le asigna es la de autor, por haber tomado parte en la ejecución del hecho materia de autos de manera directa e inmediata, según ha quedado suficientemente demostrado con su propia declaración y con los testimonios y presunciones expuestos pormenorizadamente en los motivos trigésimo cuarto y trigésimo quinto, no pudiendo en modo alguno encuadrarse su intervención en la figura de complicidad pretendida por su defensa.

Por su parte, en lo que mira a la concurrencia de la circunstancia calificante de alevosía, la doctrina ha indicado que lo relevante es que, al momento de comisión del ilícito, su autor se encuentre sin riesgo para sí, actuando sobre seguro, por el aprovechamiento o la creación de un estado de indefensión en la víctima. Es decir, debemos estar en presencia de un estado de indefensión que puede no haber sido generado por el acusado, pero que ha sido aprovechado por éste a fin de evitar cualquier riesgo para su persona, situación que objetivamente se aprecia de manera manifiesta en el caso de autos, en que varios sujetos dispararon en contra del ofendido, aprovechándose de la situación de desvalimiento de la víctima -quien se encontraba ilegalmente detenido en dependencias copadas por personal militar, sin que la persona agredida estuviera en condiciones de reaccionar para defenderse o frustrar la acción y sin que fuera esperable alguna ayuda de terceros, por lo tanto, sin ningún peligro para los hechos.

Por otro lado, cualquier inconsistencia entre los informes periciales ha quedado suficientemente superada con las complementaciones y aclaraciones



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN



gestionadas durante la etapa investigativa, permitiendo a este sentenciador alcanzar el estándar de convicción necesario respecto de la exacta forma de ocurrencia de los hechos, y en especial la cronología de los disparos efectuados a la víctima, tal y como ha quedado establecido en los considerandos vigesimosegundo y vigesimocuarto precedentes. En este punto, debe aclararse que la mención que se realiza en el informe de autopsia a “un tercer impacto” y que se repite en la letra “D” del auto acusatorio, no tiene vinculación alguna con la secuencia en que se produjeron las lesiones al occiso, sino que tiene un valor meramente enumerativo, y que las lesiones en la zona craneal, a diferencia de lo postulado por la Defensa, no pueden atribuirse a el o los disparos del acusado Ferrer Ducaud, por el tipo de armamento que éste portaba, siendo indiscutible que se produjeron precisamente por los disparos del arma del acusado Lorca Escobar. Finalmente, en lo que mira a la reiteración como excepciones de fondo a favor del acusado Lorca Escobar, de aquellos argumentos expuestos a título de artículos de previo y especial pronunciamiento, esto es, la prescripción y la amnistía, deberá estarse a las razones sustantivas para su rechazo ya desarrolladas en los motivos cuarto a séptimo de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos.

Por todas estas razones, se desestimarán las argumentaciones de la Defensa en cuanto pretenden la absolución del encartado en comento, así como la pretensión de calificar de complicidad la intervención que le cupo en los hechos investigados en autos.

**Cuadragésimo primero:** Que los restantes planteamientos de la Defensa de Lorca Escobar, que se vinculan a la eventual cooperación prestada por el encausado en el establecimiento de los hechos, así como la relevancia que puede tener en el caso concreto la orden recibida de parte de sus superiores, serán analizados al momento de revisar la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad.

**Cuadragésimo segundo:** Que, en lo principal del escrito de fojas 2.560, el abogado Luis Núñez Muñoz, en representación del acusado Patricio Ferrer Ducaud, contestó la acusación fiscal y particulares entabladas en contra de su representado como autor del delito de homicidio calificado consumado, solicitando



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

como petición principal que su defendido sea absuelto, afirmando que no es suficiente haber tenido el grado de Mayor a la época de ocurrido los hechos por el cual se le acusa, no teniendo mando suficiente para ordenar la detención de la víctima, ni menos disponer de su vida. Agrega que se encuentra acreditado que su representado se desempeñaba como Jefe del Departamento II de Inteligencia Militar del Cuartel General de la Sexta División de Ejército. Señala que un examen cuidadoso de los antecedentes referidos permitiría concluir que de ese cúmulo de presuntas pruebas que obrarían en su contra, ninguna posee el mérito suficiente para tenerlo como autor del ilícito atribuido. Indica que su representado ha negado en todas las actuaciones procesales haber disparado a la víctima. En apoyo de sus fundamentos cita algunas declaraciones de testigos que han depuesto en el proceso, como los dichos de Luis Guzmán Mayorga, Juan Zanzani Tapia y Pedro Silva Álvarez. Expone que Ferrer Ducaud no es un realizador de la conducta que caracteriza el delito de homicidio, no existiendo antecedentes que permitan tener a su representado como autor de la muerte de la víctima de autos. Indica que no se puede atribuir responsabilidad a su representado en lo que mira al origen de la orden de detención de la víctima ni su traslado hasta el segundo piso de la Intendencia, y tampoco existirían pruebas concretas que demuestren que su defendido tuvo intervención en el homicidio de la víctima, solo algunas declaraciones que se basan en suposiciones que no tendrían la fuerza suficiente para formar convicción al Ministro Instructor. Además, señala que no existen antecedentes que permitan aseverar que se configura el requisito típico de la forma de la coautoría, el concierto requiere un acuerdo de voluntades que debe ser previo a la ejecución del hecho. Cita doctrina nacional en apoyo de sus análisis y añade que “estar” en el lugar en que habría ocurrido el homicidio, es una cuestión de la que no existe claridad en el proceso porque las versiones son disímiles, y que no es lo mismo que “participar” en ese delito.

De manera subsidiaria y para el caso que su representado sea encontrado culpable, la defensa interpuso como excepción de fondo la amnistía y en subsidio de esta última, la prescripción de acción penal. En relación con la amnistía expuso que los hechos por cuales se ha acusado a su defendido se encuentran



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

amparados por el Decreto Ley 2.191 de 1978, artículo 1. Señala que es el mismo legislador quien ha dejado sin sanción a las personas involucradas en hechos de esta naturaleza. Expone que la amnistía borra la existencia de lo pasado y hace desaparecer el delito y sus consecuencias y que por la aplicación del artículo 93 N°3 del Código Penal, cualquier responsabilidad que se quiera imputar a su representado, estaría legalmente extinguida por el solo ministerio de la ley. Señala que se ha sostenido que los delitos investigados serían imprescriptibles y no amnistiables por disponerlos así la normativa internacional, que sanciona los delitos que genéricamente se han conceptualizado como crímenes contra la humanidad, los que según los querellantes en este caso se habrían cometido existiendo en Chile un estado de guerra. Sin embargo, sostiene que aquello resulta inaplicable en la especie por cuanto la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio no es aplicable, no se ha establecido en la legislación nacional la pena que habría debido corresponder para castigar alguna conducta típica vinculada a la figura penal del genocidio, la que habría debido igualmente haberse descrito previamente por la ley como habría sido de rigor ante el claro tenor del artículo 19 N°3 incisos 7 y 8, de la Constitución Política de la República. En este sentido indica que el ilícito singular que en el auto de procesamiento se señala solo tiene la característica de ser un delito común, como se expresa en la misma resolución, al señalarse que él está previsto y sancionado en el artículo 391 del Código Penal. A su vez, señala que los Convenios de Ginebra tampoco son aplicables, ya que su vigencia se limita a los casos de guerra de carácter internacional declarada y a los conflictos armados o bélicos o de guerra interna efectivos como aparece del texto como aparece del texto de los artículos 2° y 3° comunes a los cuatro Convenios, de manera que no cabe extenderlos a los hechos delictuosos cometidos dentro del periodo de la situación de Estado de Sitio cubierto por la Amnistía, por no habérselos cometido en el ámbito de un conflicto armado interno al que particularmente los Convenios se refieren. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece igualmente de aplicación en su concepto. Argumenta que, si se tiene en cuenta que la pena de muerte o la cadena perpetua es el castigo máximo impuesto en todo el ordenamiento penal a los delitos en extremo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

más graves, el propio Pacto en referencia, en su artículo 6.4, establece que la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital, podrán ser concedidos en todos los casos, lo que en Chile ya ha ocurrido. En cuanto al Pacto de San José de Costa Rica, carece también de aplicación, porque el referido Pacto Internacional se incorporó a la legislación nacional interna solo en 1990, es decir, también con posterioridad al acaecimiento de los hechos. Por otra parte, señala que el Decreto Ley en comento ya ha sido aplicado por la Excma. Corte Suprema, quien se ha pronunciado jurisdiccionalmente sobre su validez y legitimidad en el ámbito del recurso de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de que le corresponde conocer privativamente, y que no ha habido en cambio acto legislativo alguno ni para interpretar su alcance ni para su eventual derogación. Finalmente señala que la aplicación de la amnistía que en derecho corresponde, no va a alterar la paz social, toda vez que teniendo presente la importancia que reviste para las familias la situación de sus seres queridos, dejar de aplicar la ley es transgredir normas fundamentales que asisten al inculpado y soslayar el imperio del derecho. Por todo lo antes expuesto solicita se dicte el sobreseimiento definitivo que corresponda. En cuanto a la prescripción de la acción penal, de no dar lugar a la aplicación al Decreto Ley de amnistía, sostiene que corresponde se sobresea definitivamente por ser procedente la prescripción de los hechos investigados. Argumenta que el presunto homicidio materia de esta investigación fue cometido con fecha posterior al 15 de septiembre de 1973, habiendo transcurrido más de 48 años. Como sustento normativo cita los artículos 94, 96, 97 y 100 del Código Penal. En consecuencia, añade que la responsabilidad penal que pudiere afectar si así hubiese sucedido con su representado acusado, se ha extinguido por la prescripción de la acción penal. Con respecto al delito de homicidio calificado, por el cual se acusa a su defendido y en particular a la circunstancia de la alevosía, dicha circunstancia debió ser el propósito de su defendido para la realización de los delitos que se le imputan, o haber sido su creador o estar en conocimiento de lo que iba a ocurrir con fecha posterior al 15 de septiembre de 1973, lo cual no ha sido probado, por lo que la acción penal se encuentra prescrita y corresponde sobreseer definitivamente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Finalmente, en subsidio de la absolución, se invocaron en favor del acusado las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 11 N°1, 11 N°6, 11 N°8 y 103 del Código Penal, así como la normativa contenida en el artículo 211 en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar, que será objeto de análisis más adelante en el presente fallo.

**Cuadragésimo tercero:** Que, las argumentaciones de la Defensa de Ferrer Ducaud, en cuanto cuestionan la idoneidad de la prueba de cargo para determinar su participación en el ilícito, deben ser descartadas, pues la intervención que le cupo a dicho acusado en calidad de autor de la muerte de don Joaquín Espinoza Ojeda se encuentra sobradamente acreditada en el proceso a través de los testimonios y presunciones que han sido pormenorizadamente expuestos en este fallo, los que analizados de manera conjunta conducen de manera unívoca a confirmar la atribución de responsabilidad contenida en el auto acusatorio y en las acusaciones particulares interpuestas en su contra. Para estos efectos, y por economía procedimental, se tienen por reproducidos los razonamientos latamente expuestos a través de más de diez carillas en los considerandos trigésimo primero a trigésimo tercero. Por otro lado, la hipótesis de autoría que se baraja a su respecto es aquella contemplada en el artículo 15 N°1, por haber participado de manera directa e inmediata en la ejecución del hecho punible, de modo que la falta de concierto previo con su coacusado, que aparece igualmente alegada por su defensa, carece de toda significación jurídica. En cuanto al establecimiento de la alevosía, es menester tener presente que no es necesario que el hechor genere directamente las condiciones por las cuales su víctima queda en indefensión, pues basta que se aproveche de dichas circunstancias, tal y como ocurrió en el caso de autos, según se explicó en el considerando vigesimoquinto, al tratar el punto en cuestión.

**Cuadragésimo cuarto:** Que, para resolver las alegaciones subsidiarias por las cuales se persigue la absolución del encausado Ferrer Ducaud, debe tenerse en primer lugar presente, la calificación del delito materia de autos como uno de lesa humanidad, por encuadrarse dentro de dicha categoría en los términos que ya eran aceptados y formaban parte del ius cogens a la época de ocurrencia de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

los hechos, según se ha razonado en las motivaciones contenidas en los considerandos vigesimosexto y vigesimoséptimo de la presente sentencia, y que torna innecesario para este sentenciador el cuestionado recurso a las Convenciones de Ginebra. Bajo este supuesto, y teniendo presente la normativa de Derecho Internacional aplicable a la luz de lo previsto en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, y por las razones que se desarrollaron en los motivos cuarto a séptimo de esta sentencia, los que se dan por enteramente reproducidos, se desestimarán las excepciones de fondo de amnistía y prescripción de la acción penal opuestas por el abogado Luis Núñez Muñoz en lo principal de su escrito de contestación de fojas 2.560.

**Circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal:**

**Cuadragésimo quinto:** Que ambos querellantes han afirmado que en el caso de autos resultaría aplicable la circunstancia agravante prevista en el numeral octavo del artículo 12 del Código Penal, esto es “prevalerse del carácter público que tenga el culpable”. Al efecto, a fojas 2379, la abogada Adriana Rojas Pérez, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, expone que no resulta aplicable el artículo 63 del Código Penal, pues el carácter público no es parte integrante ni de los crímenes de lesa humanidad, en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, ni de otros cuerpos normativos como el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional o los artículos 1 y 2 de la Ley N°20.357, como tampoco integra el artículo 391 N°1 del Código Penal, por ello no puede afirmarse que exista doble valoración. Argumenta que los crímenes de lesa humanidad no requieren de un sujeto activo calificado y el delito de homicidio tampoco, el propio Estatuto de Roma regula como circunstancia agravante el “abuso de poder o del cargo de oficial”. Indica que los hechos objeto de juzgamiento en este caso, fueron facilitados o que se pudo asegurar su impunidad, fundado en las oportunidades y medios que entrega el cargo público de los culpables. Cita jurisprudencia y doctrina nacional. En similares términos argumenta el abogado Felipe Alemparte Croxatto, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quien a fojas 2387 sostiene que los crímenes de lesa humanidad no requieren de un sujeto activo calificado,



conforme a lo establecido en el derecho penal internacional, que distingue delitos comunes nacionales de los crímenes internacionales, por lo que ciertos delitos atendida su gravedad, agreden no solo a sus víctimas, sino que también a la conciencia misma de la humanidad. Cita legislación nacional e internacional como la Ley N°20.357 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, indica que sería coherente entender que los hechos objeto de juzgamiento en este caso, fueron posibilitados, facilitados o se pudo asegurar la impunidad de los mismos fundada en las oportunidades y medios que entrega el cargo público. En ese sentido, la agravante aludida es aquella en que el autor, para la comisión de un hecho punible se sirve de la calidad de funcionario público que detenta para la comisión de un hecho y en consecuencia, el provecho que ello le reporta, lo utiliza para la realización del ilícito o con ocasión de cometerlo en el ejercicio del mismo, por lo que en este caso los acusados, ejecutaron los delitos prevaliéndose como funcionarios públicos, al ser parte de una institución estatal, el Ejército de Chile. Señala que, si los sujetos activos no hubiese sido funcionarios del Ejército de Chile, no habrían tenido la posibilidad de actuar con tal impunidad, o tenido acceso al uniforme, movilización y armamento con el que ejecutaron los delitos. En relación con el artículo 63 del Código Penal, expone que no calza en ninguna de esas hipótesis, toda vez que no es un delito cometido por funcionarios públicos, sino que aprovecha en este caso su carácter de funcionario público para realizarlo, o para ejecutarlo en condiciones más favorables. Argumenta que está establecido en el proceso, según los propios dichos de los acusados Ferrer Ducaud y Lorca Escobar, además de las diligencias de careo y reconstitución de escena, que, al momento de la ejecución de la víctima, los acusados ejercían una función pública, estando con vestimenta militar y armas de servicio. Añade que el carácter público del culpable debe entenderse en los términos del artículo 260 del Código Penal, es decir, atendiendo a quien ejerce la función pública, circunstancia que está satisfecha en la especie, dado el rol y labor que ejercían los acusados cuando ocurrieron los disparos que dieron muerte a la víctima. Agrega que la calidad de funcionario supone una intensificación del injusto, este mayor reproche dice relación con el sujeto activo, elemento distinguible de la alevosía que califica



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

el homicidio, pues esta última se establece al modo en que se ejecuta el delito, es decir, como la víctima privada de cualquier defensa fue ejecutada con armamento de guerra, función que únicamente podría ser ejercida por ellos, en su calidad de funcionarios públicos y miembros del Ejército de Chile. Finalmente agrega que la condición de soldado de Ejército de Chile es independiente del tipo penal, ya que no estamos frente a un delito funcionario. Cita jurisprudencia y legislación nacional.

**Cuadragésimo sexto:** Que tal y como sostienen los querellantes, la circunstancia agravante de responsabilidad penal contenida en el numeral 8° del artículo 12 del Código Penal, esto es, prevalerse del carácter público que tenga el culpable, no es un elemento constitutivo necesario para la calificación de un crimen de lesa humanidad, pues lo relevante para dicha caracterización es que el ilícito se enmarque en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y que dicho ataque responda a una política del Estado o de sus agentes. En consecuencia, nada impide que los responsables en esta categoría de crímenes no detenten la calidad de funcionario público, en la medida que se cumpla con los parámetros ya referidos.

Por otro lado, el mero hecho de poseer la mentada calidad funcionaria no es suficiente en sí mismo para dar por concurrente la agravante en comento, pues para su debida configuración es necesario (como lo ha sostenido nuestra Excelentísima Corte Suprema en las causas Rol 4.240-2014 y 37.788-2017) que el agente haya puesto la función pública al servicio de sus propios y particulares fines, lo que debe examinarse caso a caso. Por lo demás, así lo ha considerado la doctrina nacional al señalar que “prevalerse” es un concepto que equivale a “abusar”, esto es, “servirse, aprovechar, valerse” del carácter público para ejecutar el delito.

En este orden de ideas, si bien del mérito del proceso es posible constatar que los acusados de autos efectivamente detentaban la calidad de funcionarios públicos a la época de ocurrencia de los hechos, en concreto, ambos eran miembros del Ejército de Chile, atendidas las circunstancias particulares del caso de autos, no es posible encontrar en la conducta de cada uno de ellos, elementos





que den cuenta de haberse valido de dicha condición en la comisión del delito materia de autos que sean posibles de separar o distinguir de aquellos por los cuales se ha tenido por concurrente la circunstancia calificante de alevosía, según se detalla en el considerando vigésimo quinto del presente fallo, en particular en sus párrafos segundo y tercero. No puede desconocerse que tanto la agravante en comento como la alevosía comparten, a lo menos parcialmente, un similar fundamento para el mayor reproche jurídico penal, por la mayor indefensión en que se encuentra la víctima frente al perpetrador del ilícito. Desde esa perspectiva, se advierte que la aceptación de la agravante invocada importaría una vulneración del principio de *ne bis in idem*, pues ha sido precisamente su pertenencia al aparato estatal, y concretamente al Ejército, la que ha permitido estimar que han obrado “sobre seguro” en el homicidio de un civil desarmado que se encontraba bajo su custodia. Dicho de otro modo, no es dable imaginar que el ilícito materia de autos hubiera podido ser cometido por civiles ajenos a las estructuras del poder público, por lo que desestimaré la concurrencia de la circunstancia agravante de responsabilidad penal en análisis, en el caso que nos convoca.

**Cuadragésimo séptimo:** Que la querellante Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos ha requerido que se consideren aplicables al presente proceso otras dos circunstancias modificatorias, a saber, las agravantes previstas en los numerales 10 y 11 del artículo 12 del Código Penal, esto es, cuando los inculpados ejecutan el delito “con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia”, y cuando lo comento “con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcione la impunidad”.

En relación con la primera de las agravantes invocadas, se cita el artículo 1 del Decreto Ley N°5, de 12 de septiembre de 1973 en relación con lo dispuesto en los anteriores decretos leyes dictados por la Junta Militar. Para el caso concreto indica que esta circunstancia agravante aplica toda vez que luego del asesinato no se realizó investigación seria alguna para determinar realmente las circunstancias de la muerte, ni las razones de ésta, ni los responsables, circunstancia que terminó por amparar la impunidad del homicidio calificado cometido por los acusados.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

Respecto a la segunda agravante, sostiene que es menester recordar el contexto histórico y sociopolítico, el de contar con el aval de una dictadura, que emplea todos sus medios para perseguir a sus opositores, violando sus derechos humanos más básicos. Ese contexto es el que dotó de un manto de impunidad a los victimarios, para cometer este horrible crimen, con la certeza de que no sufrirían ninguna consecuencia posterior por ello por parte de la justicia.

**Cuadragésimo octavo:** Que, en cuanto a la agravante contemplada en el numeral 10 del artículo 12 del Código Penal, invocada por la querellante, si bien es cierto que este delito se ejecutó cuando se había decretado estado de sitio por conmoción interna, lo cierto es que aquel fue un estado de guerra presunto y no real, porque “conmoción”, de conformidad al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en lo que podría aplicarse a esta situación, consiste en: “Tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo”, circunstancia que no aconteció en la especie, desde que las Fuerzas Armadas tomaron el control del país de forma total e inmediata; por lo expuesto, se desestimaré esta agravante.

Por otro lado, en lo que mira a la segunda agravante alegada, esto es, ejecutarlo con auxilio de gente armada o de personas que aseguren o proporcionen la impunidad, se trata nuevamente de circunstancias que han servido ya para el agravamiento del injusto a través de la figura del homicidio calificado, al haberse calificado la conducta de los acusados de alevosa, por haber actuado en contra de una víctima que no podía ejercer ninguna resistencia, lo que torna improcedente que se les considere nuevamente a título de agravante. Cabe hacer presente, además, que el reproche formulado por la querellante al contexto sociopolítico de la dictadura militar en el cual se verificó el crimen de Joaquín Espinoza Ojeda ya ha sido igualmente tenido en cuenta al momento de calificar el ilícito materia de autos como un crimen de lesa humanidad.

**Cuadragésimo noveno:** Que ambas defensas han solicitado, para el evento de dictación de sentencia condenatoria, que se acoja la circunstancia minorante muy calificada del artículo 103 del Código Penal, por haber transcurrido más de la mitad del plazo de prescripción. Al efecto, la defensa de Lorca Escobar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

sostiene que para el caso que no se acoja la prescripción de la acción penal, dicha negativa no es incompatible con la aplicación de la atenuante de la prescripción gradual, puesto que la media prescripción tiene una naturaleza jurídica distinta a la prescripción, ya que la dispuesta en el artículo 103 del Código Penal es una circunstancia que atenúa la responsabilidad penal y la otra es una eximente de responsabilidad que busca dejar sin sanción a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de esta clase. Señala que así lo ha sostenido la jurisprudencia de nuestros tribunales, en que dicha institución tiene como objetivo solamente atenuar el quantum de la condena sin evitar la responsabilidad ni el castigo. Agrega que la norma del artículo 103 es de carácter imperativo y una norma de orden público, lo que implica que, cumpliéndose los requisitos necesarios para que esta proceda, debe ser aplicada por el juzgador, resultando obligatoria para el sentenciador en virtud del Principio de Legalidad que rige en el Derecho Penal. Cita jurisprudencia nacional internacional.

Por su parte, el representante de Ferrer Ducaud se limitó a indicar que se reunirían los presupuestos legales para la aplicación de la atenuante en concreto.

**Quincuagésimo:** Que las referidas alegaciones de los defensores, no serán aceptadas respecto del homicidio calificado, por cuanto la media prescripción o prescripción gradual es una institución que, para que opere, requiere en forma previa que se determine el rango de tiempo necesario para extinguir la responsabilidad por prescripción de la acción penal o de la pena, lo que no resulta posible en el caso de autos, al haberse establecido que el delito investigado es un delito de lesa humanidad, lo que conlleva el carácter de imprescriptible. Por ende, al no existir plazo alguno de prescripción a su respecto que contabilizar, resulta lógicamente imposible establecer cuándo haya transcurrido la mitad de ese plazo que, como se ha dicho, es inexistente.

Por otra parte, la aplicación de la prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal, “atenta en contra del principio de efectiva administración de justicia y sanción a graves violaciones a los derechos humanos y al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, generando impunidad” y “afecta la proporcionalidad que debe regir al momento de determinar las sanciones



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

en casos de graves violaciones a los derechos humanos”, como lo ha resuelto recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente a propósito de algunos casos en que dicha figura atenuada fue admitida por los tribunales nacionales. No podría ser de otro modo, atendida la proscripción que contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la aplicación de cualquier estatuto limitativo a los crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad, como ha sido ya expuesto en el considerando quinto del presente fallo, a propósito de la prescripción de la acción penal. No está demás hacer presente que, tanto la prescripción como la prescripción gradual benefician al responsable de un delito en consideración a los efectos que provoca el transcurso del tiempo en la necesidad de la pena, la estabilidad social y la seguridad jurídica, efectos que no se presentan respecto de los delitos declarados imprescriptibles.

Por las razones expuestas se rechaza la aplicación de la prescripción gradual, contemplada en el artículo 103 del Código Penal.

**Quincuagésimo primero:** Que fue igualmente solicitado por ambas defensas la aplicación en beneficio de sus representados de la normativa contenida en los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, limitándose en sus argumentaciones a la reproducción de las disposiciones legales pertinentes, pidiendo además la Defensa de Lorca Escobar que se tenga dicha atenuante como una circunstancia muy calificada.

**Quincuagésimo segundo:** Que, en lo que mira a la concurrencia de la circunstancia atenuante de haber obrado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico, es menester tener presente que nuestro Código de Justicia Militar, reconociendo el carácter extremadamente jerárquico de las instituciones castrenses, ha previsto efectivamente un régimen de atenuación respecto de delitos cometidos en cumplimiento de la orden dictada por un superior, cuya norma base está contenida en el artículo 211, que sólo requiere la acreditación de que la conducta desplegada por el agente responda precisamente al cumplimiento de una orden, y que esa orden haya sido recibida de parte de un superior jerárquico en la línea de mando. Se trata de una normativa que, en tanto atenuante, no contraría los principios de derecho internacional en materia de



delitos de lesa humanidad, encontrando sustento en el artículo 8° del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, pudiendo eventualmente considerarse incluida en la Regla 145 N°2 letra a) i), en relación con el artículo 33 del Estatuto de Roma.

Con todo, para efectos de la aplicabilidad de la atenuante en comento, así como para la variante calificada prevista en el artículo 214 del Código de Justicia Militar, resulta imprescindible que se acrediten sus supuestos fácticos, a saber, que exista efectivamente un comando u orden dirigida al acusado en cuestión, cuyo contenido sea congruente con la conducta típica que se le imputa, y que dicha orden haya emanado de un superior jerárquico de quien la recibió.

**Quincuagésimo tercero:** Que la propia descripción fáctica contenida en la acusación da cuenta de la existencia de una orden verbal, al indicar *el coronel Ortiz Gutmann salió sobresaltado, abalanzándose sobre la víctima, ordenando en ese instante al Cabo Lorca Escobar que le disparara con el arma larga que portaba*. Se trata, por lo demás, de un hecho claramente asentado con la prueba rendida en el proceso, ya a partir del testimonio de doña Rosaura Barraza Araya, siendo también útil en este punto la corroboración contenida en las declaraciones de don Mario Villalobos Medina y don Juan Bravo Marín, a las que ya se ha hecho referencia, y especialmente la narración efectuada por el acusado Ferrer Ducaud, quien da cuenta de esa circunstancia en todas sus indagatorias, señalando que estuvo presente cuando vio a Ortiz Gutman *ordenándole a un funcionario subalterno de la Escuela de Blindado que disparara contra el sujeto, con su fusil de cargo, procediendo como le habían ordenado, cayendo el sujeto al piso, fallecido*; en otra declaración señala que observó cuando Ortiz Gutman *ordenó al suboficial que disparara con un fusil que portaba, no era un problema de mi responsabilidad. Yo estaba allí y presencié cuando el coronel le dio la orden de disparar*. Estos antecedentes permiten, en consecuencia, corroborar los asertos del acusado Lorca Escobar, quien sostuvo que; *Yo disparé, pero luego de que le habían disparado al señor Espinoza, ya estaba en el suelo la persona, pasó un lapso desde que dispararon y hasta que reacciona el coronel Adrián Ortiz Gutman y dice “ustedes por qué no disparan” y disparé*. Debe tenerse además presente



que, si bien varios de los testigos manifestaron que el coronel Ortiz Gutman habría efectuado disparos a la víctima de estos autos, ello ha quedado descartado de conformidad con el relato de quienes concurren al lugar inmediatamente de ocurridos los hechos, que concuerdan en que Ortiz Gutman no portaba armas y que presentaba una lesión en una de sus manos. Sin embargo, ello no impidió que el propio coronel asumiera la autoría del hecho ante su superior, según lo refiere Luis Meza Espinoza, lo que resulta coherente con la asunción de la responsabilidad por la orden que él había dado en ese mismo sentido.

De lo expuesto aparece que, en lo que mira al acusado Miguel Ángel Lorca Escobar, se reúnen todos los requisitos para tener por concurrente la atenuante en los términos previstos en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, toda vez que recibió una orden directa de la persona con mayor rango presente en ese momento en la Intendencia de Antofagasta, cuyo contenido era precisamente disparar a la víctima de autos, lo que se condice exactamente con la conducta reprochada al encausado, quien a la época se desempeñaba en labores de guardia en la misma repartición, por lo tanto, claramente en situación de subordinación respecto de Ortiz Gutman. Por otro lado, atendido que bajo ningún concepto es posible estimar que la orden dada por el coronel Ortiz Gutman haya sido una “orden de servicio” no resulta procedente dar aplicación a la disposición del artículo 214 del código citado.

**Quincuagésimo cuarto:** Que, distinta es la situación del mayor Ferrer Ducaud, por cuanto su intervención en el hecho, anterior a los disparos efectuados por Lorca Escobar, de conformidad con la dinámica establecida a partir de los testimonios y pruebas periciales rendidas en el proceso, no encuentra respaldo en orden alguna, la que por lo demás tampoco se contiene ni en su relato ni en el de su coimputado. Al contrario, del relato consistentemente mantenido por Lorca Escobar, que merece mayor credibilidad por aparecer suficientemente corroborado por los restantes testimonios de las personas presentes el día de los hechos en la Intendencia, así como por las pruebas periciales dispuestas con ocasión de las diligencias de reconstitución de escena, se llega a una conclusión opuesta. En efecto, a través de sus diversas declaraciones, el acusado Lorca Escobar ha



narrado de manera circunstanciada y coherente que la orden de disparar a Espinoza Ojeda la recibió cuando la víctima ya había recibido los impactos del personal que acompañaba a Ortiz Gutman. Es así como a fojas 1.308 refiere *“Al detenido le dispararon con el armamento de servicio, el personal de oficiales tenía pistolas y con esas pistolas les dispararon y el coronel nos dijo a mí y al soldado que qué estábamos esperando y nos ordenó que disparáramos, cuando yo disparé el detenido estaba en el suelo, ya había sido herido”*. Luego, a fojas 1592, expone que *“cuando me ordenaron disparar ya le habían disparado al afectado. Yo estaba estupefacto, no entendía lo que estaba pasando y ahí recibí la orden de disparar, me dijeron y usted qué está esperando para disparar”*. Más adelante, en la diligencia de reconstitución de escena de fojas 1764, explicó que después de escuchar unos tiros, recibió la orden de disparar del coronel Ortiz Gutman, con la carabina Garand que portaba. También en la diligencia de careo con Ferrer, el acusado Lorca Escobar manifestó *“Al hombre lo hirieron con arma corta y cuando cae el coronel Ortiz dice que disparemos y ahí recién yo reacciono y disparo”*. En consecuencia, no es posible determinar que la conducta del acusado Ferrer Ducaud haya respondido a la intimación de una orden o comando de un superior, de modo que, faltando el sustrato básico de la atenuante en comento, ella deberá naturalmente ser desestimada.

**Quincuagésimo quinto:** Que ambas defensas han solicitado, igualmente, se acoja para sus representados la concurrencia de la atenuante contemplada en el numeral 6° del artículo 11 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior, agregando el abogado de Lorca Escobar que solicita que, en atención a su extracto de filiación y su hoja de vida militar, sumado a su carrera militar y testigos de conducta, se le tenga como una atenuante muy calificada.

La concurrencia de dicha minorante de responsabilidad aparece suficientemente demostrada con el mérito de los extractos de filiación y antecedentes de los acusados Patricio Ferrer Ducaud y Miguel Lorca Escobar, según consta a fojas 2.136 y 2.138, respectivamente, carentes de anotaciones pretéritas a la época de los hechos investigados en este proceso, a lo que se agrega, en el caso de Lorca Escobar, las declaraciones de sus testigos de



conducta de fojas 2.608 y siguientes, por lo que se acogerá la atenuante en comento, al momento de determinación de la pena. Sin perjuicio de ello, no obran en el proceso antecedentes que permitan darle el carácter de atenuante muy calificada respecto de ninguno de los acusados, por lo que la petición que en ese sentido formulase la defensa de Lorca Escobar será desechada.

**Quincuagésimo sexto:** Que, también fue alegada por ambos encausados la atenuante contemplada en el numeral 8 del artículo 11 del Código Penal, esto es, que su representado pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito, a lo que la defensa de Lorca Escobar adiciona que debe tenerse presente que efectuó los disparos una vez que la víctima ya había fenecido, por lo que solicita que se tenga la atenuante como una circunstancia muy calificada.

En este punto debe tenerse en consideración que ninguno de los dos acusados en este proceso se denunció voluntariamente, -valga recordar que a propósito de la muerte de Joaquín Espinoza Ojeda no se inició proceso judicial ni administrativo alguno en la época-, y que la presente causa se inició recién en el año 2011, por requerimiento de la Sra. Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sólo cuando concurrió la Policía a interrogar a Ferrer Ducaud según consta a fojas 304 o cuando compareció judicialmente Lorca Escobar a fojas 1315, declararon sobre lo ocurrido el día de los hechos. Tampoco es posible considerar que se encuentren confesos. En el caso de Patricio Ferrer, ha negado toda responsabilidad en el ilícito, y pese a que relató en detalle su versión de lo que pasó ese día en la Intendencia, afirmó que él solo presenció el hecho por encontrarse casualmente en el lugar, culpando en todo momento a otra persona como el autor de los disparos. En cuanto a Miguel Lorca Escobar, si bien admite haber disparado, no acepta responsabilidad en la muerte de Espinoza Ojeda, indicando que no apuntó al cuerpo, o que el disparo rebotó en el suelo, o incluso que disparó cuando la víctima ya había fallecido. Por estos motivos, no concurriendo los presupuestos fácticos exigidos por el Legislador, se desestimará esta atenuante.





**Quincuagésimo séptimo:** Que la defensa de Ferrer Ducaud incluyó dentro de las atenuantes invocadas en su favor, la prevista en el artículo 11 número 1 del Código Penal en relación con el artículo 10 N°10 del mismo cuerpo legal, sin explicar las razones por las cuales sostiene su concurrencia en el caso de autos. En todo caso, se rechazarán tanto la circunstancia eximente de responsabilidad criminal establecida en el artículo 10 número 10 del Código Penal, como la atenuante dispuesta por el artículo 11 número 1 del mismo cuerpo legal, teniendo para ello presente que en caso alguno el ajusticiamiento de un civil desarmado puede considerarse como una actividad integrante de los deberes del acusado, ni como militar, ni como funcionario, sin que tampoco se haya acreditado que su conducta se haya enmarcado en el contexto de las actividades que le habían sido encomendadas dentro de sus labores de inteligencia al interior de la Intendencia de Antofagasta.

**Quincuagésimo octavo:** Que, pese a no haber sido solicitado, se reconocerá respecto del acusado Miguel Ángel Lorca Escobar la circunstancia atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos prevista en el artículo 11 N°9 del Código Penal, en su actual redacción y que resulta aplicable en beneficio del acusado de acuerdo con el principio de Ley más favorable consagrado en el artículo 18 del mismo cuerpo legal. En este punto, debe destacarse que las múltiples y detalladas declaraciones de dicho acusado, ubicándose en el lugar de los hechos, reconociendo haber conducido e incluso conversado con el occiso, y admitiendo haberle disparado por orden de su superior, así como su intervención en la diligencia de reconstitución de escena, han sido fundamentales para arribar a convicción respecto de la dinámica precisa en que ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte a don Joaquín Espinoza Ojeda.

**Determinación de la pena:**

**Quincuagésimo noveno:** Que, para la aplicación de la pena concreta a cada uno de los sentenciados, habrá de considerarse que, según lo que previene el artículo 391 N°1, circunstancia primera del Código Penal vigente a la época de los hechos, el homicidio calificado se encontraba sancionado con una pena que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

iba desde el presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Teniendo en consideración que beneficia al acusado Patricio Ferrer Ducaud la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, sin que concurran otras modificatorias de responsabilidad penal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 inciso segundo del Código Penal el tribunal se encuentra impedido de aplicar el grado máximo, por lo que la pena se regulará en el tramo de presidio mayor en su grado medio, en el quantum que se indicará en lo resolutivo y que tendrá especialmente presente la extensión del mal ocasionado a la víctima.

En lo que respecta al acusado Miguel Lorca Escobar, considerando que le benefician las circunstancias atenuantes de irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, y la de haber ejecutado el delito con ocasión de una orden de un superior jerárquico, sin que existan agravantes de responsabilidad que incidan en la determinación de la pena, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero de la norma citada, se rebajará la pena en dos grados, a presidio menor en su grado máximo, en la forma que se indicará, incorporando la extensión del daño infligido al momento de determinar la duración de la sanción a imponer.

**Sexagésimo:** Que se rechazará la solicitud de la defensa del acusado Ferrer Ducaud en orden a concederle alguno de los beneficios establecidos como medida alternativa a las penas privativas o restrictivas de libertad por la Ley 18.216, vigente en la época en que se cometió el delito que nos ocupa, toda vez que, atendida la extensión de la pena que se le impondrá, ello resulta improcedente.

**Sexagésimo primero:** Que, en relación con la situación del sentenciado Lorca Escobar, las atenuantes que le favorecen, la ausencia de anotaciones penales pretéritas, y el tenor de los testimonios de conducta e informes allegados al proceso, permiten dar cuenta de cómo ha sido su conducta anterior, y posterior al hecho punible, así como cuáles fueron móviles determinantes de su actuar ilícito, todo lo cual permite concluir que un tratamiento en libertad aparece eficaz y necesario, en el caso específico, para una efectiva readaptación y resocialización del sentenciado. Si se considera la duración de la pena privativa de libertad, ello le



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN

permitiría acceder a una medida alternativa a su cumplimiento efectivo. En este punto se tendrá especialmente presente, que el sentenciado reunía los requisitos para acceder a la medida de libertad vigilada de acuerdo con la regulación existente con anterioridad a la dictación de la Ley 20.603, que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2013, esto es, más de cuarenta años después de ocurridos los hechos, y cuando ya habían transcurrido más de dos años de iniciada la presente causa, sin que pueda verse perjudicado el sentenciado por la dilación en la tramitación del proceso judicial, y teniendo igualmente presente la normativa contenida en el artículo 18 inciso segundo del Código Penal, que torna ineludible la aplicación de una Ley posterior que otorgue un tratamiento más benigno al penado. En consecuencia, se concederá al sentenciado Lorca Escobar la ya señalada medida alternativa de Libertad Vigilada, en la forma que se expresará.

Y teniendo presente lo previsto en las normas legales citadas, y en los artículos 5° inciso 2° y 19 N°3 inciso 8° de la Constitución Política de la República; 1, 11 numerales 6 y 9, 12 N°1, 14 N°1, 15 N°1, 18, 28, 29, 63, 64, 68, 69 y 391 del Código Penal; 211 del Código de Justicia Militar; 14 y 15 de la Ley 18.216, se resuelve:

**I.-** Que SE DESESTIMAN las excepciones de previo y especial pronunciamiento opuestas por la Defensa del encausado Lorca Escobar.

**II.-** Que se condena a **Patricio Gerardo Ferrer Ducaud**, ya individualizado, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en grado consumado, de don Joaquín Espinoza Ojeda, cometido el día 15 de septiembre de 1973, en términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, a la pena de DOCE AÑOS de presidio mayor en su grado medio, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.

No concurriendo en la especie los requisitos establecidos en la Ley 18.216 no se le concede ningún beneficio de cumplimiento alternativo de la condena, por lo que deberá cumplir la pena efectiva, sin que existan abonos que considerar en su favor.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWEXQVJMSN

**III.-** Que se condena a **Miguel Ángel Lorca Escobar**, ya individualizado, en calidad de autor del delito de homicidio calificado, en grado consumado, de don Joaquín Espinoza Ojeda, cometido el día 15 de septiembre de 1973, en términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, a la pena de CUATRO AÑOS de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y al pago de las costas de la causa.

**IV.-** Que, reuniéndose respecto del sentenciado **Miguel Ángel Lorca Escobar** los requisitos legales, en la forma referida en el considerando sexagésimo primero, se le concederá la medida alternativa de **Libertad Vigilada**, por un término idéntico al de la pena corporal impuesta, quedando sujeto a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el período indicado y dar cumplimiento a las restantes condiciones previstas en el artículo 17 de la Ley 18.216.

En el evento de ser revocada la medida señalada, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma íntegra, sirviéndole de abono el tiempo que permaneció privado de libertad con ocasión de este proceso, entre el veinte y el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, esto es, cuatro días.

Notifíquese personalmente a los sentenciados.

Notifíquese a los apoderados de las partes, por intermedio del receptor de turno del presente mes o del Centro Integrado de Notificaciones del Poder Judicial, exhortando al efecto, si fuere necesario.

Ejecutoriada que sea la sentencia, cúmplase con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal.

Regístrese y consúltese, si no se apelare.

**ROL N°8-2011 (Antofagasta).**

**FIRMADIGITAL**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWEXQVJMSN

Sentencia pronunciada por el Ministro en Visita Extraordinaria don Sergio Troncoso Espinoza y autorizada por la Secretaria (S) doña Soledad Sepúlveda Fonck.

FIRMADIGITAL



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: WWXEXQVJMSN